

7,50 €

Nº 78
Verano 2002

PAPELES

DE CUESTIONES INTERNACIONALES

EEUU Y SUS RESPUESTAS ANTE EL GENOCIDIO

por Samantha Power

Artículos sobre
Cachemira, Venezuela,
Filipinas y el conflicto
en Colombia

Informe sobre Sri Lanka

Human Rights Watch:
La destrucción de Yenín

Análisis de Phyllis Bennis,
Saul Landau,
Isaías Barreñada
y Jean-Paul Marthoz

PAPELES n^o 78 - 2002

De cuestiones internacionales

Director

Mariano Aguirre

Consejo de Redacción

Julián C. Carranza, Teresa Filesi, Vicenç Fisas, Manuela Mesa,
Alberto Piris, Francisco Rey, José María Tortosa

Coordinación y edición

Nieves Zúñiga García-Falces

Distribución

Rosa Vaquero

Colaboradores habituales y asesores

Jesús M. Alemany, Ana Alonso, Lucía Alonso, Patrick Costello, Javier Díaz Malledo, Alfonso Dubois, Johan Galtung, Vicente Garrido, Susan George, Xabier Gorostiaga, Fred Halliday, Michael T. Klare, Saul Landau, Robert Matthews, Maxine Molyneux, José M. M. Medem, Roberto Montoya, Ignacio Ramonet, Francisco Rojas Aravena, Pedro Sáez, José A. Sanahuja, Dan Smith, Joe Stork, Berna Wang

Papeles es una publicación trimestral del Centro de Investigación para la Paz (CIP), que forma parte de la Fundación Hogar del Empleado

El CIP realiza diversas actividades sobre paz, seguridad y desarrollo.

Información sobre las actividades de la Fundación Hogar del Empleado y el CIP pueden solicitarse a Duque de Sesto, 40, 28009 Madrid.

Tel.: (91) 576 32 99. Fax: (91) 577 47 26.

Correo electrónico: cip@fuhem.es

Web: www.cip.fuhem.es

Documentación: cd@fuhem.es

Diseño de portada: Pedro Arjona

Diseño interior: Marian Cao

I.S.S.N.: 0214-8072

Depósito legal: M- 30.281 - 1993

Foto de portada: Reuters. Foto cedida por AlertNet (www.alertnet.org), la web de la Fundación Reuters para la comunidad de ayuda humanitaria.

Las opiniones de los artículos publicados no reflejan necesariamente las del Centro de Investigación para la Paz y son responsabilidad de los autores.

Impresa en papel ecológico.

Copyright: Fundación Hogar del Empleado. Todos los derechos reservados. Para solicitar autorización de reproducción de artículos, escribir al Centro de Investigación para la Paz.

INTRODUCCIÓN 5

TEORÍA

EEUU y sus respuestas ante el genocidio 9

Samantha Power

ACTUALIDAD

¿Palestina o “Palestinistán”? 23

Isaías Barreñada

George junior en el país de las maravillas 33

Phyllis Bennis

La Venezuela fracturada de Hugo Chávez 39

Laura Ruiz Jiménez

Un golpe sin profesionalidad 47

Saul Landau

Un nuevo horizonte para el desarrollo africano 53

José Guimón

Filipinas, un Estado acosado 63

César Docampo

Cachemira: la obstinación de la identidad 73

Nicolás Dorronsoro

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS

Europa tiene un papel que cumplir en Colombia 83

Centro de Investigación para la Paz

Informe: Violencia continua en Sri Lanka 89

Carolina María Rudas Gómez

INDIGENISMO

Conflicto mapuche en Chile 105

Ignacio Barrientos Pardo

EDUCACIÓN

Conocer lo que pasa: la educación para la paz después del 11 de septiembre 117

Xesús R. Jares

Sumario

LECTURAS SOBRE EDUCACIÓN

- Los valores en la educación,
de Pedro Ortega y Ramón Mínguez** 127
M^a Antonia García Marín
-

DERECHOS HUMANOS

- Situación de refugiados palestinos en Yenín** 133
Human Rights Watch
-

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- Comunicarse en un mundo globalizado** 145
Jean-Paul Marthoz
-

RESEÑAS DE LIBROS

- El derecho de gentes, de John Rawls** 153
Alfonso Verdú Pérez

- La guerra sucia, de Habib Souaïdia** 156
Rosa Meneses

- Aiding Recovery? The crisis of aid in chronic
political emergencies, de Joanna Macrae** 159
Karlos Pérez

- Terrorismo religioso, de Mark Jüergensmeyer** 164
Jesús María Alemany

- Delivers us from evil: warlords,
peacekeepers and a world of endless
conflict, de William Shawcross** 166
Kimmie Wise

- Desplazamiento forzado en Colombia,
de Mabel González Bustelo** 168
Beatriz Sánchez Mojica

- La retirada del Estado, de Susan Strange** 170
César Docampo
-

BIBLIOGRAFÍA

- Conflicto en Colombia** 175
Susana Fernández Herrero
-

La denominada “guerra contra el terrorismo” se ha convertido en una cortina de humo que oculta otras prioridades. En pocos meses, la lucha contra la pobreza ha sido marginada (conferencia de Monterrey), los derechos humanos han quedado en segundo plano (Conferencia de la ONU sobre estos derechos que ha pasado inadvertida en los medios), el Derecho Internacional Humanitario supeditado a la dura realidad de la guerra (en Guantánamo y Afganistán), y los problemas de género aparentemente se han acabado porque —según se anunció— las mujeres afganas ya son libres, al haber pasado de la dominación talibán a la de los nuevos gobernantes.

En tiempos de mitificaciones es conveniente, entre otras tareas, volver atrás, mirar detenidamente algunos procesos y ver qué ocurre y qué ha ocurrido, cómo ha reaccionado la denominada comunidad internacional, en particular EEUU, en otras circunstancias dramáticas, aparte del 11 de septiembre pasado. El ensayo de Samantha Power que aquí se publica muestra de qué manera los Gobiernos en Bill Clinton y George W. Bush Jr. mantuvieron una actitud pasiva y minimizaron premeditadamente la información sobre los genocidios en los Balcanes y Ruanda, en los años noventa, con el fin de no comprometerse en estas cuestiones. En contra del pensamiento extendido de que EEUU trata de intervenir militarmente en todas las situaciones posibles, esta investigadora muestra que ese país tiene una tradición y una política de inhibición en casos de violaciones masivas de los derechos humanos.

El trabajo de Power tiene especial relevancia después de que los Gobiernos de EEUU y Gran Bretaña declararan en 1999, al final de la guerra en Kosovo, que no volverían a cometerse violaciones masivas de los derechos humanos contra minorías. Sin embargo, Rusia continúa aplastando a Chechenia y, a partir del 11 de septiembre, el mundo ha empezado a estar otra vez dividido, como durante la Guerra Fría, entre los amigos que apoyan la agenda antiterrorista y los enemigos, practiquen la política que practiquen.

Ante los delitos de genocidio es necesario construir un régimen internacional basado en los instrumentos jurídicos existentes y en

prácticas políticas universales y consecuentes. Ahora que EEUU ha recuperado su posición de liderazgo en el mundo, es necesario que desde Europa se tenga claridad jurídica, política y moral acerca de qué posición se va a adoptar hacia las víctimas de los guerras y de Gobiernos dictatoriales, para no hacer una política sesgada, inmoral y peligrosa.

El papel de Europa y sus responsabilidades están presentes en la toma de posición y comunicado de prensa que el CIP emitió en abril pasado sobre el conflicto en Colombia, apoyando que las negociaciones de paz no estén solamente vinculadas a los actores armados, sino que se potencien y apoyen iniciativas de la sociedad civil. Igualmente, las perspectivas futuras para los palestinos son muy malas si Israel prosigue con su plan de controlarlos, reprimirlos y aislarlos en un régimen con fuertes similitudes con el *apartheid* surafricano, como explica Isaías Barreñada en este número. El informe de Human Rights Watch sobre la ofensiva israelí en el campo de refugiados de Yenín indica esa voluntad de destrucción y el ensayo de Phyllis Bennis muestra el apoyo de EEUU a esa política.

Este número de *Papeles* presenta también análisis sobre el intento de golpe de Estado en Venezuela, el debate sobre el desarrollo en África Subsahariana, la situación en Filipinas, Sri Lanka a partir del reciente acuerdo de paz y la volátil y peligrosa tensión bélica entre Pakistán y la India, dos Estados con armas nucleares. Otros temas que se abordan son el conflicto de los mapuches en Chile, ensayos sobre la educación para la paz y reseñas de libros sobre terrorismo religioso, la ayuda de emergencia en crisis humanitarias y las tesis de la fallecida investigadora británica Susan Strange sobre el papel del Estado moderno.

Mariano Aguirre

**EEUU y sus respuestas
ante el genocidio**

9

Teoría

SAMANTHA POWER

EEUU y sus respuestas ante el genocidio

En el último siglo EEUU ha experimentado una evolución modesta en sus respuestas al genocidio y a la destrucción deliberada de un grupo étnico, nacional o religioso. La persistencia y proliferación de disidentes en el seno del Gobierno estadounidense y entre los defensores de los derechos humanos, han logrado que la política del mutismo frente al genocidio sea aún más difícil de sostener. Tal como ha aprendido el presidente serbio Slobodan Milosevic, la soberanía estatal ya no es una coartada eficaz para quien incurre en un delito de genocidio contra una intervención militar o un castigo judicial.

Tal avance se ha visto eclipsado por la tolerancia estadounidense hacia estremecedoras atrocidades a menudo cometidas a plena luz del día. Aunque los personajes y las limitaciones geopolíticas que inciden en el proceso de toma de decisiones en EEUU han cambiado con los años, el país se ha negado constantemente a asumir riesgos que pudiesen llevar a la eliminación del genocidio. En este aspecto EEUU no cabalga solo. Los Estados colindantes de las sociedades que perpetran el genocidio y las potencias europeas también han sido culpables al mostrar indiferencia ante la situación. A pesar de un amplio consenso público de que el genocidio no debería ser tolerado “nunca jamás” y pese a cierto triunfalismo sobre el auge de los valores de la democracia liberal, la década de 1990 ha sido una de las más trágicas del siglo más siniestro de la historia. Los hutus ruandeses en 1994 fueron capaces de asesinar libre y alegremente, y de manera sistemática, a cerca de ocho mil tutsis diarios durante cien días sin ninguna interferencia extranjera. El genocidio tuvo lugar después de la guerra fría, del desarrollo de grupos a favor de los derechos humanos, del advenimiento de la tecnología que permitió la comunicación inmediata, y de la construcción del Museo del Holocausto en el Mall de Washington.

De una forma perversa, la conciencia de la opinión pública estadounidense sobre el Holocausto a menudo parecía que ponía el listón de la desazón tan alto que éramos capaces de convencernos de que los genocidios contemporáneos no

Samantha Power es Directora Ejecutiva del Carr Center For Human Rights Policy y autora del libro *A problem From hell: America and The age of genocide*, Basic Books, Nueva York, 2002. Este artículo fue publicado en The New York Review of Books, 14 de marzo de 2002, con el título “Genocide and America”. Reproducido con autorización de la autora.

Traducción:
Leandro Nagore

eran para tanto. Como lo constató el escritor David Rieff, el concepto de “nunca jamás” podría definirse más concretamente como “nunca jamás podrían los alemanes matar a judíos en Europa en los años cuarenta”.¹ Ya sea por mirar al otro lado o por atender asuntos estratégicos o políticos más urgentes, desde un punto de vista convencional, los líderes de EEUU que han denunciado el Holocausto han permitido, a su vez, el genocidio.

Lo que más sorprende de la reacción estadounidense ante la matanza de casi un millón de armenios por parte de Turquía, o sobre el reino de terror de Pol Pot en el que murieron cerca de dos millones de personas, o de la muerte de más de cien mil kurdos por los iraquíes, o del asesinato en masa de unos doscientos mil musulmanes y croatas a manos de los serbios de Bosnia y del intento de los hutus de eliminar a los tutsis, no es que EEUU se negase a desplegar sus tropas para combatir estas atrocidades. Durante gran parte del siglo, hasta los más fervientes partidarios de la intervención no presionaron para que EEUU emprendiera invasiones terrestres. Los responsables de la política de Washington no hicieron casi nada para evitar los crímenes. Al no considerar que peligraban los “intereses nacionales vitales” de EEUU por su mera existencia, los altos funcionarios de la política estadounidense no otorgaron al genocidio la atención moral que requería. En vez de desarrollar el camino hacia la intervención —ya sea condenando a los culpables, cortando el suministro de la ayuda estadounidense o, incluso, bombardeando o reuniendo una fuerza de combate multinacional— parecían confiar en la negociación, aferrándose a las sutilezas diplomáticas y a la “neutralidad”, mientras enviaban ayuda humanitaria.

En algunos casos EEUU ayudó, directa o indirectamente, a los culpables de genocidio. En 1979 el Gobierno de Carter orquestó el voto en el Comité de Credenciales de Naciones Unidas para que favoreciese a los Jemerres Rojos, permitiendo que estos brutales exaltados ocupasen el asiento de Camboya en Naciones Unidas durante una década tras su derrota. En 1987-1988 el Gobierno de Reagan proveyó más de 500 millones de dólares anuales en créditos agrícolas y para bienes manufacturados a Irak, mientras Sadam Husein intentaba liquidar la población rural kurda del país. Entre 1992 y 1995, junto con sus aliados europeos, los Gobiernos de Bush y de Clinton mantuvieron un embargo sobre las armas contra los musulmanes de Bosnia aún cuando era evidente que el embargo armamentístico impedía que los musulmanes se defendiesen por sí mismos. Reticentes a “americanizar” la guerra o a “tomar partido”, congelaron una situación de desequilibrio de armamento que beneficiaba al agresor. En abril de 1994, mientras continuaba la guerra en Bosnia, el Gobierno de Clinton influyó sobre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ordenar la retirada de las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU en Ruanda y bloquear los esfuerzos por volver a enviarlas a dicho país. EEUU y sus aliados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prometieron proteger a los pueblos de Bosnia y de Ruanda, algo que no estaban dispuestos a cumplir.

¹ David Rieff, *Slaughterhouse: Bosnia and the Failure of the West*, Simon and Schuster, Nueva York, 1995.

¿Por qué EEUU sigue mirando sin hacer casi nada?

La respuesta más corriente es, “no lo sabíamos”. Lo cual no es cierto. La información proveniente de países destrozados por el genocidio no era perfecta: el personal de la Embajada fue repatriado, las fuentes de información sobre el terreno eran escasas, los directores no estaban dispuestos a enviar a sus periodistas a lugares que carecían de atractivo tanto para los lectores como para los intereses estadounidenses, y cuando los periodistas intentaban informar sobre las atrocidades encontraban limitaciones a su libertad de movimiento. Por ejemplo, los Jemeres Rojos cerraron Camboya totalmente, obligando a los periodistas a trabajar desde la frontera con Tailandia para sonsacar información a los camboyanos que tuviesen la suerte de abandonar el país. El puñado de valerosos periodistas occidentales que se quedaron en Ruanda durante el genocidio no pudieron salir de la capital, Kigali, más que en contadas ocasiones. Las declaraciones de los supervivientes eran difíciles de confirmar y la complejidad para determinar las cifras de fallecidos tristemente notoria. Al estar el genocidio generalmente oscurecido por la sombra de la guerra, algunos funcionarios estadounidenses tuvieron, en un primer momento, dificultades para distinguir la masacre deliberada de civiles de las víctimas acaecidas en un conflicto convencional.

Aunque los funcionarios estadounidenses no conocieran todo lo posible sobre la naturaleza y el grado de la violencia, lo que sabían no era poco. Desde Henry Morgenthau, embajador de EEUU en Constantinopla en 1915, hasta Charles Twining, experto sobre Camboya de la Embajada estadounidense en Bangkok en 1976 y 1977, o Jon Western, un analista subalterno del servicio de información que recopiló informes sobre las atrocidades ocurridas en Bosnia en 1993, los funcionarios estadounidenses han constituido una fuente constante de información para los rangos superiores y hacia los órganos decisorios —tanto sobre la alerta temprana de genocidios potenciales como a través de informes muy gráficos durante su transcurso—. Gran parte de la mejor información apareció en los periódicos matutinos. En 1915, cuando los medios de comunicación eran aún muy primitivos, el *New York Times* publicó 145 artículos sobre el genocidio armenio por parte de los turcos. Casi ochenta años después, el mismo periódico informó sólo cuatro días después del inicio del genocidio en Ruanda de que “decenas de miles” de ruandeses ya habían sido asesinados. Dedicó una mayor cantidad de centímetros de columnas impresas a los horrores de Bosnia entre 1992 y 1995 que a cualquier otro asunto de política internacional.

En una época de información inmediata, los funcionarios estadounidenses han pasado de proclamar que “no lo sabían” a sugerir —como lo hizo el presidente Clinton en 1998 en su discurso de disculpa por lo ocurrido en Ruanda— que no “lograron valorar correctamente” el crimen en curso. Esto también es engañoso. Es cierto que las atrocidades de las que se tenía conocimiento se mantuvieron abstractas y lejanas, raras veces logrando la categoría de noticia que estremeciera al ciudadano estadounidense. Por ser la brutalidad del genocidio algo que desafía nuestra experiencia diaria, muchos de nosotros no fuimos capaces de comprender la gravedad de la situación. Poco a poco aceptamos la depravación que supuso el Holocausto, pero en nuestras conciencias lo encasillamos como “historia”; nos

En una época de información inmediata, los funcionarios estadounidenses han pasado de proclamar que “no lo sabían” a sugerir que no “lograron valorar correctamente” el crimen

resistimos a reconocer que el genocidio estaba ocurriendo en el presente. Los supervivientes y los testigos tuvieron enormes dificultades en hacer creíble lo increíble. Los espectadores fueron capaces de retirarse al “crepúsculo entre lo conocido y lo desconocido”.²

Pero esto no nos sirve como coartada. Somos responsables de nuestra incredulidad. Las historias que surgen de las sociedades sometidas al genocidio son, por definición, increíbles. Esta fue la lección que deberíamos haber aprendido del Holocausto. En todos los casos de genocidio, testimonios que nos parecían exagerados e imposibles de verificar de manera independiente han demostrado, en repetidas ocasiones, ser verídicos. Con tantas buenas esperanzas truncadas, hace tiempo que tendríamos que haber desplazado el peso de la prueba de los refugiados hacia los escépticos, que tendrían en este caso que dar razones de peso para refutar las alegaciones de los testigos oculares. Una predisposición hacia la credulidad haría menos daño que una inclinación hacia la incredulidad.

Estrategias de actuación

Los funcionarios estadounidenses han mostrado cierta reticencia para llegar a imaginar lo inimaginable debido a sus implicaciones. Creer que Sadam Husein atacaba con armas químicas a los ciudadanos kurdos habría obligado a los funcionarios estadounidenses a replantear su asociación “estratégica” con él. Aceptar que los refugiados musulmanes de Srebrenica habían visto montones de cuerpos apilados al borde de la carretera habría presionado a EEUU para enfrentarse con las tropas serbias del general Mladic o con sus propias conciencias. En vez de buscar un conocimiento más profundo o dar publicidad a lo que ya se conocía, los funcionarios estadounidenses se han refugiado invariablemente en las penumbras del rechazo plausible. Han usado la búsqueda de la certeza como excusa para su pasividad y para el aplazamiento. En términos generales, en los casos de genocidio documentados en mi libro *A Problem from Hell*,³ los funcionarios estadounidenses decidieron que no “sabían” o no “lograr valorar correctamente”.

Una segunda respuesta a la pregunta de por qué EEUU no ha actuado más es que tampoco podría haber hecho mucho para frenar el horror. La única manera de determinar las consecuencias de las medidas diplomáticas, económicas o militares de EEUU hubiese sido tomándolas. Sin embargo, sí sabemos que los responsables de genocidio fueron buenos estudiantes y buenos conocedores de las tácticas de sus sangrientos predecesores, como de las reacciones de la comunidad internacional. De sus brutales antepasados aprendieron todo lo necesario, desde cómo deshumanizar a sus víctimas y el uso de eufemismos, a la construcción de campos de concentración y la forma de mentir y ocultar sus crímenes. Del resto del mundo aprendieron la impunidad.

² W. A. Visser't Hooft, teólogo protestante y primer secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, que vivió en Suiza durante el Holocausto, utilizó esta frase en sus *Memorias*, SCM Press, Londres, 1973.

³ Samantha Power, *A Problem from Hell*, Basic Books, Nueva York, 2002.

Un ejemplo de la capacidad de EEUU para ejercer su influencia sería la atención que pusieron los organizadores de actos de genocidio sobre Washington y otras capitales occidentales mientras planeaban sus acciones. El ministro del interior turco, Talaat Pasha, observó a menudo que nadie impidió que el sultán Abdul Hamid asesinase a los armenios. Hitler se envalentonó al constatar que absolutamente nadie “recordaba a los armenios”. Sadam Husein, haciendo buena nota de la escasa reacción de la comunidad internacional a sus ataques con armas químicas contra Irán y de su política de arrasar pueblos kurdos, asumió, lógicamente, que no se le castigaría por el uso de gases venenosos contra los kurdos. Los pistoleros ruandeses, al inicio de su campaña de genocidio, pusieron deliberadamente a las tropas pacificadoras belgas en su punto de mira al recordar la reacción de EEUU tras la muerte de dieciocho soldados estadounidenses en Somalia en 1993, razonando que la muerte de soldados occidentales probablemente precipitaría su retirada. Los serbios de Bosnia celebraron públicamente las muertes en Mogadiscio, rebosantes de una nueva confianza de que nunca tendrían que hacer frente a tropas estadounidenses sobre el terreno. Milosevic se percató de que se salió con la suya en su brutal supresión de un movimiento independentista en Croacia en 1991, y pensaba que no tendría que pagar precio alguno por perpetrar un genocidio tanto en Bosnia como en Kosovo.

Como tantas personas estaban matando por primera vez y teniendo que decidir día a día hasta dónde iban a llegar, EEUU y sus aliados gozaron de oportunidades inmejorables para intentar detenerles, pero no lo hicieron. Cuando ignoraron el genocidio en el mundo, los funcionarios estadounidenses ciertamente no tenían la intención de dar el visto bueno a aquellos que lo cometían. Pero ya que algunos de los que lo perpetraron lo hicieron con el convencimiento de que estaban haciendo un favor al mundo al “limpiarlo” de “indeseables”, probablemente interpretaron este silencio como una prueba de consentimiento o incluso de apoyo.

Aunque sea imposible de comprobar el resultado de acciones nunca emprendidas, la mejor prueba de lo que podría haber conseguido EEUU es precisamente ver lo que lograron. A pesar de los ríos de tinta que corrieron sobre la posible futilidad de cualquier intervención de EEUU, en las escasas ocasiones en que actuó, sí hizo una diferencia. Después de las condenas por parte del secretario de Estado, George Shultz, contra el uso de gases venenosos por Sadam Husein contra los kurdos y los vanos esfuerzos del senador Clairborne Pell para que se impusiesen sanciones en 1988, Sadam Husein no volvió a usar dichos gases. Tras los llamamientos del Gobierno turco y el encuentro personal del secretario de Estado James Baker con refugiados kurdos, EEUU, en 1991, se unió con sus aliados para crear una zona de seguridad en el norte de Irak, permitiendo el retorno a sus hogares de más de un millón de kurdos. A escala más pequeña, el dueño de un hotel ruandés asegura que unas llamadas de teléfono de un diplomático estadounidense ayudaron a convencer a las milicias de que no atacaran a los huéspedes tutsis de su hotel durante el genocidio.

Los bombardeos de la OTAN en Bosnia, cuando finalmente llegaron en 1995, pusieron fin rápidamente a tres años y medio de guerra. Los bombardeos de la OTAN en Kosovo, en ese mismo año, permitieron la liberación de 1,7 millones de albaneses del tiránico yugo serbio. Varios arrestos de la OTAN en la antigua

*EEUU y sus
aliados
gozaron de
oportunidades
inmejorables
para intentar
detener a los
responsables
de genocidio,
pero no lo
hicieron*

Yugoslavia ha llevado a que docenas de supuestos criminales de guerra se entreguen a las autoridades. No se puede asumir que toda medida contemplada por los funcionarios estadounidenses o por los partidarios de las ONG podría haber sido efectiva, pero incluso estos pequeños pasos atrasados ayudaron a salvar cientos de miles de vidas. Si EEUU hubiese tratado la prevención del genocidio como una prioridad hubiese podido salvar muchas más.

Pasividad política y social

El verdadero motivo por el que EEUU no hizo lo que pudo para poner fin al genocidio no fue la falta de conocimientos o de influencia sino la ausencia de voluntad. Los líderes estadounidenses no actuaron porque no quisieron hacerlo. Creían que el genocidio era malvado pero no estaban preparados para invertir el capital militar, financiero, diplomático o de política doméstica necesario para detenerlo. Las políticas de EEUU formuladas como respuestas al genocidio en el siglo XX no fueron los productos accidentales de la negligencia. Fueron decisiones concretas hechas por las personas más influyentes en el proceso de la toma de decisiones de este país una vez sopesados explícita y tácitamente los costes y beneficios.

Los diseñadores de la política de EEUU (generalmente con el apoyo pasivo de la mayoría de los miembros del Congreso) perseguían dos objetivos. En primer lugar, querían evitar involucrarse en conflictos que suponían una amenaza mínima para los intereses estadounidenses, definidos estrechamente. En segundo lugar, esperaban poder contener los gastos políticos y evitar el estigma moral asociado con el hecho de tolerar que el genocidio tuviera lugar. En gran medida, lograron ambos objetivos. Para contener las repercusiones políticas, los funcionarios estadounidenses exageraron la ambigüedad de los hechos. Hicieron hincapié en la probable futilidad, perversidad y peligro de cualquier intervención propuesta. Evitaron, de manera constante, el uso de la palabra "genocidio", que pensaban que entrañaba una obligación legal y moral (y por lo tanto política) de actuar. Y se consolaron con las operaciones normales de la burocracia de la política exterior, que ofrecían un espejismo de deliberación continua, de actividad compleja y de intensa preocupación. Una de las principales conclusiones a las que he llegado es que el servicio de EEUU no es un fracaso, sino un éxito. Por incomodo que sea de aceptar, los funcionarios estadounidenses pusieron el sistema en funcionamiento y el sistema funcionó.

Para comprender por qué EEUU no hizo más para acabar completamente con el genocidio no es suficiente concentrarse únicamente en las acciones de los presidentes o de sus equipos de política exterior. En una democracia, incluso un Gobierno poco dispuesto a actuar puede ser presionado para que lo haga. Esta presión puede provenir desde dentro o desde fuera. Los burócratas que operan en el sistema y que comprenden lo que está en juego pueden presionar pacientemente o agitarse de manera descarada con la esperanza de obligar a sus jefes a tener en cuenta un amplio espectro de opciones. Desgraciadamente, aunque todo genocidio generó algo de activismo departamento de Política Exterior estadounidense, los funcionarios tanto en el país como en el exterior hicieron caso de lo que percibieron

como una indiferencia presidencial o una apatía pública. Asumieron que la política estadounidense era inmutable, que sus preocupaciones ya eran tenidas en cuenta por sus superiores y que haciéndose oír (o ver) sólo limitaría su capacidad para mejorar la respuesta de EEUU. En Bosnia tuvo lugar el único genocidio del siglo XX que hizo reaccionar al Gobierno de EEUU. En 1992 y 1993 dimitieron cuatro funcionarios de exteriores del Departamento de Estado. No es coincidencia que el caso de Bosnia fue el único en el que las protestas de los funcionarios de exteriores fueron animadas diariamente por el activismo de la prensa y del público.

El Ejecutivo tampoco ha sentido ninguna presión desde el segundo frente posible: el doméstico. Los líderes estadounidenses han podido dar la espalda al genocidio precisamente porque el ocurrido en tierras lejanas no ha cautivado la atención de los Senadores, de los grupos del Congreso, de los que ejercen presiones en Washington, de los destacados analistas de opinión, de los grupos de base o de los ciudadanos individuales. Aunque voces aisladas se han alzado contra la masacre, los estadounidenses ajenos al Ejecutivo callaron cuando más importaba. Como consecuencia del silencio de toda la sociedad, los funcionarios del Gobierno calcularon que los gastos, en términos de política interna, de una intervención para prevenir el genocidio eran mayores que los posibles gastos de mantenerse al margen. Las excepciones que hasta ahora han confirmado la regla son: la decisión de Ronald Reagan en 1985 de exigir la ratificación de la convención sobre el genocidio después de que su visita a las tumbas de la SS en Bitburg provocase una oleada de protestas internas; y la determinación por parte de Bill Clinton de lanzar los bombardeos de la OTAN en Bosnia sólo después de que el líder de la mayoría en el Senado (y futuro candidato presidencial), Bob Dole, se uniese con activistas consiguiendo que Clinton sintiese que estaba siendo ridiculizado al permitir las atrocidades serbias.

El genocidio nunca ha conseguido captar la suficiente atención por sus propios méritos. Se requiere presión política para situarlo en el primer plano de la actualidad en Washington. Cuando Alison Des Forges, de Human Rights Watch, se reunió con el consejero de Seguridad Nacional, Anthony Lake, tras el inicio del genocidio en Ruanda, éste le informó de que los teléfonos no estaban sonando y de que había escasa repercusión pública. “¡Haced más ruido!”, le pidió. Ya que tan poco ruido se ha hecho sobre el genocidio, los órganos decisorios de EEUU se han opuesto a toda intervención, diciéndose a sí mismos que estaban haciendo todo lo que podían —y todo lo que debían hacer— en vista de los diferentes intereses estadounidenses en juego y de un conocimiento bastante circunscrito de lo que era “posible” que hiciese desde un punto de vista interno.

Sin embargo, la inercia de los gobernados no puede disociarse de la indiferencia del Gobierno. La relación que mantienen los líderes estadounidenses con la opinión pública es tanto circular como deliberada. Circular en el sentido de que sus votantes se interesan poco o nada en las crisis internacionales, incluido el genocidio, por la falta de liderazgo político, y a la vez los funcionarios estadounidenses citan continuamente la ausencia de apoyo público como motivo para la inacción. A su vez, esta relación es deliberada ya que el liderazgo de EEUU no ha estado ausente en estas circunstancias, pero se ha concentrado principalmente en minimizar el clamor público.

*Los
funcionarios
del Gobierno
calcularon
que los gastos
de una
intervención
para prevenir
el genocidio
eran mayores
que los de
mantenerse
al margen*

Un procedimiento que podría alterar los cálculos de los líderes de EEUU sería el de hacerles públicamente o profesionalmente responsables de las consecuencias de la inactividad. Los funcionarios estadounidenses han sido condicionados para temer las repercusiones por decisiones que toman y políticas que elaboran y que fracasan. Pero ninguno teme pagar un precio elevado por sus pecados de omisión. Si, al interior del Gobierno, todos están motivados para evitar “otra Somalia” u “otro Vietnam”, pocos se lo piensan dos veces sobre el papel a desempeñar para evitar “otro Ruanda”.

Otros países e instituciones cuyo personal estaba físicamente sobre el terreno cuando tuvo lugar el genocidio han emprendido por lo menos un mínimo de introspección. Los Países Bajos, Francia, y Naciones Unidas han llevado a cabo investigaciones sobre su responsabilidad en la caída de Srebrenica y las masacres que le siguieron. Pero cuando los investigadores de Naciones Unidas solicitaron la cooperación de la misión de EEUU ante Naciones Unidas en Nueva York, sus llamadas no fueron atendidas. Se le prohibió al equipo de la ONU que entablase cualquier contacto independiente con los empleados del Gobierno de EEUU. A los investigadores se les permitió el acceso a un grupo de funcionarios preseleccionados, de bajo y mediano rango, que no revelaron casi nada de lo que las autoridades estadounidenses conocían durante las masacres de Srebrenica.

Los franceses, los belgas, Naciones Unidas, y la Organización de la Unidad Africana han patrocinado investigaciones sobre la responsabilidad por el genocidio en Ruanda. Pero en EEUU, cuando algunos miembros del grupo del Congreso intentaron llevar a cabo audiencias sobre el papel desempeñado (o no desempeñado) por EEUU, fueron rechazados. Dos funcionarios del equipo de Clinton, uno en el Consejo de Seguridad Nacional y otro en el Departamento de Estado, realizaron estudios internos sobre la respuesta del Ejecutivo a la masacre en Ruanda. Pero sólo examinaron los diferentes informes ya existentes y no desvelaron sus conclusiones al público. EEUU necesita que el Congreso pueda realizar investigaciones con el poder de exigir la comparecencia de funcionarios de cualquier rango, tanto de la rama ejecutiva como de la legislativa y, de tener acceso a todos los documentos existentes. Sin una revelación significativa de los hechos, sin conocimiento público y sin vergüenza oficial, es difícil imaginar que la respuesta de EEUU mejore en el futuro.

Incluso las tentativas no gubernamentales que pretenden determinar las distintas responsabilidades podrían cambiar las cosas. En septiembre de 2001, el *Atlantic Monthly* publicó los resultados de mis tres años de investigación sobre la respuesta del Gobierno de Clinton ante el genocidio en Ruanda. Unas semanas después, según funcionarios del Consejo Nacional de Seguridad, una nota interna llegó a la mesa del presidente George W. Bush sobre el asunto de la prevención del genocidio. La nota resumía los resultados del artículo del *Atlantic* y advertía sobre la probable erupción de violencia étnica en Burundi. Durante la campaña electoral del año anterior, Bush declaró que detener el genocidio no era asunto de EEUU. “No me gusta el genocidio ni la limpieza étnica”, dijo Bush a Sam Donaldson de la cadena ABC, “pero no mandaré a nuestras tropas”. Sin embargo, una vez elegido y siendo presentado con una relación de los fracasos del Gobierno de Clinton, Bush anotó con letra firme en el margen de la nota, “no mientras yo esté de guardia”. Mientras fuese comandante en jefe, el genocidio no volvería a ocurrir.

La anotación de Bush fue una declaración de intenciones, pero en realidad estaba recogiendo las palabras de todos los demás presidentes de EEUU que juraron que “nunca jamás”. Para poner en práctica sus palabras, tendría que comprometerse de manera significativa, tanto públicamente como burocráticamente, con la erradicación del genocidio. Tanto él como sus más allegados asesores de política exterior deberían emitir una directiva presidencial explícita, conseguir apoyos con sus discursos, consultar con sus aliados y exigir la preparación de un plan militar de contingencias. Si no, es muy poco probable que los funcionarios o ciudadanos estadounidenses se comporten de una forma distinta la próxima vez que chovinistas étnicos liquiden de manera sistemática a un grupo minoritario. En cualquier caso, el 11 de septiembre de 2001, pocos días después de que el presidente escribiese esas palabras, unos terroristas islámicos convirtieron a cuatro aviones civiles estadounidenses en bombas humanas, matando a más de tres mil personas, destrozando la sensación de invulnerabilidad del país y forzando al presidente a canalizar los recursos estadounidenses hacia una “guerra contra el terrorismo” de larga duración.

Cuando EEUU es la víctima

El ataque contra EEUU el 11 de septiembre cambiará considerablemente la política exterior del país. El atentado podría hacer que los estadounidenses, tanto dentro como fuera del Gobierno, sean capaces de empatizar mejor con las víctimas de genocidio. Los fanáticos que ponen a EEUU en su punto de mira se parecen a los culpables de genocidio por su adopción de la responsabilidad colectiva más salvaje. Atacan a civiles, no por lo que estos hayan hecho de manera individual, sino por quienes son. Para ser sentenciado a una pena de muerte en el siglo XX, bastaba con ser armenio, judío o tutsi. El 11 de septiembre bastaba con ser un ciudadano estadounidense. En 1994, Ruanda, con cerca de ocho millones de habitantes, sufrió el equivalente numérico de más de dos ataques diarios contra el World Trade Center durante cien días. A escala estadounidense esto significaría veintitrés millones de personas asesinadas en tres meses. Cuando el 12 de septiembre, EEUU se dirigió a sus amigos en todo el mundo para solicitar ayuda, los estadounidenses quedaron muy satisfechos con la abrumadora respuesta. Cuando los tutsis pidieron ayuda todos los países del mundo hicieron oídos sordos.

Si los estadounidenses consiguen mejorar su capacidad para imaginar las masacres e identificarse con las víctimas, lo más probable es que el Gobierno de EEUU considerará la prevención del genocidio como una tarea que no puede permitirse ahora que se propone fortalecer la protección de los ciudadanos estadounidenses. Muchos opinan que la lucha contra el terrorismo supone ahorrar los recursos nacionales y evitar intervenciones humanitarias, que se considera que dañifican la capacidad de respuesta de EEUU. La intervención en Kosovo y el juicio a Milosevic, que se pensó supondría un precedente importante, puede que representen la huella de la mayor crecida en la prevención y castigo del genocidio.

Esto sería un error trágico y en definitiva contraproducente. EEUU debería convertir la oposición al genocidio en una prioridad, por dos motivos. El primero y

La historia ha demostrado que el sufrimiento de las víctimas, por sí sólo, raras veces ha movilizad a EEUU

más importante, es el moral. Cuando vidas inocentes están siendo asesinadas a tal escala y EEUU tiene el poder de poner fin a las matanzas asumiendo un riesgo razonable, tiene la obligación de actuar. Esta idea es la que motiva a la mayoría de los que abogan por la intervención. Pero la historia ha demostrado que el sufrimiento de las víctimas, por sí sólo, raras veces ha movilizad a EEUU.

Por tanto, incluso los que creen en la responsabilidad moral de EEUU han intentado defender el caso apelando al segundo motivo: un interés propio ilustrado. Permitir el genocidio erosiona la seguridad regional e internacional, producía refugiados militantes y ofrecía a los tiranos una señal de que el odio y el asesinato eran herramientas permitidas para gobernar. Sin embargo, debido a que estas amenazas para los intereses estadounidenses eran a largo plazo y no inmediatamente visibles, pocas veces convencieron a los dirigentes estadounidenses. De este modo, la intervención humanitaria tuvo lugar en las contadas ocasiones en las que los intereses de EEUU estaban en juego en un plazo más corto.

Si resultaba difícil antes del 11 de septiembre conseguir que los órganos decisorios de EEUU viesen los costes a largo plazo de tolerar el genocidio, será aún más difícil hoy en día cuando las necesidades de seguridad de EEUU son tan acuciantes y visibles. Pero la seguridad para los estadounidenses, tanto en casa como en el exterior, depende de la estabilidad internacional y puede que no haya una fuente de desorden mayor que un grupo de extremistas bien armados empeñados en eliminar a comunidades enteras basándose en criterios étnicos, nacionales o religiosos.

Los Gobiernos occidentales, generalmente, han intentado contener el genocidio apaciguando a sus actores. Pero el triste historial del último siglo demuestra que los muros que EEUU está intentando construir alrededor de las sociedades donde se perpetra el genocidio se desmoronan de forma casi inevitable. Los Estados que asesinan y torturan a sus propios ciudadanos ponen el punto de mira sobre ciudadanos de cualquier lugar. Sus apetitos se tornan insaciables. Hitler empezó persiguiendo a sus propios ciudadanos antes de ir a la guerra contra el resto de Europa y, eventualmente, contra EEUU. Sadam Husein liquidó la población rural kurda y luego se volvió hacia Kuwait, mandando a su sicario homicida, Ali Hassan al-Majid, para gobernar el territorio recién ocupado. EEUU tiene motivos para temer que las armas químicas que ensayó Sadam Husein sobre los kurdos serán usadas próximamente contra estadounidenses. Milosevic llevó sus guerras de Eslovenia a Croacia y luego a Kosovo. EEUU y sus aliados europeos todavía están pagando por su indiferencia inicial hacia los Balcanes, donde la violencia en Macedonia amenaza con socavar la estabilidad del sudeste de Europa.

La sed de venganza, irredentismo y aceptación de la violencia como medio para generar el cambio que en ocasiones se origina en las víctimas del genocidio, abandonadas por la comunidad internacional, puede convertirlos en futuras amenazas. En Bosnia, donde EEUU y Europa mantuvieron un embargo de armas contra los musulmanes, guerreros extremistas islámicos y proselitistas llegaron eventualmente para ofrecer su ayuda. Algunos ciudadanos musulmanes seglares se radicalizaron por esta asociación, y el fracasado Estado de Bosnia

se convirtió en un refugio para los terroristas islámicos mal recibidos en el resto del mundo. Una de las organizaciones que se infiltró en Bosnia y que la utilizó como base de entrenamientos fue *Al-Qaeda* de Osama Bin Laden.

EEUU no deberían limitar sus elecciones de política exterior entre: no hacer nada o mandar, de forma unilateral, a los marines. Debido a la enormidad del daño que causa el genocidio, su prevención es una tarea que debe ser compartida. El liderazgo de EEUU será indispensable para alentar a los aliados de los estadounidenses y a las instituciones regionales e internacionales para que aumenten sus compromisos y sus capacidades militares. Al mismo tiempo, EEUU debe responder al genocidio con una mayor sensación de urgencia, identificando públicamente y amenazando con enjuiciar a aquellos responsables de genocidio, exigiendo la expulsión de los representantes de regímenes culpables de genocidio de las instituciones internacionales como Naciones Unidas, cerrando sus embajadas en EEUU y pidiendo a los países afines que usen su influencia para intentar poner fin a las matanzas.

Cuando la situación lo requiera, EEUU podría imponer sanciones económicas, congelar bienes en el extranjero de Gobiernos asesinos o usar los recursos tecnológicos estadounidenses para privar a los asesinos de sus transmisiones de radio o de otros medios usados para propagar el odio. Con sus aliados, EEUU podría establecer zonas de seguridad para acoger a refugiados y a civiles, para protegerlos con fuerzas de mantenimiento de la paz bien armadas y con un mandato firme, con su poderío aéreo, o con ambas. Cuando los valores y los intereses más preciados de EEUU están en peligro —como lo están cuando un pueblo entero está amenazado por la aniquilación— debe estar preparado para arriesgar la vida de sus soldados al servicio de la eliminación de este monstruoso crimen.

¿Palestina o “Palestinistán”?	23
George junior en el país de las maravillas	33
La Venezuela fracturada de Hugo Chávez	39
Un golpe sin profesionalidad	47
Un nuevo horizonte para el desarrollo africano	53
Filipinas, un Estado acosado	63
Cachemira: la obstinación de la identidad	73

ISAÍAS BARREÑADA

¿Palestina o “Palestinistán”?

El cese de las negociaciones y la violencia que se vive en Palestina e Israel desde hace más de año y medio, han revelado las contradicciones y limitaciones del proceso de Oslo, y han puesto de manifiesto el proyecto que sostuvo Israel y, una vez más, la incapacidad de la comunidad internacional de actuar con coherencia ante un conflicto. Ahora se decide si la entidad palestina será un Estado viable o un protectorado de Israel.

El levantamiento del pueblo palestino en Cisjordania y Gaza, iniciado en septiembre de 2000, fue la ilustración más significativa del fin del proceso de paz. La Intifada significó la respuesta popular ante dos hechos. El primero fue el fracaso de la cumbre de Camp David II, donde el tándem israelí-estadounidense pretendió imponer a los palestinos, sin éxito, una fórmula de estatuto final.¹ Arafat no podía aceptar que Israel anexara los grandes bloques de asentamientos, legalizando lo que había llevado a cabo durante más de 30 años de ocupación en Cisjordania; que el Estado hebreo pretendiera que el palestino se estableciera sobre cuatro islotes desconexos; y que no se reconociera el derecho al retorno de los refugiados palestinos. El segundo derivó de la actitud del Gobierno laborista hebreo. Tan pronto como retornó de Washington, Barak responsabilizó a Arafat del fracaso de la cumbre. No haber aceptado la “generosa oferta” israelí le descalificaba como interlocutor y como socio para construir la paz. Cuando Arafat dejó de asentir a los imperativos israelíes, dejó de ser funcional.

Ambas cuestiones confirmaron a la población palestina que Israel no estaba dispuesto a cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas y que con el proceso de paz sólo buscaba legalizar la ocupación y hacer de la futura entidad palestina una reserva tutelada, un bantustán. Para una población que a lo largo de las negociaciones había vivido un progresivo empobrecimiento y una creciente frustración, el levantamiento fue el grito desesperado que pedía el fin inmediato de la ocupación.

¹ En la Declaración de Principios (septiembre de 1993) se estableció que a partir del tercer año del periodo interino de cinco, las partes abordarían las negociaciones sobre el estatuto final (carácter y base territorial de la entidad palestina, refugiados, futuro de Jerusalén, acuerdos de seguridad, agua). Estas negociaciones se retrasaron con la llegada del Likud al Gobierno (1996-1999) y se retomaron con la vuelta de los laboristas.

Isaías Barreñada es politólogo, trabaja sobre las relaciones internacionales, la política y los movimientos sociales en el Norte de África y Oriente Próximo

El Gobierno laborista respondió a la protesta popular con medios militares y reocupando zonas transferidas a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), y aplicó planes de hacía varios años ante previsibles contingencias.² Incluso extendió esas medidas a sus propios ciudadanos árabes que se manifestaron en solidaridad con los palestinos de las zonas ocupadas. La violencia policial y la intervención de francotiradores se saldó con varios muertos. Se iniciaba una espiral de violencia que ha durado más de 19 meses.

A finales de 2000, diversos factores rompían la coalición que mantenía al Gobierno israelí y provocaba el adelanto de las elecciones a Primer Ministro. Hasta el último momento, con la ayuda del presidente Clinton que quería cerrar su mandato con un éxito diplomático, los laboristas pensaron poder alcanzar un acuerdo final con los palestinos. En las negociaciones de Taba (enero 2001) estuvieron muy cerca de un acuerdo, pero una vez más, el proceso de paz volvió a ser rehén de la política interna israelí. A principios de febrero, el dirigente derechista Ariel Sharon ganaba las elecciones, no sólo porque prometía seguridad, mano dura e inflexibilidad con los palestinos, sino también porque se benefició del voto de los descontentos, de los religiosos y de las clases menos favorecidas temerosas de ser los paganos del proyecto de normalización regional. Los laboristas perdían las elecciones por haber fracasado en las negociaciones y por haberse enajenado el voto árabe, esencial para construir cualquier mayoría de izquierda en Israel.

Reocupación de lo ocupado

El nuevo Gobierno de unidad nacional, en el que los laboristas conservaron, entre otras, las carteras de Asuntos Exteriores y Defensa, siguió con la política de mano dura, alimentando con ello la dinámica de violencia. Entre 1987 y 1991 la primera Intifada combinó la resistencia con la desobediencia civil, la creación de redes productivas autónomas y la construcción de instituciones palestinas desvinculadas del ocupante.³ Este segundo levantamiento tuvo esencialmente un componente de resistencia armada. Implicó a diversas fuerzas militares sobre las cuales las direcciones políticas tenían una capacidad de control relativa. La policía palestina no pudo abstenerse de responder a las acciones militares israelíes.

El ejército israelí reocupó zonas transferidas total o parcialmente a la ANP⁴ y desató una campaña de asesinatos selectivos contra dirigentes palestinos. Con el control de las vías de comunicación congestionó totalmente los movimientos internos y limitó el acceso a Israel, con las implicaciones económicas y laborales que

² A lo largo del proceso de paz el ejército israelí definió una posible respuesta militar ante un eventual colapso de las negociaciones. Estos planes contingentes, conocidos desde 1996, se aplicaron a la Intifada. Ver Shraga Elam, *Between the lines*, Jerusalén, diciembre 2000, Nº 2. Una versión en castellano puede encontrarse en *Nación Árabe*, 2001, Nº 45, pp. 32-35.

³ José Abu-Tarbush, "Hacia un análisis sociológico de la Intifada palestina", *Sistema*, 1997, Nº 139, pp.113-126.

⁴ Al inicio de la Intifada, el repliegue israelí y el traspaso de competencias a la ANP era el siguiente: las zonas A (en las que las competencias civiles y policiales eran totalmente

conlleva. En muchas ocasiones los colonos contribuyeron activamente a la violencia. Todo ello exacerbó la respuesta palestina: se multiplicaron las acciones armadas en las zonas ocupadas contra militares y colonos, así como los atentados suicidas en el interior de Israel. La osadía y la eficacia de algunas acciones —emboscadas a patrullas encargadas de los controles, destrucción de tanques o la ejecución del ministro de Turismo Rehavam Zeevi—, así como el alto número de víctimas civiles en los atentados, exasperó al ocupante y reforzó la brutalidad de las respuestas. A la utilización de helicópteros, se sumó la intervención masiva de tanques; al bombardeo de instalaciones policiales siguió el derribo de viviendas.

El Gobierno de Israel condicionó la suspensión de las operaciones militares al cese de las acciones armadas palestinas. Ni siquiera las intervenciones de la comunidad internacional (informe de la Comisión Mitchell, mayo 2001) y de EEUU (Plan Tenet, junio 2001) para lograr un cese del fuego como paso previo a una retirada israelí y al retorno a las negociaciones, tuvieron el efecto esperado. La ANP no podía controlar las acciones armadas cuando Israel nunca se abstuvo de llevar a cabo sus castigos y ejecuciones selectivas.

Tras el 11 de septiembre, Israel encontró en la “lucha contra el terrorismo” su principal justificación para proseguir con las operaciones en los Territorios Ocupados. Obviando su condición de ocupante beligerante, Israel se presentó como víctima, esgrimió su derecho de legítima defensa y convirtió a la ANP en la responsable del terrorismo palestino. Gran parte de la opinión pública y de la comunidad internacional asumió el discurso israelí, amalgamando como terrorismo tanto la resistencia legítima como los atentados suicidas. En marzo, se amplió la reocupación de las áreas A de Cisjordania, hasta acorrallar al presidente Arafat en su cuartel general de Ramala durante un mes.

Destrucción sin límites

Para los palestinos este retorno a la violencia ha tenido un coste enorme. En año y medio se cuentan casi 1600 muertos y miles de heridos y detenidos.⁵ Los focos de resistencia han sido objeto de especial ensañamiento, como la brutal destrucción de una parte del campo de refugiados de Yenín⁶. Los daños materiales han alcanzado cotas nunca vistas. Las instituciones y los ministerios de la ANP han sido arrasados, al igual que los cuarteles de la policía y los organismos de seguridad.

palestinas) suponían el 60% de la Franja de Gaza y el 17% de Cisjordania; las zonas B (donde las competencias civiles habían sido transferidas a los palestinos y la seguridad era de gestión conjunta) suponían el 24% de Cisjordania; el resto, 40% de Gaza y 59% de Cisjordania, eran zonas C (bajo control israelí). Todo Jerusalén Este seguía bajo ocupación israelí al ser un asunto por debatir en las negociaciones finales.

⁵ Informe de Amnistía Internacional, *Israel y los Territorios Ocupados. El alto precio de las incursiones israelíes*, abril 2002 (AI: MDE 15/042/2002/s); ver también Miftah - The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue & Democracy (<http://www.miftah.org/>) y el Creciente Rojo Palestino (<http://www.palestinercs.org/>).

⁶ Ver informe de Human Rights Watch sobre el campo de refugiados de Yenín en este mismo número.

*Obviando su
condición de
ocupante
beligerante,
Israel se
presentó
como víctima
y convirtió a
la ANP en la
responsable
del terrorismo
palestino*

La acción armada israelí sólo satisface los sentimientos primarios de venganza que aplacan momentáneamente la sensación de inseguridad

Se han quemado los archivos y los censos. Han sido destruidas infraestructuras como el aeropuerto de Gaza, la televisión y las emisoras de radio. Numerosos centros de trabajo y escuelas han sido reducidos a escombros. Ni las ambulancias, los vehículos privados, los centros productivos, las viviendas particulares, los huertos y olivares o las ONG se han salvado de la destrucción o del pillaje. La reocupación, los cierres, los toques de queda prolongados y la destrucción han colapsado la economía palestina, dejando un pesado lastre para los próximos años.

Esta guerra no declarada también ha tenido un importante coste para Israel. Ha habido casi medio millar de muertos, entre civiles, colonos y militares, y miles de heridos.⁷ Se ha militarizado el país y se han restringido severamente las libertades (levantamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado árabe Azmi Bishara, limitaciones al trabajo de los periodistas, encarcelamiento de objetores). La economía israelí se ha resentido brutalmente estancándose el crecimiento. En 2001 el PIB cayó un 2,9% y las pérdidas fueron evaluadas en 2400 millones de dólares. Sectores como el turismo y la construcción están colapsados. La moneda se deprecia, las exportaciones han caído y el desempleo aumenta. Todo ello se ha traducido en recortes presupuestarios, afectando en primer lugar a los programas sociales. En lo político, la coalición de Gobierno está fracturada y sus componentes polarizados, la ultra derecha aboga por más represión y los laboristas están profundamente divididos. Nunca han sido tan agudas las tensiones entre la minoría árabe palestina y el *establishment* judío israelí. El viejo movimiento pacifista, como Paz Ahora y la izquierda sionista, han revelado sus enormes contradicciones. Secundaron el intento laborista de deslegitimación de Arafat, y luego, lamentando haberse quedado sin interlocutores palestinos, antepusieron su apego a los postulados sionistas y justificaron con ello su negativa a una paz global, basada en la justicia y el derecho.

Las operaciones militares, la reocupación y el despliegue de violencia han demostrado que el ejército de ocupación no puede impedir la resistencia. Durante la operación "Muralla defensiva" aumentaron los atentados en Israel y no se acabó con la violencia. La acción armada israelí sólo satisface los sentimientos primarios de venganza que aplacan momentáneamente la sensación de inseguridad. Todos son conscientes de que sólo mediante la negociación se puede alcanzar la paz. Quizás por ello, el Gobierno israelí no ha acabado con la ANP y su presidente. Con la destrucción y el confinamiento de éste se ha buscado humillarlo y debilitarlo política y económicamente. Colocarle en una situación límite para que acepte las nuevas condiciones del juego que dicte Israel. Si bien Arafat ha conseguido legitimarse como líder en su asedio, las condiciones del levantamiento del cerco (movilidad restringida, entrega de prisioneros a la custodia de fuerzas británicas y estadounidenses) señalan el grado de sometimiento que ha tenido que aceptar. Estas operaciones prefiguran el formato deseado por Israel para la entidad palestina: un protectorado débil y dependiente, en el que la ANP sea un simple ejecutor y policía local, un *bantustán*.

⁷ Según el ejército israelí, entre septiembre de 2000 y finales de abril de 2002, 472 israelíes habían resultado muertos (154 militares y 318 civiles, incluidos colonos) y aproximadamente 3850 heridos.

Lamentos y consentimiento internacional

La actitud de la comunidad internacional en estos meses ha sido una prolongación de su papel en los últimos siete años. En el proceso de paz israelí-palestino siempre ha habido intervención externa. Sin embargo, esta no ha servido para impedir su crisis y ha sido ineficaz para evitar, o al menos detener, la violencia. Cabría preguntarse si esta intervención no ha contribuido de alguna forma, por su parcialidad o por su falta de coherencia, a la crisis actual.

En esta singular presencia probablemente se han conjugado intereses particulares y falta de voluntad. La mayor parte de los actores han asumido tres premisas que han marcado su actuación:

- 1) La legitimidad fundacional de Israel es incuestionable. Con tal argumento se da pábulo a la victimización de Israel y se descarta cualquier medida de presión.
- 2) A pesar de la ilegalidad de las actuaciones de Israel se asume que ningún arreglo puede ser impuesto y que toda medida requiere su acuerdo. De esta forma, no sólo se ha permitido que Israel pilotase el proceso y se aprovechara de él, sino que se ha condicionado cualquier actuación internacional al visto bueno israelí.
- 3) Se condena la resistencia armada palestina, amalgamando todas sus versiones, a pesar de que en una situación extrema es un medio legítimo reconocido por el derecho internacional.⁸

Estas premisas han contribuido al fracaso de la vía diplomática, abocando a los palestinos a la resistencia. En el entorno árabe se ha vivido una efervescencia popular en solidaridad con los palestinos nunca vista hasta ahora. Las retransmisiones en televisión a pesar de las trabas puestas por Israel a los periodistas, el testimonio directo de la población acorralada en los debates de *al-Yazira* y la posibilidad de hablar vía teléfono móvil con los asediados, han estimulado la movilización. Todo ello ha puesto a los Estados árabes en una posición incómoda. Casi todos habían mostrado su voluntad de reforzar sus alianzas con EEUU, y para ello normalizar sus relaciones con Israel. Muchos establecieron relaciones diplomáticas y económicas con Israel. Sin embargo, en todos los países esta postura oficial ha sido contestada por la población en la calle. Ésta exige una resolución justa y global del conflicto basada en el derecho, previa a cualquier normalización con Israel. Además, la solidaridad con Palestina se asocia a la respuesta de las políticas entreguistas y se liga a demandas políticas internas de democratización. En Marruecos, Túnez, Jordania, Egipto o Bahrein las manifestaciones pro-Palestina se han percibido como actos subversivos y han sido prohibidas y reprimidas durante la Intifada. Ante la incapacidad de mantener

⁸ El 15 de abril de 2002 la resolución 2002/8 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU reafirmaba (pto. 1): “(...) que el pueblo palestino tiene el derecho legítimo a resistir la ocupación israelí con el objeto de liberar su tierra y de poder ejercer su derecho a la autodeterminación y que, haciéndolo, el pueblo palestino desempeña su misión, uno de los fines y objetivos de la Organización de las Naciones Unidas”...

tales medidas, algunos Gobiernos han intentado apropiarse de esta ola de solidaridad —en Rabat el Primer Ministro encabezó la manifestación, en Túnez se declaró una jornada oficial de solidaridad después de haber prohibido las manifestaciones—.

La propuesta saudí, asumida por la Cumbre de la Liga Árabe celebrada en Beirut, más que práctico, tuvo un valor simbólico hacia el exterior y hacia las poblaciones de sus países miembros. Los Estados árabes declararon estar dispuestos a la paz y a normalizar plenamente sus relaciones con Israel, siempre que el Estado hebreo pusiera fin a la ocupación. Por un lado, atendía a necesidades diplomáticas —tener un gesto de reconciliación con EEUU tras el 11 de septiembre—, por lo que recibió el apoyo excesivamente entusiasta de la comunidad internacional. Por otro, recordaba el carácter central de la ocupación. Sin embargo, el protagonismo internacional en el conflicto lo desempeña EEUU, la Unión Europea es el actor secundario, y Naciones Unidas es un figurante sobre el que recaen la mayor parte de los golpes.

La intervención internacional

EEUU ha sido, desde principios de los años setenta, el aliado estratégico de Israel y su principal proveedor de ayuda civil y militar.⁹ Su papel en el proceso de paz ha sido clave. Si bien Oslo fue de factura esencialmente israelí, toda su lógica contribuye al proyecto de nuevo orden regional que EEUU pretendió implantar tras la segunda guerra del Golfo. En el proceso de paz ha sido el único actor externo que ha contado con el visto bueno israelí. De esta forma, se anulaba cualquier posibilidad de que la mediación externa sirviera para reequilibrar las negociaciones entre partes tan desiguales. Más que un mediador o facilitador, EEUU ha actuado de manera parcial, sosteniendo las posiciones israelíes y financiando al ocupante. A pesar de las diferencias entre el Gobierno de Clinton y el Likud, EEUU fue participando de manera cada vez más directa según avanzaba el proceso. Desde 1997 la CIA intervino sobre el terreno (asesorando a las partes, vigilando el cumplimiento de los acuerdos). Luego, con el retorno de los laboristas, Clinton asumió la tarea de presionar a los palestinos para que aceptasen las propuestas israelíes (Camp David II).

⁹ A pesar de su tamaño y de su renta, Israel es el principal receptor mundial de ayuda estadounidense. Anualmente EEUU proporciona cerca de 3000 millones de dólares en ayuda civil (unos 1200 millones) y militar (1800 millones para compra de material). Contraviniendo su propia legislación (Foreign Assistance Act, FAA) que incluye una cláusula de condicionalidad democrática, una parte de esa ayuda sirve para la colonización de los territorios ocupados. Ver "US foreign aid to Israel" (<http://www.miftah.org/PrinterF.cfm?DocId=711>); "US assistance to Israel, FY 1949-FY 2001" (http://www.us-israel.org/jsource/US-Israel/U.S._Assistance_to_Israel1.html).

La ayuda estadounidense a Israel ha sido un componente extremadamente sensible de las relaciones bilaterales a lo largo del proceso de paz, aunque no ha sido utilizado de manera siempre efectiva como palanca de presión para reforzar compromisos políticos. Ver Scott Lasensky, "Underwriting peace in the Middle East: U.S. foreign policy and the limits of economic inducements", *Middle East Review of International Affairs*, 2002, (<http://meria.idc.ac.il/journal>).

El Gobierno republicano ha intervenido tardíamente en la crisis del proceso de paz, temeroso de los costes políticos internos que podría tener una implicación como la que llevó a cabo Clinton. Hechos como las declaraciones de Bush sobre Arafat o la visita del vicepresidente Cheney a la región evitando reunirse con Arafat, han contribuido a que su parcialidad mediadora fuese cada vez más criticada. En tal contexto, sus presiones sobre Israel han sido poco efectivas. No obstante, la creciente preocupación árabe ha obligado a EEUU a revisar su política.

La Unión Europea ha estado presente en todo el proceso, pero siempre ha asumido un papel secundario. Posee un triple *handicap*: su división interna en materia de política exterior,¹⁰ sus limitaciones a la hora de llevar a cabo acciones de presión sobre Israel y la percepción israelí (desde la declaración de Venecia, 13 junio 1980) de que Europa es pro-Palestina. Por eso acepta que Israel rechace su intervención y que haga de EEUU, actor mucho más parcial, el único mediador internacional. A pesar de ello, la UE ha defendido su presencia: por su cercanía geográfica y los intereses y riesgos directos que de ella derivan, porque los palestinos requieren su presencia, y porque no quiere dejar el único protagonismo a EEUU.¹¹ Combinar los obstáculos y sus intereses le ha llevado a definir una actuación singular que consiste en una presencia política subsidiaria, siguiendo las iniciativas diplomáticas y de seguridad de EEUU,¹² y en una actuación asistencial de primer orden. La UE ha sido el principal proveedor de ayuda financiera a la ANP y de asistencia humanitaria a la población palestina. Un gran número de proyectos financiados por la UE y los Estados Miembros han sido destruidos en los últimos meses —en marzo de 2002 se estimaba el valor de los daños en 17 millones de euros—.

El grado de violencia alcanzado en los últimos meses ha suscitado peticiones de una intervención europea más activa, considerando incluso sanciones contra Israel. Francia sugirió el reconocimiento del Estado palestino. El Parlamento Europeo (resolución 10 de abril 2002) y posteriormente el Consejo de Europa, pidieron al Consejo de la Unión la suspensión del acuerdo de asociación, un embargo de armas a las dos partes y apoyar el envío de una fuerza internacional de interposición.¹³ Bruselas ha declinado utilizar los instrumentos de que dispone —políticos,

La Unión Europea ha estado presente en todo el proceso, pero siempre ha asumido un papel secundario

¹⁰ En la cuestión palestina se evidencia la dificultad de definir una Política Exterior y de Seguridad Común coherente. Algunos Gobiernos europeos, como Francia, son partidarios de una política más autónoma, mientras que otros, muy cautos como Reino Unido, Alemania y Países Bajos, rechazan cualquier medida de presión sobre Israel.

¹¹ El conflicto israelí-palestino lastra toda la estrategia de asociación euromediterránea puesta en marcha en la Conferencia de Barcelona (noviembre 1995). A pesar de tener como objetivo declarado la creación de una zona de paz y de prosperidad compartida, se delegó en el Proceso de Oslo (y en los buenos oficios estadounidenses) la resolución negociada del conflicto. Finalmente la crisis del proceso de paz también ha gripado al proyecto Euromed.

¹² Es significativa la coincidencia de discursos: Miguel Angel Moratinos (enviado especial de la UE para Oriente Medio) ha venido subrayando que la UE debe apoyar las iniciativas estadounidenses; Simón Peres llama a la UE a seguir las posiciones de EEUU o ser neutral.

¹³ Israel compra en Europa armas y piezas para sus equipos militares. Es el caso de los motores para sus tanques Merkava adquiridos en Alemania. En los últimos cinco

pero principalmente económicos y comerciales— para presionar a Israel. Esto ha supuesto un deterioro importante de las relaciones entre Israel y la UE. Sharon ha negado el acceso de los diplomáticos europeos a la dirección de la ANP asediada y ha rechazado reunirse con delegaciones oficiales europeas.

Desde la Conferencia de Madrid, en octubre de 1991, Naciones Unidas, que debería haber sido el marco para celebrar una conferencia internacional y acordar un plan de arreglo, ha sido mantenida al margen del proceso de paz debido a la negativa israelí, secundada por EEUU. A pesar de sus limitaciones, la organización siempre ha sido un foro donde se ha denunciado la política israelí. Varias resoluciones condenan las actuaciones israelíes y obligan a Israel a aceptar el retorno de los refugiados (194 CS) y a retirarse de las zonas ocupadas (242 CS). Una agencia de la ONU sigue proveyendo de asistencia a los refugiados palestinos, lo que para Israel supone mantener un problema que debería haberse resuelto con la absorción en los países de acogida. Israel continúa resistiéndose a la intervención de la ONU, como lo demuestra su negativa al envío de una misión para investigar lo ocurrido en Yenín.¹⁴

Cada uno de los actores internacionales está lastrado por diferentes factores en su intervención en el conflicto. Quizás por ello se haya apuntado hacia la concertación internacional como vía más efectiva. El cuarteto (compuesto por EEUU, Federación Rusa, la UE y NNUU) planea convocar una conferencia internacional de paz para el próximo verano en la que se negocie un acuerdo final. Una fórmula que puede suponer un simple arreglo de mínimos o permitir un arreglo global conforme al derecho internacional, diluyéndose la responsabilidad (el estigma) de presionar a Israel.

Palestina viable y soberana versus “Palestinistán” tutelado

Los siete años que ha durado el proceso de Oslo, su crisis y el año y medio de Intifada han revelado claramente los objetivos de Israel. El Estado hebreo nunca asumió tener que retirarse completamente de las zonas ocupadas en 1967, incluida Jerusalén Este, y aceptar un acuerdo sobre los refugiados conforme a la resolución 194. Con Oslo pretendió modificar su control sobre Cisjordania y Gaza, pasando de una ocupación militar a una tutela, que le permitiese normalizar sus relaciones con los Estados árabes y definir un nuevo papel hegemónico en la región. En la dimensión

años, España ha exportado a Israel armamento valorado en unos 14 millones de euros (más de 2.300 millones de pesetas). En el primer semestre de 2001 se vendió armamento a Israel por valor de 0,43 millones de euros (unos 72 millones de pesetas). Datos de la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 2002.

¹⁴ El 19 de abril de 2002, el Consejo de Seguridad (resol. 1405) acordaba el envío de una misión de investigación. Inicialmente Israel lo aceptó, pero en el momento en que percibió que los resultados podrían dar pie a un posterior procesamiento de los responsables por crímenes de guerra, puso excusas y luego impidió la misión.

palestina pretendió negociar desde su posición de fuerza, legalizando su política de hechos consumados, previos y posteriores a Oslo.¹⁵ Tal como demostró en sus retiradas limitadas, sus actuaciones no se han dirigido a buscar la seguridad sino a perpetuar la ocupación y consolidar el control de ciertas áreas.

Los diferentes Gobiernos israelíes utilizaron el proceso de Oslo para realizar lo que ya habían propuesto en las negociaciones bilaterales de 1992:¹⁶ una entidad palestina no soberana, tutelada, sobre parte de las zonas ocupadas, que sirva de reserva de mano de obra y de mercado cautivo. Por ello, los israelíes siempre han asociado su proyecto de paz con la “separación” entre los pueblos, concebida como el mantenimiento de territorios con población homogénea, dentro de la lógica de asegurar que el Estado de Israel siga siendo mayoritariamente judío. Resulta difícil imaginar un escenario de paz y de cooperación con separación étnica, especialmente cuando la realidad interna israelí es de por sí plurinacional con una quinta parte de su población palestina. La separación viene a ser una modalidad de guerra latente por la predominancia étnica en un territorio dado.

El Gobierno israelí sigue negando la existencia de un verdadero Estado palestino y pretende apartar a Arafat de las negociaciones. Su propuesta es un plan de separación estricta, convirtiendo los islotes palestinos en reservas rodeadas de alambradas, y convocar a medio plazo una conferencia regional. La mayoría de la población sostiene la política de fuerza del Gobierno de unidad nacional, pero al mismo tiempo crece el convencimiento de que el ejército deberá retirarse, los asentamientos se evacuarán (incluso contra la voluntad de los colonos como ocurrió en el Sinaí) y que terminará habiendo un Estado palestino. En las elecciones legislativas previstas para 2003 es previsible que se repita una extrema dispersión del voto y la pérdida de apoyo de los grandes partidos como en los comicios de 1996 y 1999. Sin el voto árabe es difícil que los laboristas puedan sumar apoyos suficientes para reconstruir una mayoría que les permita dirigir el Ejecutivo. La izquierda israelí no tiene capacidad de liderar una alternativa.

¿Pero se arregla todo con un cese del fuego, una retirada israelí de las zonas reocupadas, incluso una vuelta a la situación de septiembre de 2000? ¿Seguirá la comunidad internacional esperando la anuencia de Israel para que se llegue a un acuerdo o para que se reconozca al Estado palestino? Ante este escenario el papel de la comunidad internacional adquiere relevancia, y se hace más necesaria que nunca una actuación internacional decidida:

El Gobierno israelí sigue negando la existencia de un verdadero Estado palestino y pretende apartar a Arafat de las negociaciones

¹⁵ La dimensión más significativa es sin duda la de los asentamientos. Al iniciarse el proceso de Oslo en 1993 había 109.000 colonos en los 146 asentamientos de Cisjordania y Gaza, y 141.000 en los 11 barrios judíos de Jerusalén Este. A principios de 2002 se pasó a 213.000 y 170.000 respectivamente (Foundation for Middle East Peace <http://www.fmep.org>). Siendo ministro de Asuntos Exteriores, Ariel Sharon arengaba a los militantes del partido ultraderechista Tsomet: “Hay que darse prisa, correr y ocupar el mayor número posible de colinas con el objeto de ampliar los asentamientos, porque todo lo que cojamos ahora permanecerá en nuestras manos. Todo aquello que no cojamos irá a parar a las suyas (de los palestinos).” AFP, 15 de noviembre de 1998.

¹⁶ En 1992, en el marco de las negociaciones bilaterales israelí-palestinas que siguieron la Conferencia de Madrid, Israel presentó un proyecto de Autoridad Palestina Interina

- 1) La comunidad internacional debe asegurar la protección de la población palestina y de la ANP.
- 2) Israel debe ser obligada a retirarse de Cisjordania y Gaza, y a cumplir las demás resoluciones de la ONU, asegurando el respeto de los derechos fundamentales de los palestinos con ciudadanía israelí. Para ello la comunidad internacional debe utilizar todos los medios disponibles, desde la aplicación de sanciones y el envío de una fuerza de interposición, hasta contemplar una administración temporal de Naciones Unidas.
- 3) Israel debe asumir el pago de reparaciones por los daños ocasionados. A su vez la ONU, mediante una resolución del Consejo de Seguridad, debe iniciar los procedimientos para la investigación y el procesamiento de los civiles y militares responsables de crímenes de guerra.
- 4) Un arreglo definitivo del conflicto no puede dejarse exclusivamente en manos de las partes implicadas. Debe ser fruto de una conferencia internacional que se convoque sobre bases diferentes a las de Oslo y basada en el derecho internacional, con garantías y mecanismos de coerción, y que cuente con apoyo y presencia internacional.

De llevarse a cabo la conferencia internacional de paz para Oriente Medio anunciada por el cuarteto se abriría un nuevo capítulo en la historia del conflicto. A diferencia de antes, los convocantes han asumido tener que desempeñar un papel más activo, pues no barajan la reapertura de un periodo interino sino la negociación de un arreglo final. Pero en la búsqueda de una resolución justa y global del conflicto, a Israel le incumbe la mayor de las tareas. Si realmente quiere la paz, Israel deberá asumir los costes de ésta, más allá de la factura económica o política; deberá modular sus pretensiones hegemónicas en la región y también cesar con sus políticas discriminatorias internas, refundándose como Estado de todos sus ciudadanos.

para el Autogobierno (PISGA en sus siglas en inglés) que la delegación palestina rechazó al considerarlo una versión de bantustán, que no respondía ni a las aspiraciones palestinas ni a lo establecido por las resoluciones de Naciones Unidas.

PHYLLIS BENNIS

George junior en el país de las maravillas

El 20 de abril de 2001 más de 100.000 estadounidenses marcharon desde el monumento de Washington hasta el Capitolio, lo que, próximos al 11 de septiembre, demuestra una gran valentía. En San Francisco los ciudadanos también atestaron las calles. En Washington llevaron a cabo cuatro movilizaciones diferentes, centradas en causas distintas pero relacionadas: la guerra del Gobierno de Bush en Afganistán; los ataques contra árabes y musulmanes y el asalto general a las libertades civiles en EEUU; la guerra en Colombia; y la globalización corporativa y los encuentros del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero el tema que predominó en todas las movilizaciones fue Palestina. Más concretamente, un sólido clamor para que EEUU cesara su apoyo a la ocupación israelí de Palestina y a Ariel Sharon, y su financiación a la máquina de guerra israelí. Esto ocurrió días después de la amplia concentración que reclamaba más apoyo para Israel.¹

Las manifestaciones coincidieron con los esfuerzos del Gobierno de Bush por recuperar y redefinir su política en Oriente Medio, tras la debacle producida por los fracasos de Richard Cheney, Colin Powell y Anthony Zinni. Los meses posteriores al 11 de septiembre han estado acompañados por el fracaso de las giras diplomáticas del trío —vicepresidente, secretario de Estado y enviado especial—, concretamente en lo rederido al conflicto entre Israel y Palestina. Aunque se mantienen los tres pilares de la política estadounidense en Oriente Medio —Israel, petróleo y estabilidad—, el orden de prioridades podría haber variado significativamente.

El cambio de política estadounidense

En los primeros meses de su mandato, antes de los atentados en Nueva York y Washington, el Gobierno de Bush adoptó la política de mantener la ayuda y

Phyllis Bennis es miembro del Institute for Policy Studies de Washington D.C. y del Transnational Institute de Amsterdam
Artículo publicado en www.tni.org

Traducción: Eric Jaláin Fernández

¹ Phyllis Bennis, "Antes y después: política exterior estadounidense en 2001", *De Nueva York a Kabul, Anuario CIP 2002*, CIP/FUHEM/ICARIA, Barcelona, 2002.

protección diplomática a Israel, pero apartando la mirada y las manos de las negociaciones de paz. Tampoco era demasiado sorprendente, pues el poder económico y político de este Ejecutivo están completamente relacionados con los intereses de la industria petrolera. El petróleo y la estabilidad son aspectos prioritarios con respecto a Israel, que queda en un segundo plano. Los estrechos lazos estadounidenses con el Estado hebreo no han desaparecido, pero, a pesar de mantener una ayuda económica y militar de aproximadamente 4.000 millones de dólares, y la continua amenaza y/o uso de su poder en la ONU para vetar o promover medidas para la protección de Israel, la política de Bush se ha dado a conocer como *disengagement*.¹ Europa, los Estados árabes y otros actores mundiales comenzaron a reclamar una “mayor implicación”, como si los miles de millones en concepto de ayudas, los vetos protectores y el privilegio diplomático hacia Israel no constituyeran una implicación suficiente. Lo que se necesitaba no era más implicación, sino una forma totalmente diferente de implicarse. Esto no estaba recogido en la agenda de Bush para Oriente Medio.

Inmediatamente después de los ataques al World Trade Center, el Gobierno estadounidense pareció distanciarse de Israel. La necesidad del apoyo de Gobiernos árabes e islámicos para la nueva “guerra contra el terrorismo” de Bush puso en juego el cálido y difuso abrazo con Israel, aunque el respaldo económico y estratégico permaneció inalterable.

Temiendo tal reacción, los representantes israelíes lanzaron una campaña casi frenética de alianza, proclamando su suprema unidad con los estadounidenses como víctimas del terror y de los enemigos árabes/islámicos comunes. Pero la campaña no funcionó excesivamente bien, más allá del círculo de expertos y autoridades habituales. En noviembre de 2001, tanto el discurso de Colin Powell en Louisville, como la intervención del propio Bush en la Asamblea General de la ONU, se centraron más en lo que los palestinos, y (más estratégicamente) los Gobiernos árabes y sus intranquilas poblaciones, deseaban escuchar. Los llamamientos de Bush favorables a un “Estado palestino”, y de Powell en el sentido de que “la ocupación debe terminar”, parecieron anunciar un nuevo planteamiento de la diplomacia estadounidense, tal vez incluso equilibrado.

Pero, en cuanto el mantenimiento de la coalición contra Afganistán perdió importancia (es decir, cuando las principales ciudades bajo tutela talibán ya habían caído), el péndulo táctico volvió hacia atrás y Washington regresó a un mayor acercamiento público hacia Israel y Sharon. Anunciaron un esfuerzo para “reimplicarse” en el “proceso de paz”. El primer mensajero fue el general Anthony Zinni, cuyas dos breves visitas a finales de 2001 acabaron en sendos fracasos (una tras un atentado bomba suicida, la otra tras descubrirse un cargamento de armas embarcado hacia Palestina, procedente de Irán). Durante algún tiempo, el Gobierno parecía despreocupado por la escalada de violencia, aparentando creer, contra toda evidencia, que Palestina podía arder sin que la crisis se desbocara.

¹ Nota del traductor: la traducción literal sería “retirada”, pero en el presente contexto político correspondería a “reducción de implicación”.

En febrero Irak reapareció como protagonista central de los esfuerzos regionales estadounidenses. Los intereses en juego se elevaron, y se imponía una nueva ronda diplomática regional para exponer las necesidades y dictar la ley a los aliados árabes de Washington. Se requería para ello de alguien con un rango en la jerarquía gubernamental superior al del general Zinni, así entró en escena el vicepresidente Dick Cheney, con amplia experiencia en Oriente Medio tras sus años como Secretario de Defensa del Gobierno de Bush senior. Los intereses de Cheney en el sector petrolífero eran bien conocidos desde hacía tiempo.² El vicepresidente ya había conducido una ronda regional en Oriente Medio virtualmente idéntica, en vísperas de la guerra del Golfo hace más de una década, con un propósito similar: asegurar el apoyo regional árabe y de otras potencias (como Turquía) para un nuevo ataque contra Irak. Recién ocurridos los atentados en EEUU, con los regímenes árabes afines ya sumisos, atropellándose prácticamente para subirse a bordo del tren antiterrorista de Bush, el Gobierno parecía anticipar que el trabajo de Cheney se limitaría a dar el último empujón. Sin duda, había cierta inquietud con respecto a la rabia de las poblaciones árabes ante el rápido deterioro de la crisis en la Franja de Gaza, pero parecía asumido que, por muchas crispaciones y acusaciones que exhibieran los regímenes aliados árabes, estos iban a apoyar finalmente a Washington.

Si apenas había duda de que, tarde o temprano, los reyes, emires y príncipes árabes iban a hacer lo que el “patrón” les ordenara, la opinión pública en todo el mundo árabe la emprendió duramente no sólo contra Israel y su ocupación, sino también contra su padrino global, EEUU. Los Gobiernos árabes, expuestos a severas crisis de legitimidad, harían lo que se les dijera a cambio de pagar un precio muy alto por su alianza con Washington. La escalada de violencia de Israel en los Territorios Ocupados se convirtió en una buena excusa para los dirigentes árabes: “¿cómo podéis hablarnos de apoyar una campaña de invasión o un golpe contra Irak mientras Palestina está ardiendo y no hacéis nada para evitarlo?”

Operaciones fantasma

Poco antes de que el Air Force Two de Cheney despegara, alguien en Washington se dio cuenta de todo esto, y el general Zinni fue enviado de nuevo a Oriente Medio. Su misión no había cambiado, por lo que había pocas posibilidades de que se resolviera con éxito. Su papel tenía más que ver con figurar en las capitales árabes, que lo que pudiera hacer en Jerusalén o en Ramala, donde comenzó una fantasmal gira. Zinni era la cobertura política de Cheney. “¿Qué queréis decir con que no hacemos nada? ¡Hemos enviado al general Zinni!”, fue el nuevo mantra del vicepresidente.

² Como miembro de la Cámara de Representantes, apoyó en 1981 la venta de aviones AWACS a Arabia Saudí, a pesar de la oposición israelí, y en 1979 votó contra el impuesto sobre beneficios extraordinarios aplicado a los ingresos del petróleo. Para completar el curriculum, Cheney también votó contra el Tratado del Canal de Panamá (1979), contra el Departamento de Educación (1979), contra las sanciones a Suráfrica (1985) y contra la seguridad del agua potable (1986).

*Los
Gobiernos
árabes harían
lo que se
les dijera
a cambio de
pagar un
precio muy
alto por su
alianza con
Washington*

Pero este plan tampoco funcionó. Aunque, los Estados árabes dependientes se someterían muy posiblemente a las presiones estadounidenses, sus endeble Gobiernos no estaban dispuestos a hacerlo prematuramente, con el riesgo de desestabilización o incluso de amenaza potencial a sus regímenes. El viaje de Cheney fracasó y la operación de Bush se concentró en convencer a una audiencia moderadamente escéptica, dentro y fuera de Washington, que el vicepresidente no había ido a conseguir apoyos para atacar a Irak. Su viaje no hubiera sido más que una visita para apuntalar el apoyo regional a la “guerra contra el terrorismo” (algo que tampoco se logró, aunque poca gente prestara atención a este detalle).

Llegó el turno del secretario de Estado Colin Powell. Tras el frustrado viaje de Cheney, el Gobierno Bush decidió tomarse un respiro en la nueva estrategia de implicación. Los expertos desplegaron su “kremlinología” al estilo estadounidense, intentando descifrar quién salía reforzado y quién debilitado en el entorno de Bush. Las divergencias surgidas desde el comienzo de su Gobierno se mantenían: los desacuerdos en cuanto a Irak, que enfrentaban a los pragmáticos de Powell contra los ideólogos de Rumsfeld/Wolfowitz, se trasladaron ahora a la cuestión palestina. ¿Algún funcionario estadounidense de rango superior a asistente delegado de subsecretario debe sentarse alguna vez en la misma sala que Yasir Arafat? ¿Algún funcionario estadounidense puede criticar a Ariel Sharon por combatir el terrorismo con los mismos métodos que estaba utilizando EEUU en Afganistán?

La prensa se centró principalmente en el mensajero. ¿Ocupaba el general Zinni una posición demasiado baja en el escalafón como para influenciar a Sharon y/o Arafat? ¿Debería Bush enviar al general Powell, introduciendo así el factor de fuerza de las cuatro estrellas? Lo que quedaba fuera de debate es que no era tanto el mensajero en sí como el contenido de su misión lo que iba a determinar su éxito o fracaso. Zinni no fracasó porque no estuviera a la altura jerárquica adecuada, sino porque sus órdenes no incluían detener a Israel. Y como se comprobó después, tampoco las órdenes de Powell lo contemplaban. Dos bombas suicidas a finales de marzo, que mataron a docenas de civiles en Israel, elevaron el listón; Washington, claramente, iba a responder.

La visita de Powell

Antes de que se tomara una nueva decisión, el 29 de marzo una ofensiva militar israelí, sin precedentes en Gaza, invadió Ramala, Belén, Nablus, Yenín, Tulkarem y otros pueblos de la zona, con tanques, helicópteros armados con ametralladoras, bulldózer blindados y aviones de combate F-16. Respecto al bando israelí, parecía “una guerra convencional”, como la definió el secretario general de la ONU Kofi Annan.

El 4 de abril Bush anunció que iba a enviar a Powell a Oriente Medio y trazó una visión, un poco escasa y muy difusa, de cómo se dibujaba un arreglo pacífico: “Este podría ser un momento esperanzador para Oriente Medio. (Pero no lo es.) La propuesta del príncipe Abdulá de Arabia Saudí, apoyada por la Liga Árabe, ha

logrado que un buen número de países árabes se aproxime más que nunca al reconocimiento del derecho de Israel a existir. (Ignorando convenientemente que tal reconocimiento sólo se produciría tras una retirada total de Israel a sus fronteras de 1967.) Consta que EEUU apoya las legítimas aspiraciones del pueblo palestino a tener un Estado. (Aunque hagamos todo lo posible para evitar que tales aspiraciones se hagan realidad.) Israel ha reconocido el derecho a un Estado palestino. (Si se puede definir como Estado un conjunto de bantustanes divididos y aislados, sin frontera con el exterior, que suponen alrededor de un 40% del territorio de Gaza.) Las líneas de un acuerdo justo son claras: dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo uno junto al otro en paz y seguridad.”

Si aún no se ha logrado un Estado palestino, afirma Bush, Yaser Arafat no puede culparse más que a sí mismo: “La situación en la que se encuentra hoy en día es ampliamente responsabilidad suya. Ha dejado escapar sus oportunidades, traicionando con ello las esperanzas del pueblo que supuestamente dirige. Debido a sus fallos, el Gobierno israelí se siente obligado a atacar a las redes terroristas que están matando a sus ciudadanos.” Las actuaciones de Israel pueden “correr el riesgo de agravar la ya dilatada amargura y de empeorar unas relaciones que resultan críticas para cualquier esperanza de paz.” Pero a pesar de ello, Bush no criticó el ataque de Sharon, únicamente recordó a Israel “que su respuesta a los recientes ataques es tan sólo una medida temporal.” En cuanto al largo plazo, las únicas referencias fueron: Israel debe detener nuevos asentamientos y “la ocupación debe terminar con una retirada a las fronteras aseguradas y reconocidas.” Cuatro días después, Bush afirmó haber advertido a Sharon: “Espero que se dé una retirada sin más demora.” Amenazó con amenazar, pero se negó a caminar ese camino.

La acción clave del Gobierno de Bush se limitó al envío de Powell a la región. No acometió presión alguna contra Israel a través de los numerosos instrumentos con los que cuenta para hacerlo: no suspendió los miles de millones de ayuda militar, no frenó la provisión del equipamiento militar que se está utilizando contra los civiles, no cejó en el respaldo diplomático a Israel vetando en el Consejo de Seguridad cualquier propuesta de despliegue de protección internacional o incluso de observadores.

No debería sorprender que Sharon no haya hecho caso de las indicaciones de Bush. La postura de éste ha sido descrita por la veterana columnista del *Washington Post*, Mary McGrory, cuando afirma “el líder del mundo libre se ha ido a Crawford (Texas) a descansar, dando a entender a Sharon que siga con lo suyo.” El extraño calendario de Bush evidenció los límites reales de sus intenciones. Powell se dirigió hacia Oriente Medio, pero sin prisas, tomándose su tiempo para llegar. Primero fue a Marruecos, donde fue recibido por el joven rey con la pregunta: “¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué no está en Jerusalén?”

El lánguido paso de Powell le condujo de Marruecos a Madrid, Jordania y Egipto, para no llegar hasta casi una semana después a Jerusalén. Se trató, sin duda, de una semana de luz verde para Sharon, que pudo así continuar impunemente sus asaltos a las ciudades, pueblos y especialmente a los campos de refugiados de Gaza. Fue permitir los horrores de Yenín, que ya se han sumado a los de Qibya, Gaza, Sabra y Shatila en el curriculum de crímenes de guerra de Sharon.

*La acción del
Gobierno de
Bush se limitó
al envío de
Powell a la
región.
No acometió
presión
alguna contra
Israel a
través de los
numerosos
instrumentos
con los que
cuenta para
hacerlo*

En el país de las maravillas

Cuando Powell regresó, el presidente Bush celebró la bienvenida proclamando que los objetivos estadounidenses se habían cumplido, que el viaje había sido un éxito, que el mundo iba bien. Era un momento de "Alicia en el país de las maravillas", con Bush anunciando sin sonrojarse: "creo que Ariel Sharon es un hombre de paz" y "la historia demostrará (que los israelíes) han respondido" al llamamiento de Bush a una retirada inmediata.

El ataque israelí fue perdiendo intensidad en algunas zonas de Gaza, aunque las tensiones se dispararon alrededor de la asediada Iglesia de la Natividad en Belén y de la también sitiada residencia presidencial de Arafat en Ramala. Rodeados de tanques, varias docenas de activistas de Solidaridad Internacional fueron aparentemente lo único que frenó la intención israelí de asaltar la residencia y enviar de nuevo al líder palestino al exilio. Pero el objetivo del Gobierno de Bush, de las giras de Zinni, Cheney y Powell, así como de todos sus subordinados que aplaudían cuando los grandes hombres regresaban a casa, ha fracasado. El objetivo de estabilizar la región lo suficiente para que los regímenes árabes apoyen sin riesgos un ataque estadounidense contra Irak, sin temer una sublevación interna, no se ha alcanzado.

En EEUU, el Gobierno de Bush encara el primer desafío serio a su política exterior, procedente de la derecha, cuando fundamentalistas cristianos y otros componentes de la ultraderecha del partido republicano están comenzando a forzar un abrazo aún más estrecho con el Israel de Ariel Sharon, rechazando incluso las preocupaciones retóricas de Bush por los derechos palestinos. Paul Wolfowitz, pro-israelí y delegado en jefe de Bush en el Pentágono, fue abucheado por decenas de miles de manifestantes pro-israelíes cuando tuvo la audacia de mencionar que tal vez los niños palestinos ya habían sufrido demasiado. Se dibuja el peligro de una seria división en el partido republicano, con una ultraderecha partidaria de Israel, mientras los "moderados" pro-Bush se aferran a sus tradicionales lazos con la industria petrolera y los regímenes árabes; facciones que tan sólo se unirían ante un ataque militar a Irak. Una pesadilla que ya asoma por el horizonte para un presidente con escasa visión.

LAURA RUIZ JIMÉNEZ

La Venezuela fracturada de Hugo Chávez

Venezuela está sumida en una delicada situación política, con su ciudadanía dividida en dos bandos irreconciliables. Los enfrentamientos en las calles y el desalojo de Hugo Chávez de la presidencia durante dos días han mostrado la fuerza e impaciencia de la oposición, pero también la confianza que parte importante de la población mantiene en él. Entender el porqué del respaldo a un dirigente que en el pasado intentó dos golpes de Estado contra un Gobierno democrático, exige situarse en el contexto de la aguda crisis económica que vive el país y considerar la responsabilidad de los partidos tradicionales en su triunfo electoral. La actual tensión es consecuencia de la forma de ejercer el poder del presidente y de las políticas que trata de aplicar en contra de una oposición que se ha movilizado después de tres años. Venezuela constituye una importante llamada de atención, porque la quiebra del sistema tradicional de partidos y el aumento de la desconfianza en la democracia que hicieron posible el triunfo de Hugo Chávez son elementos reconocibles en otros países de América Latina.

Lo ocurrido en Venezuela, entre el 11 y el 14 de abril, ha puesto de manifiesto la tremenda división entre los venezolanos, y ha reabierto el debate entre quienes defienden una democracia de partidos como marco de resolución de conflictos y quienes consideran aceptable el personalismo al margen de las instituciones mientras existan expectativas de mejorar económicamente. La salida de Chávez se produjo en el marco de una huelga general indefinida convocada para el 9 de abril por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), a la que se unieron los partidos tradicionales y la patronal empresarial Fedecámaras. Dada la masiva respuesta ciudadana, el secretario de la CTV, Carlos Ortega, y el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona, hicieron el 11 de abril un llamamiento a la población para acudir al Palacio de Miraflores a expresar su rechazo al presidente. La marcha terminó con los enfrentamientos entre opositores y partidarios de Chávez que provocaron una decena de muertos y forzaron su salida de la presidencia por dos días.

Laura Ruiz Jiménez es directora del Master de Cooperación Internacional del Instituto Universitario Ortega y Gasset

El golpe cívico-militar contra Chávez fue la culminación de crecientes movilizaciones de la oposición incapaz de articular una respuesta común contra el régimen hasta la exitosa manifestación realizada en Caracas en diciembre del año pasado. Desde entonces, estudiantes, sindicatos, partidos y ciudadanos han mostrado en las calles su rechazo a las decisiones y el modo de gobernar del presidente. En febrero, miembros de las Fuerzas Armadas se sumaron a estas protestas al pronunciarse públicamente contra él.¹ Las movilizaciones civiles y la intervención decidida de las Fuerzas Armadas contra el presidente evidencian la fuerza creciente de los sectores que se oponen a él. Pero la sustitución de Chávez por Carmona, máximo representante de los empresarios, también plantea la falta de coordinación y acuerdo en la oposición sobre cuál debe ser el camino a seguir por Venezuela. Carmona suspendió la institucionalidad vigente y renunció a una pronta convocatoria de elecciones perdiendo así el apoyo de las Fuerzas Armadas y de los sindicatos y partidos responsables de las protestas. En cualquier caso, el regreso de Chávez a la presidencia el 14 de abril no debe ser interpretado como muestra de la consolidación de su poder. El presidente ha podido comprobar la fuerza de los grupos alzados contra él a los que no podrá seguir ignorando como hasta ahora. Consciente de tal situación, Chávez mantiene desde su vuelta a Miraflores una actitud conciliadora de la que son muestra las Mesas de Diálogo recientemente creadas en las que tiene presencia la oposición y que debatirán sobre el futuro del país. El conflicto ha quedado paralizado momentáneamente, aunque los anti-chavistas seguirán utilizando las calles para expresar su descontento y para exigir una convocatoria de elecciones que permita zanjarlo.

Hugo Chávez, presidente electo de Venezuela, ha sido capaz de realizar una profunda reforma institucional que le ha otorgado capacidad para imponer sus decisiones sin que medie sobre ellas control alguno. Venezuela es hoy una democracia "delegativa", un régimen que bajo la formalidad de las instituciones democráticas concentra el poder en un líder que ha demostrado poseer un elevado autoritarismo.² La gestión de Gobierno de Hugo Chávez ha logrado movilizar a una oposición sumida hasta hace poco en el desconcierto y sin un programa creíble con el que enfrentar al presidente. El hecho de que Chávez quedara el primero en las elecciones presidenciales de 2000, que registraron una abstención del 44%, ayuda a entender la violencia de los enfrentamientos actuales y la discusión existente en torno a la legitimidad del Gobierno.

Percepciones de la crisis económica

Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales de 1998 como candidato del Polo Patriótico, una abigarrada coalición de partidos en la que tuvieron cabida

¹ El primero fue el coronel de aviación Pedro Luis Soto, que el 7 de febrero aprovechó su presencia en un programa de televisión para pedir la renuncia de Chávez. Después de Soto, otros altos cargos del ejército han hecho llamamientos similares.

² Ludolfo Paramio, "Perspectivas de la democracia en América Latina", en E. Fabián (comp), *Responsa Iurisperitorum Digesta*, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2000.

desde el nacionalista Movimiento V República (MVR), que él mismo fundó, hasta el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Grupos de características tan dispares coincidían, no obstante, en los dos puntos centrales de sus programas: la lucha contra la corrupción, considerada responsable de la pobreza y la crisis económica venezolana, y el rechazo frontal a los programas de ajuste de corte neoliberal. En esas elecciones Chávez logró el respaldo del 56,20% de los ciudadanos, mientras su principal rival, Enrique Salas Römer, apoyado por los partidos tradicionales Acción Democrática y COPEI, obtenía el 39,97% de los sufragios.³ Las cambiantes alianzas que realizó la oposición durante toda la campaña ilustran el desconcierto de los partidos ante el imparable ascenso del ex militar, y la desconfianza de los ciudadanos en las posibilidades de gestión de las organizaciones políticas tradicionales.⁴

En el triunfo electoral de Hugo Chávez jugaron un papel fundamental las percepciones que los venezolanos tienen de la profunda crisis económica que desde hace dos décadas afecta al país, y que ha colocado al 68% de la población por debajo del índice de pobreza. La mayoría de los venezolanos está convencida de que su país, por sus recursos petroleros, es enormemente rico y que la pobreza es consecuencia de la corrupción de los políticos que malgastan o se apropian de los beneficios que genera.⁵ En realidad, y pese a la corrupción, la crisis es resultado del agotamiento de un modelo de crecimiento basado en la exportación de petróleo que funcionó muy adecuadamente durante décadas. Desde 1910 el petróleo no fue sólo motor de crecimiento y modernización, sino que favoreció la aplicación de políticas redistributivas que hicieron de Venezuela una de las democracias menos desigual y más estables de América Latina. El sistema rentístico-petrolero comenzó a dar signos de agotamiento en los años setenta, al ser incapaz de hacer frente a los crecientes gastos del Estado venezolano. A mediados de la década de 1980 quebró siendo necesario adoptar algunas medidas de ajuste.⁶

El presidente Carlos Andrés Pérez (AD) fue el encargado de aplicar, en 1988, políticas de control del gasto denominadas “Gran Viraje”. Considerando tales medidas innecesarias, los ciudadanos se enfrentaron a la subida en los precios de productos básicos y del transporte recurriendo a la movilización social. El “Caracazo”, de febrero de 1989, se saldó con la muerte de civiles y la intervención del ejército. Convencidos de vivir en un país rico, fue extremadamente difícil para la ciudadanía aceptar las reformas. Pérez quedó en tal situación de debilidad que fue

*En el triunfo
electoral de
Hugo Chávez
jugaron un
papel
fundamental
las
percepciones
que los
venezolanos
tienen de la
profunda
crisis
económica*

³ Acción Democrática (AD), socialdemócrata, y COPEI, democristiano, fueron hasta ese momento los partidos que se alternaron en el poder desde 1958.

⁴ Margarita López Maya y Luis E. Lander, “Triunfos en tiempo de transición”, *América Latina Hoy*, Universidad de Salamanca, abril de 1999.

⁵ Moisés Naim, “La Venezuela de Hugo Chávez”, *Política Exterior*, julio de 2001, N° 82.

⁶ Sobre el modelo rentístico petrolero: Luis Pedro España, *Democracia y renta petrolera*, Universidad de Caracas, 1989; y Margarita López Maya y Luis E. Lander, “La transformación de una sociedad petrolera-rentista”, en Pilar Gaitán y Eduardo Pizarro (comp.), *Democracia y estructura económica en América Latina*, Bogotá, 1996.

expulsado del poder antes de terminar su periodo presidencial.⁷ Desde ese momento los partidos tradicionales, AD y COPEI, fueron crecientemente señalados como responsables del deterioro económico del país y comenzaron a perder electorado a un ritmo muy acelerado.

Responsabilidades de los partidos tradicionales

Si bien la corrupción de los partidos tradicionales no es la causa de la crisis económica que muchos ciudadanos les atribuyen, sí son responsables de haber provocado o aumentado la desconfianza en el sistema político existente. Los compromisos electorales y las declaraciones y actitudes de algunos líderes ante los acontecimientos políticos venezolanos han tenido importantes efectos negativos sobre la democracia. Cuando en 1992, aprovechando el descontento generado por las reformas económicas de Carlos Andrés Pérez, se produjeron los dos intentos fallidos de golpe de Estado por parte de Hugo Chávez, numerosos líderes mostraron su simpatía ante tal acción. Un caso paradigmático fue el de Rafael Caldera, ex-presidente del país que, al no ser elegido candidato por su partido COPEI para las elecciones de 1993, comenzó a preparar su propio espacio político. Caldera, en lugar de defender el orden constitucional, se sumó a las críticas del militar contra los corruptos partidos tradicionales, incluido aquél al que él perteneció. Poco después presentaba su candidatura al frente de una nueva formación, Convergencia Nacional, con un discurso claramente populista, anti-partido y contrario a las políticas de ajuste que aplicó tras ganar las elecciones. Se confirmaba así aún más en la mente de los votantes esa asociación entre corrupción-ineficacia-falsedad y los partidos tradicionales.

El sistema venezolano de partidos estaba definitivamente quebrado cuando se convocaron las elecciones presidenciales de 1998 que ganó Hugo Chávez. La desconfianza en ellos era tan obvia y las críticas tan extendidas, que la búsqueda de un líder capaz de enfrentar la imagen honesta y resuelta de Chávez fue desesperada. La apuesta final se hizo confiando en candidatos no pertenecientes a ninguna formación política, algunos tan inesperados como la Miss Universo Irene Sáez a la que el COPEI secundó durante la campaña. La falta de un proyecto alternativo al de Chávez y su escasa credibilidad, fomentaron en los partidos divisiones constantes y apoyos mudables. Tan sólo una semana antes de la elección presidencial, Acción Democrática revocaba la candidatura por ellos propuesta de Alfaro Ucero y recomendaba votar por un independiente, Enrique Salas Römer. Casi al mismo tiempo, el COPEI retiraba su respaldo a Irene Sáez para ofrecerlo al mismo candidato en un intento desesperado por vencer al único que mantuvo una línea clara de discurso durante toda la campaña, Hugo Chávez.

⁷ En los países latinoamericanos que experimentaron en los años ochenta procesos de hiperinflación, como Argentina o Perú, la ciudadanía estuvo más dispuesta a aceptar esas reformas que los venezolanos.

Acumulación de poder y desconocimiento de la oposición

Hugo Chávez ganó las elecciones a la presidencia con el 56,20% de los votos, aunque no logró la mayoría en el Congreso donde AD y COPEI retuvieron una considerable representación. Desde su llegada al Gobierno impuso su característico estilo, de un personalismo extremo, y buscó el apoyo directo de los ciudadanos a través de proyectos como el Plan Bolívar 2000 —un programa asistencial implementado por las Fuerzas Armadas y destinado a aliviar la pobreza que ha convertido a amplios sectores de desfavorecidos en sus seguidores más fieles—.

Enfrentado desde el principio de su mandato con el Congreso, su primera acción de Gobierno fue llevar a cabo una refundación de la República. En 1999 convocó a los venezolanos a las urnas en tres ocasiones: para aprobar en referéndum la idea de hacer una nueva Constitución, para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente encargados de realizarla y para aprobar el texto final. Los partidos tradicionales, sumidos en fuertes disputas internas, no fueron capaces de articular una respuesta contra la propuesta de Chávez. El resultado del referéndum fue favorable a la redacción de una nueva Constitución y el Polo Patriótico logró dominar la Asamblea Constituyente que la redactó.⁸ Aprobada la nueva Constitución, que amplió el poder presidencial hasta límites extremos, fueron convocadas otras elecciones para ajustarse al marco por ella establecido. Las celebradas en julio de 2000 otorgaron a Chávez la presidencia con el 59,8% de los votos, triunfo electoral que él interpreta como muestra del amplio respaldo de los venezolanos a sus planes de cambio. Sin embargo, y para entender la contundencia de las actuales movilizaciones contra él, no hay que olvidar que en dichos comicios se registró una abstención del 44%.⁹ De ese 56% que sufragó, el 59,8% lo hicieron por Chávez y un 37,5% por Francisco Arias, compañero de armas y de revolución del presidente ahora enfrentado con él. El apoyo al presidente, aunque importante, no es tan contundente como él hace ver ni suficiente para acallar el rechazo creciente de una oposición que ha empezado a organizarse.

El manifiesto desprecio de Hugo Chávez por los partidos y las instituciones democráticas y el autoritarismo con el que está ejerciendo el poder han favorecido el contacto entre la oposición movilizada. La corrupción sigue estando presente en Venezuela y el presidente ha recurrido al vicio por él siempre criticado de nombrar a allegados no calificados para cargos de gran responsabilidad. A las protestas de partidos y sindicatos se han sumado ahora los empresarios y parte de las Fuerzas Armadas que no aceptan su acercamiento público a Fidel Castro ni a las FARC colombianas. Un año después de comenzado este nuevo mandato, el país se halla dividido y la oposición dispuesta a ganar en la calle las oportunidades que dejó pasar en los comicios.

⁸ La amplia representación en la Asamblea Constituyente del Polo Patriótico se vinculó estrechamente a los cambios introducidos en el sistema electoral poco antes y que premiaron al partido más votado con una fuerte representación. Con un 60% de los votos, el Polo obtuvo el 90% de los puestos en dicha Asamblea. Martín Tanaka, *La situación de la democracia en Colombia, Perú y Venezuela a inicios del siglo*, Informe para la Comisión Andina de Juristas, Lima, noviembre de 2001.

⁹ *Ibidem*.

Repercusión y semejanzas en América Latina

El pulso entre Chávez y la oposición no ha sido resuelto, por lo que es previsible que continúen las movilizaciones y la presión encaminada a lograr una convocatoria de elecciones que posibilite superar el clima de enfrentamiento civil existente en Venezuela. El ascenso de Chávez a la presidencia de la República y su forma de gobernar, respaldada por una parte importante de la ciudadanía pese a su desprecio por las instituciones democráticas son, sin embargo, una importante llamada de atención sobre los procesos de desconfianza en la democracia que no son exclusivos de este país. La elección presidencial de Alberto Fujimori en Perú se dio también en una coyuntura de desintegración de los partidos tradicionales semejante a la de Venezuela.¹⁰ Su compromiso de acabar con la corrupción y la violencia, y el convencimiento de que podría desarrollar políticas de crecimiento capaces de acabar con la pobreza, explican la confianza de millones de electores, hasta que su propia corrupción y el incumplimiento de sus promesas terminaron con su Gobierno. La oposición tomó las calles para enfrentarse a Fujimori y durante años quedó demostrada, como en Venezuela, la dificultad de los partidos para reorganizarse y responder adecuadamente a las expectativas de la ciudadanía. En otros países latinoamericanos se repite esa combinación de crisis económica y profunda erosión del sistema de partidos tradicional que arroja sombras sobre el futuro desempeño democrático de la región.

Venezuela, como otras democracias latinoamericanas, debe enfrentarse a tener que sobrevivir en un contexto económico extremadamente difícil. Desde que en los años ochenta se produjera un retorno generalizado a la democracia después de un largo período de autoritarismo, América Latina vive sumida en una devastadora crisis económica. El modelo de crecimiento que los Gobiernos latinoamericanos aplicaron entre los años treinta y sesenta basado en la industrialización ha demostrado su inviabilidad, pero no ha podido ser sustituido por otro que genere tasas de crecimiento semejantes a las de aquél. Las medidas encaminadas a eliminar el déficit fiscal y la apertura de la economía en la línea establecida por el Fondo Monetario Internacional no ha ofrecido la recuperación económica esperada y está imponiendo a los Gobiernos serias limitaciones para aplicar programas de reactivación económica.¹¹ Sin un crecimiento sostenido no existirá la posibilidad de implementar políticas capaces de sacar de la pobreza a los crecientes sectores de población que la padecen y se acentuará esta línea de actuación que responsabiliza a los partidos de las malas condiciones de vida del país. El empeoramiento de los indicadores sociales y económicos y la falta de expectativas crean un contexto especialmente duro para la buena marcha democrática y favorecen la aparición de *outsiders* poco afines a sus instituciones como Fujimori o el propio Chávez.

En este contexto económico los partidos latinoamericanos deben afrontar un doble reto. Por un lado, tendrán que encontrar la forma de generar un crecimiento

¹⁰ Paul Drake, *Crisis in the Andes*, Mimeo, 2001.

¹¹ Luis Carlos Bresser Pereira y José María Maravall, *Las reformas económicas en las nuevas democracias*, Alianza Universidad, Madrid, 1995.

sostenido y aplicar políticas que hagan de la eliminación de las desigualdades su primer objetivo. La superación de esta meta no depende sólo de la voluntad de los partidos en el Gobierno, puesto que su margen de maniobrabilidad está estrechamente condicionado por pautas marcadas desde el exterior. En segundo lugar, los partidos tendrán que recuperar la confianza de los ciudadanos y convencerles de su capacidad para desarrollar estrategias de futuro. Reconocer sus errores pasados y reorganizarse en torno a liderazgos renovados son dos tareas urgentes. Durante décadas, los sistemas de partidos en América Latina se estructuraron aprovechando los recursos del Estado para mantener redes clientelares con los electores, que en medio de la actual crisis económica y del drástico recorte de los gastos estatales, se han disuelto generando una extrema volatilidad en el voto.¹² Las estructuras políticas y económicas de Venezuela y América Latina necesitan, sin duda, un profundo cambio, aunque la experiencia acumulada en estas dos últimas exige una revisión de las bases sobre las que éste se está desarrollando.

¹² Ludolfo Paramio, *Op. Cit.*

SAUL LANDAU

Un golpe sin profesionalidad

El 15 de abril, en la cadena de televisión CNN en español se preguntó a un “experto” venezolano por qué había fallado el golpe. “Por falta de profesionalidad”, respondió ampulosamente. Pensé que se referiría a la falta de experiencia del subsecretario de Estado, Otto Reich, para organizar esos asuntos. Reich posee amplia experiencia como profesional de la mentira y de la distorsión informativa, y en conspirar con terroristas, pero no mucha en organizar golpes.

Pensé que quizá el experto quería decir que la CIA y el Pentágono se habían servido de un equipo de novatos. Pero como la CNN le identificó como profesor, me pregunté si el experto querría decir que los conspiradores deberían haber obtenido sus doctorados en preparación de golpes en la Escuela de las Américas de Fort Benning, antes de emprender su tortuosa tarea en Caracas. Los oficiales militares latinoamericanos se hacen acreedores a realizar tales estudios de posgrado si obtienen un promedio de sobresaliente en sus cursos sobre la tortura.

Otros “analistas” de la CNN profirieron profundas frases como “esto debería enseñar a Chávez a no excluir a las minorías”, o “la paciencia del pueblo se agotó frente a sus métodos autoritarios”.

El uso de eufemismos, como “minorías”, se refiere, naturalmente, a los superacaudalados. Que el pueblo pierda la “paciencia” quiere decir que los millonarios venezolanos y el grupo de la Seguridad Nacional en Washington estaban hartos de la heterodoxia de Chávez en auxilio de los pobres, quienes, desafortunadamente, siempre están con nosotros.

Los medios informativos alcanzaron los máximos niveles de información distorsionada en lo relacionado con el golpe de Caracas. No obstante, durante los pocos días transcurridos antes de que la prensa “prestigiosa” tuviera que admitir que sus informes, comentarios y editoriales no coincidían con la realidad venezolana, yo, como otros muchos millones en el mundo, fui presa de la desesperación, la depresión y la ira. Exceptuando *La Jornada* de México y la prensa cubana, que se refirieron a un golpe de Estado, el resto aceptó la línea de que el presidente elegido, Hugo Chávez, había dimitido a causa de la legítima autoridad ejercida por una poderosa alianza cívico-militar.

Saul Landau es investigador del Institute For Policy Studies, Washington D.C.

Traducción y adaptación:
Alberto Piris

Es verdad que algunos cínicos habían predicho el golpe el mismo día que los venezolanos eligieron presidente a Hugo Chávez, en 1998, por abrumadora mayoría. Al invocar la “Revolución Bolivariana”, que revivía la imagen del Libertador de Latinoamérica, Chávez puso en marcha la guerra de clases contra la pequeña pandilla que ha exigido la parte del león en la riqueza venezolana y en el control de los partidos políticos. Esta pandilla ha gobernado (ha expoliado) el país durante más de cuatro decenios.

Antes de que Chávez impusiera una nueva Constitución en 2000, él y las fuerzas populares ganaron varias elecciones. Los ricos y corrompidos, derrotados en las urnas, comenzaron a tachar a Chávez de antidemócrata. Se autodenominaron “sociedad civil”, agruparon a algunos selectos dirigentes sindicales, grupos de empresarios, algunos sectores de la Iglesia y, por supuesto, a los propietarios de las televisiones, para intentar presentar a Chávez, no como el presidente elegido, sino como un dictador, probablemente comunista y, con certeza, amigo de los terroristas.

Es cierto que la popularidad de Chávez había descendido desde más de un 75% a menos del 50%, según las encuestas habituales. Pero los analistas no sabían si esta caída se debía a la lentitud en aplicar algunas reformas prometidas, relacionadas con la mejora de los pobres, o a la presión mediática que le describía día tras día con tintes negativos.

Los escépticos repitieron el dogma de que EEUU no admitiría otro caso de flagrante desobediencia en el hemisferio occidental. La Cuba de Fidel Castro, en el *Libro Guinness de los Récords* por sus más de 43 años de desobediencia, había enseñado al grupo de la Seguridad Nacional en Washington una lección: no más comportamientos maliciosos en nuestro ámbito de influencia, sea a la derecha, al centro o a la izquierda.

Conviene recordar que los ultrarreaccionarios, como el presidente de la República Dominicana Leónidas Trujillo, los reformistas moderados, como João Goulart en Brasil, y, naturalmente, los radicales, desde Salvador Allende en Chile a los sandinistas de Nicaragua, fueron víctimas del departamento de castigos de la CIA. Las tácticas secretas han incluido asesinatos, golpes, desestabilización económica y guerra psicológica; se las puede llamar terrorismo de Estado. En el caso de Manuel Noriega, agente de la CIA y de la DEA (la agencia antidroga) que se volvió desobediente, el presidente Bush padre puso en acción la más cara operación de arresto conocida en el mundo.

Intervenciones estadounidenses

Los modos de actuar de la CIA para derribar Gobiernos populares incluyen también intentos de influir en los medios de comunicación. Cuando en 1970 rodaba una película en Chile, fui testigo de parte de la operación “desestabilizadora” que comenzó incluso antes de que Salvador Allende hubiera ganado en septiembre de aquel año. Tras las elecciones, mientras la CIA preparaba operaciones para impedir la investidura de Allende, yo visitaba de cuando en cuando el bar del Hotel Carrera de Santiago. Era inevitable que chilenos bien vestidos susurraran que

Allende tenía una sífilis avanzada. Otros decían confidencialmente que era homosexual, un instrumento sexual de Castro, un esclavo amoroso de Brezhnev, empeñado en poner a Chile bajo el dominio de Moscú.

Casi me hacía reír la tosquedad de los dibujos anti-Allende en la prensa de la derecha (que controlaba la mayoría de los medios chilenos). Observé una campaña de violencia planificada, que comenzó en octubre de 1970 con el asesinato del Jefe del Ejército, el general René Schneider, por la banda fascista Patria y Libertad, al servicio de la CIA. La “desestabilización” continuó durante los tres años de Allende, sobornando a algunos dirigentes sindicales para que convocaran huelgas en sectores estratégicos, y poniendo a Chile en dificultades económicas. Sobre todo, persistía el bombardeo diario de mentiras y distorsión sobre la naturaleza del Gobierno de Allende y su programa, que pretendía mejorar la suerte de los trabajadores pobres, urbanos y rurales, mediante legislación aprobada bajo la Constitución vigente.

Cuando fracasaron las diversas tácticas combinadas, los militares chilenos recurrieron a un sangriento golpe. La Marina de EEUU jugó un papel crucial, vigilando el tráfico emitido desde las bases militares para garantizar que los golpistas pudieran deshacerse con facilidad de los leales a Allende.

Para muchos chilenos el 11 de septiembre de 1973 es semejante al 11 de septiembre de 2001 para los estadounidenses. La Aviación chilena disparó cohetes contra el edificio presidencial y los tanques hicieron saltar el venerable edificio mientras las tropas ponían cerco al símbolo del Gobierno democrático y siguieron después con una campaña basada en el terror: asesinatos, secuestros, torturas y exilio para sus oponentes políticos, con el apoyo de Washington. Tras diecisiete años de fascismo pinochetista, murieron más de 3000 chilenos a manos de los terroristas que Washington había ayudado a instalar en el Gobierno.

En 1976, y de nuevo en 1980, rodando en Jamaica, volví a tener una experiencia ya conocida en el bar del Hotel Pegaso, en Kingston. El primer ministro, Michael Manley —me dijo un empresario jamaicano— era homosexual, un lacayo de Castro y agonizaba de una enfermedad venérea. Los artículos que había leído unos años antes en español en *El Mercurio* y otros diarios sensacionalistas chilenos, empezaron a aparecer en inglés en el *Daily Gleaner* de Kingston. Ahora surgían la violencia, los disturbios laborales, los rumores, las fugas de capital y todos los rasgos de la operación chilena en Jamaica. En su primer mandato, Manley se hizo querer por los pobres, tuvo amistad con Castro, su vecino, sostuvo los derechos del Tercer Mundo y rechazó las condiciones que las agencias financieras multilaterales trataban de imponer a Jamaica. Tampoco atendió la orden del secretario de Estado, Henry Kissinger, de condenar a Cuba por enviar tropas a Angola en 1975. Más aún, Manley apoyó la decisión cubana. Pagó por su comportamiento independiente.

Recuerdo estar sentado con Manley en julio de 1980, cuando unos agentes de policía le informaron de que acababan de desmontar un intento de asesinato. Manley perdió las elecciones de 1980, en una atmósfera de miedo y violencia creada por la campaña de la CIA para “desestabilizar” su Gobierno. Había intentado seguir un rumbo independiente, separar a Jamaica de los dictados de los misioneros del comercio libre de las agencias de préstamo y del Tesoro de

*Para muchos
chilenos el 11 de
septiembre de
1973 es
semejante al 11
de septiembre de
2001 para los
estadounidenses*

EEUU. Como Allende, había legislado para ayudar a los pobres y para promover un desarrollo sano y no dependiente. Los jamaicanos temían que, de ganar él, aumentaría la violencia y la desestabilización. Algunos seguidores de Manley me confesaron que habían votado contra él, porque temían que su victoria trajese más violencia, y algunos creían que la CIA asesinaría sin duda a Joshua, como le llamaban sus adictos.

Visité en 1981 a una amiga que trabajaba en la Embajada de EEUU en Jamaica, quien me dijo que la noche de las elecciones, después de que Manley hubiera aceptado la derrota ante Edwar Seaga, el candidato apoyado por la CIA, el jefe de local de la Agencia había invitado al personal de la Embajada a un cóctel. Abrió una enorme caja acorazada, en cuyas paredes había pegado centenares de artículos, editoriales y viñetas publicadas en la prensa jamaicana y escritas por personal de la CIA o sugeridas por la Agencia.

Los sandinistas nicaragüenses sufrieron un decenio de guerra no declarada por Washington, lo que les costó las elecciones de 1990 y, al pueblo de Nicaragua, la pérdida de alrededor de 50.000 vidas en una guerra terrorista en la que los criminales de los más altos cargos de EEUU eludieron las disposiciones del Congreso para abastecer a un ejército mercenario.

Por todo lo anterior, cuando el 12 de abril leí que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, había “dimitido”, sentí el impacto de lo ya conocido, sin sorpresa. Durante dos años, Washington había venido apoyando a los grupos anti Chávez. Incluso aparecieron en EEUU organizaciones para proteger y defender la democracia venezolana, lo que ya de por sí hacía levantar sospechas. Cuando los medios de comunicación de EEUU y de sus aliados publican sistemáticamente artículos negativos sobre Chávez, ignorando sus progresos, las sospechas se hacen más intensas.

¿Cuántos estadounidenses sabían que Chávez había ofrecido una Constitución democrática, prevista para arrebatar el poder institucional a los corrompidos partidos políticos tradicionales, que venían repartiéndose el poder durante decenios? ¿Cuántos eran conscientes de sus reformas agrarias, que favorecían a los pequeños campesinos desprovistos de tierra?

Apenas se publicó ningún artículo apoyando sus enérgicos programas ambientales. Tampoco recibió atención en la prensa su campaña contra la corrupción, la repugnante institución que ha visto cómo las clases venezolanas de la política y los negocios han robado fortunas enteras a los pobres. Al revés que sus turbios predecesores, Chávez invirtió en educación para los pobres e intentó aumentar su participación en la riqueza. Muy en contra de sus depredadores antecesores, se esforzó en obtener más ingresos por el petróleo para Venezuela y, con una posición dura ante la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), logró aumentar sus ingresos. Chávez también cometió la herejía de oponerse al orden establecido por el mercado libre. Hizo pecar al Gobierno para promover el empleo y ofrecer créditos a los pobres y a las mujeres. Pisoteó a los ricos cuando insistió en que pagasen impuestos.

Pero la imagen que los medios de comunicación respetables daban de Chávez, le hacía aparecer como algo entre un fascista populista y un dictador comunista que gobernaba porque adoraba el poder y practicaba una extremada

censura. Las feministas occidentales apenas advirtieron los nombramientos de muchas mujeres en puestos de importancia. El estereotipo en EEUU y en los medios serviles era que Chávez era otro utópico loco por el poder, que estaba destruyendo la economía de su país.

Entonces se produjo el golpe, mostrado como un movimiento democrático para restablecer la democracia y la cordura, y evitar una guerra de clases sangrienta e inminente. Los demócratas, como los ejecutivos de la compañía estatal de petróleo y sus bien pagados dirigentes sindicales, los directivos de las federaciones de empresarios, los eclesiásticos más rígidos y, naturalmente, los medios de comunicación, se declararon a sí mismos como constituyentes de la sociedad civil y, como tal, se unieron a los “buenos” militares para salvar la democracia.

El 11 de abril, las clases pudientes, respaldadas por Washington, movilizaron 200.000 personas que, en nombre de la democracia, defendían la integridad de la compañía venezolana de petróleo, la PDVSA, cuyo equipo directivo había sido disuelto por Chávez por su incapacidad para utilizar los ingresos de forma equitativa para los venezolanos más pobres. Con anterioridad, los medios de comunicación habían difundido anuncios incesantes sobre la marcha inminente, y utilizando todos los recursos de contactos personales y presión social se logró una masiva manifestación de enemigos de Chávez. Esta minoría, representante del viejo y corrupto orden, la actual estructura de clases, desfiló durante horas por las animadas calles de Caracas.

Los dirigentes de la manifestación se desviaron del itinerario previsto para enfrentarse a unos pocos millares de seguidores de Chávez, que se habían reunido frente al Palacio Presidencial. Era previsible que el choque llegase a ser físico. Hubo disparos procedentes de la policía, de los manifestantes y de los seguidores de Chávez. Tiradores situados en los edificios abrieron fuego sobre la multitud. Murieron personas.

Se puso en práctica el plan concebido por los conspiradores, con pleno conocimiento, al menos, de las más altas autoridades de Washington. Los militares detuvieron a Chávez. Aparentemente nombraron a Pedro Carmona, el dirigente empresarial, como presidente provisional y los medios de comunicación fielmente informaron de los hechos como si la democracia estuviera siendo restaurada, en vez de destruida. Cuando la presentadora de la CNN entrevistó a Carmona, evitó preguntarle por lo más evidente: “El pueblo venezolano eligió a Chávez: ¿en virtud de qué autoridad es usted el presidente?”

Cuando centenares de miles de seguidores de Chávez salieron a las calles y, a diferencia de lo que ocurrió en Chile, las unidades militares fueron fieles al presidente elegido, el golpe se deshizo. ¡Verdaderamente, fue falta de profesionalidad! La gente que había votado por su presidente decidió que los adinerados y los intervencionistas de Washington no habrían de alterar su destino, como ya habían hecho con tantos otros pueblos latinoamericanos.

Restaurado en la Presidencia, Chávez expuso sus opiniones sobre los medios de comunicación y los subterfugios diplomáticos. Pudo estarse refiriendo a Otto Reich: “Esto no es nada nuevo si ustedes entienden que ellos están imitando a Goebbels, que en tiempos de Adolfo Hitler tenía la misión de repetir las mentiras hasta que parecieran verdades”.

*El estereotipo
en EEUU y
en los medios
serviles era
que Chávez
era otro
utópico loco
por el poder,
que estaba
destruyendo
la economía
de su país*

Me parece adecuado que, de ahora en adelante, cuando Reich o los suyos mencionen la palabra “democracia” en una conferencia de prensa, los informadores avezados deberían mostrar audiblemente su desprecio y desacuerdo más profundos.

JOSÉ GUIMÓN

Un nuevo horizonte para el desarrollo africano

La presentación oficial de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), en julio de 2001, ha generado grandes expectativas. Aunque hasta la fecha los resultados hayan sido en cierta medida decepcionantes, y a pesar del largo camino todavía por recorrer, ha mejorado sustancialmente el marco institucional y el rango político de la propuesta africana en el sistema internacional. Recientemente han tenido lugar acontecimientos importantes para el NEPAD como las elecciones de Zimbabue, la visita a África del primer ministro británico Tony Blair, la conferencia de Naciones Unidas en Monterrey o las reuniones del G8 con representantes africanos para preparar la cumbre de junio, que supuestamente dedicará una especial atención al desarrollo del continente. Este artículo presenta un resumen de los últimos sucesos y una reflexión crítica sobre la situación actual de los programas políticos para impulsar el desarrollo del continente africano.

La Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD, por sus siglas en inglés),¹ está marcando un punto de inflexión en las relaciones entre África y el mundo occidental. Se trata de una estrategia para el desarrollo del continente africano cuyo rasgo distintivo sobre las iniciativas de años anteriores es que ha

José Guimón es doctorando en Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid

¹ El NEPAD (*New Partnership for African Development*) fue presentado oficialmente el 11 de julio de 2001 en la cumbre de la Organización de la Unidad Africana (OUA) celebrada en Lusaka, Zambia. En esa misma cumbre se decidió cambiar el nombre de la OUA por el de Unión Africana (UA). El nuevo plan tiene su origen en la fusión del MAP (Programa de Renacimiento de África para el Milenio), promovido por Suráfrica, y el Plan Omega, promovido por Senegal. El texto íntegro de la última versión del NEPAD puede encontrarse en www.dfa.gov.za/events/nepad.htm

sido diseñada y promovida por un grupo de líderes africanos encabezado por el presidente surafricano Thabo Mbeki. En la actualidad lo forman 16 países africanos,² número que se espera aumente pronto.

El NEPAD es una propuesta de alianza entre África y Occidente, en virtud de la cual los países ricos se comprometerían a aumentar la ayuda al continente africano, condonar mayor cantidad de su deuda y reducir sus barreras comerciales a los productos procedentes de África. Los países africanos se comprometerían a implantar mecanismos para asegurar elecciones democráticas y buen gobierno, proteger los derechos humanos y promover la paz. En cuanto a los países ricos, el G8 se ha convertido en la principal plataforma de respuesta a la iniciativa africana.

No aporta grandes innovaciones, pero lo importante es que se trata de una iniciativa que surge desde África y para África, porque la principal razón del fracaso de otros planes anteriores con objetivos similares fue que se diseñaron desde Occidente. En este sentido, se adapta bien al nuevo enfoque para la ayuda al desarrollo promovido por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Unión Europea, que tratan de asegurar que los propios países diseñen sus programas de desarrollo. Se apoya también en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, que proponen entre otras cosas reducir a la mitad el número de personas que viven con menos de un dólar diario para el año 2015.

El control de conflictos es uno de los aspectos prioritarios del NEPAD, lo que ha sido bien recibido por Occidente, cada día más consciente de la importancia de promover la paz en todas las regiones del mundo. Se están elaborando planes para que los países africanos puedan hacer frente de forma colectiva a las guerras e implementar programas de mantenimiento de la paz y control de armas ligeras. También se solicita a los países ricos que financien la prevención, gestión y resolución de conflictos. Este es un asunto de especial importancia porque la guerra es uno de los principales obstáculos al desarrollo del continente. Según las estimaciones del Banco Mundial, los conflictos bélicos reducen el crecimiento económico anual del continente africano en un 2%. Se calcula que el 20% de la población africana vive en condiciones de conflicto y que ocho millones de africanos han perdido la vida en la guerra durante los últimos 40 años. Acabar con los conflictos es un prerequisite para salir del círculo vicioso que oprime a la región más mísera del planeta.

“Afropesimismo”

África no sólo es el continente más pobre del mundo, sino también el que menos progresos económicos ha logrado en las últimas décadas. El fuerte impacto de la todavía reciente explotación colonial sobre la economía y la complejidad del proceso de transición, han provocado que la renta per capita africana sea hoy menor

² Los países integrantes del NEPAD son Argelia, Botswana, Camerún, Congo, Egipto, Etiopía, Gabón, Mali, Mauricio, Mozambique, Nigeria, Ruanda, Senegal, Suráfrica, Túnez y Zambia.

que en 1970. África representa un 10% de la población pero sólo un 1% de la renta mundial. Más de un 33% de su población sufre problemas de malnutrición y es la única región del mundo donde la oferta de alimentos por habitante ha descendido durante los últimos cuatro años. Según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, 34 países de África se encuentran entre los 50 menos desarrollados del planeta. Aunque 20 países africanos crecieron por encima del 4% en 2001, el continente requiere un mayor y más generalizado crecimiento económico para salir de la miseria. En 2002 se prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,2% para el conjunto de África, inferior a la tasa de crecimiento de su población y muy por debajo de la tasa necesaria para empezar a paliar la pobreza, que el NEPAD estima en un 7%.

Ante los escasos progresos, el sentimiento general de “afropesimismo” se recrudece cada año. En la última década, África ha padecido una combinación catastrófica de epidemias sanitarias, disminución de la ayuda exterior, aumento de las barreras comerciales, derrumbe de los precios de las materias primas e imposición de programas de ajuste estructural que han perjudicado las economías, aumentado las desigualdades y desestabilizado los Gobiernos. La ayuda a África ha descendido de 24.200 millones de dólares en 1989 a 14.200 en 1998. La meta del 0,7% del PIB marcada en 1969 por la ONU para la ayuda al desarrollo cada vez está más lejos: durante la década de 1990 cayó de 0,33% a 0,22%. En lo relativo a la deuda externa, África todavía se encuentra atrapada por el pago de billones en intereses y pocos países han sido beneficiarios de alguna medida de condonación de deuda a pesar de las promesas de los países ricos. Además, la inversión extranjera, que ya se encontraba en niveles ínfimos en 1990, ha disminuido considerablemente, en parte, como consecuencia de la mayor aversión de los inversores al riesgo de los países emergentes tras el colapso financiero mexicano de 1995 o la crisis asiática de 1997. En comercio, África representa actualmente sólo un 2% del comercio internacional y se calcula que las barreras comerciales de Occidente le cuestan dos billones de dólares anuales en ingresos perdidos. Los precios de las materias primas exportadas por el continente africano, excluido el petróleo, cayeron un 60% entre 1980 y 2000.

*La ayuda a
África ha
descendido
de 24.200
millones de
dólares en
1989 a
14.200 en
1998*

Signos de esperanza

Aunque la situación es dramática, existen dos motivos para el optimismo. Hay signos que indican una mayor toma de conciencia, entre los países ricos, de la necesidad de apoyar el desarrollo del continente africano desde una perspectiva de beneficio mutuo. Muchos abogan por trabajar para transformar la alianza global contra el terrorismo en una alianza global contra la pobreza. En segundo lugar, está emergiendo una nueva clase política en África más profesional, madura y comprometida con el desarrollo del continente, con la paz y la democracia y con la adecuada integración de África en el sistema económico global. Esta nueva generación de dirigentes africanos también se ha esforzado por promover las relaciones intracontinentales, tanto comerciales —que siguen siendo muy escasas por el

legado del sistema colonial—, como políticas —en busca de mecanismos de integración que doten de mayor estabilidad y coordinación política al continente—.

Tanto los líderes africanos como los occidentales parecen convencidos de que ha llegado el momento de actuar con mayor empeño para poner fin a la desesperante crisis africana, y el NEPAD se ha convertido en la plataforma institucional para lograrlo. Pero la historia muestra que hay que ser escépticos con este tipo de grandilocuentes iniciativas pues a menudo tienden a ser incumplidas tanto por los países ricos como por los dirigentes africanos. ¿El NEPAD tiene potencial real o es sólo uno más de los 18 planes para el desarrollo de África esbozados en los últimos veinte años? ¿Existe verdaderamente una mayor voluntad política entre los líderes occidentales, o se trata simplemente de una respuesta más en forma de promesas falsas a las crecientes demandas de los países en desarrollo y de los grupos antiglobalización? Y los dirigentes africanos, ¿creen en las premisas del NEPAD y están dispuestos a cumplir sus compromisos, o simplemente utilizan las palabras que el G8 quiere escuchar para conseguir así mayor ayuda?

Sucesos recientes en África y Occidente

El pasado marzo, las fraudulentas elecciones de Zimbabue otorgaron de nuevo la victoria a Robert Mugabe, cuyas prácticas antidemocráticas y radicalismo racial han sumido en la miseria al que fue uno de los países más prometedores del continente. EEUU y Europa condenaron inmediatamente las elecciones. Sin embargo, los principales Gobiernos africanos, como Suráfrica o Nigeria, respaldaron el triunfo de Mugabe, lo que se interpretó como una muestra del bajo compromiso de los líderes africanos con las condiciones que, en el marco del NEPAD, ofrecen como contrapartida al aumento de la ayuda de los países ricos. El diario *El País* valoraba el gesto como “un serio revés para las declaradas, y en muchos casos retóricas, aspiraciones de los líderes regionales por hacer del continente desheredado un socio responsable en busca de justicia, democracia y bienestar, y obtener por ello la cooperación económica de Occidente”.³

Inicialmente los dirigentes africanos se resistieron a las presiones ejercidas por EEUU y Gran Bretaña, argumentando que no había suficientes indicios de fraude y que no era justo supeditar los avances del NEPAD a su actitud ante Zimbabue. Sin embargo, probablemente tras considerar el impacto que los hechos estaban teniendo sobre su credibilidad, tanto Suráfrica como Nigeria aprobaron la expulsión de Mugabe de la Commonwealth por sus prácticas antidemocráticas. Este significativo gesto fue bienvenido por analistas políticos y Gobiernos occidentales.⁴ El NEPAD conseguía de esta forma superar, con apenas un aprobado, su más difícil prueba hasta la fecha.

³ *El País*, “La farsa de Mugabe”, 14 de marzo de 2002.

⁴ *The Economist*, “Zimbabwe and Africa: The friendlessness of Robert Mugabe”, 23 de marzo de 2002.

En cuanto a Occidente, los defensores más activos del NEPAD han sido Canadá, Reino Unido y Francia, que consideran que debería ser la prioridad de la cumbre de junio del G8 en Canadá. Jean Chretien, primer ministro del país anfitrión, dedicó a África su discurso en el *World Economic Forum* en febrero, visitó después el continente y declaró haber destinado 500 millones de dólares a un fondo especial para el NEPAD. Igualmente destacable es el trabajo diplomático del primer ministro británico Tony Blair, que parece estar convirtiéndose en el padrino occidental del renacimiento africano. También Jacques Chirac, presidente de Francia, organizó una reunión con gobernantes africanos el 8 de febrero en París. Tras el encuentro, el Gobierno surafricano declaró estar "impresionado" por el compromiso mostrado por Francia y Gran Bretaña.

Pese a estas muestras de buenas intenciones, el resultado de la reunión de ministros de finanzas del G8, celebrada en febrero en Ottawa (Canadá), donde se discutieron los asuntos a incluir en el comunicado de la cumbre de junio, fue decepcionante. No se logró el compromiso para la constitución del fondo de 50.000 millones de dólares anuales para afrontar la pobreza global, que en gran parte repercutiría sobre África, propuesto por el Secretario General de la ONU. La oposición del Ejecutivo estadounidense, escéptico sobre la efectividad de la ayuda al desarrollo, fue la principal razón del fracaso.⁵ También otros Gobiernos con problemas presupuestarios, como Japón o Alemania, se mostraron reacios a incrementar la aportación de fondos.

Posteriormente, el representante francés y exdirector del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, se encargó de transmitir la triste noticia a los delegados del NEPAD, declarando que "a pesar de que hay una búsqueda genuina por ambas partes de vías para el renacimiento de África, no seremos capaces para junio de encontrar en nuestros bolsillos una gran suma de dinero para un gran fondo para África". Unas semanas después tuvo lugar en Monterrey la Conferencia Internacional para la Financiación del Desarrollo, organizada por la ONU. En ella se reprodujo el fracaso anterior, no lográndose aprobar la constitución del citado fondo.

En el terreno comercial, Mike Moore, director de la Organización Mundial del Comercio, ofreció una visión más esperanzadora durante su visita a Suráfrica, en febrero, al declarar que la ronda de Doha, presentada a finales de 2001, podría contribuir enormemente al desarrollo de África. Añadió que, "en parte gracias al liderazgo de Suráfrica como representante de los países en desarrollo, hemos avanzado más en los pocos meses de la ronda de Doha que en toda la ronda de Uruguay". También dijo que el NEPAD "es una de las más espléndidas visiones y decisiones producidas para los africanos y por los africanos" que ha visto en su vida.⁶

⁵ Ya en enero el presidente Bush anunciaba que la ayuda estadounidense a África subsahariana pasaría de los 100 millones de dólares actuales a 77 millones en el 2003. Sin embargo, se mantendría o aumentaría la ayuda "estratégica" a Marruecos y Egipto.

⁶ John Fraser, "WTO praises NEPAD", *Business Day*, 11 de febrero de 2002.

Claves para el futuro

La próxima cumbre del G8 será un momento clave para calibrar el nivel real de compromiso de los países ricos con África. El G8 se ha comprometido a hacer del plan para el desarrollo de África una prioridad, pero la reunión previa de ministros de finanzas no invita al optimismo. Lo más decisivo será la postura de EEUU y, en este sentido, es fundamental que continúen los esfuerzos diplomáticos de los países del G8 partidarios de aumentar su contribución al NEPAD. Otro acontecimiento importante es la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible organizada por la ONU, que comenzará el próximo 26 de agosto en Suráfrica.

Sería muy positivo que la Unión Europea (UE) articulase una estrategia más coordinada para apoyar el desarrollo africano. Debería dejar de escudarse en el incumplimiento de EEUU o el G8 y, si fuera preciso, pasar a la acción de forma independiente. Lamentablemente, el apoyo a la iniciativa africana no parece ser una prioridad tan importante para José María Aznar, actual presidente de la UE, como lo es para el primer ministro canadiense, anfitrión de la cumbre del G8, a pesar de la importancia estratégica de África para España. También resulta fundamental la persistencia de los líderes africanos. Aunque no alcancen sus aspiraciones en la cumbre, deben evitar caer en la desesperación para que el NEPAD no pase a engrosar la lista de planes fallidos.

Para impulsar con éxito el desarrollo de África debe acabarse con las falsas promesas y la hipocresía de los países ricos, que cada vez manifiestan estar más comprometidos con las regiones subdesarrolladas pero al mismo tiempo reducen paulatinamente el porcentaje de las rentas que dedican para ayudarlas. Deben desarrollarse instituciones con legitimidad y capacidad para el gobierno global, que mitiguen el egoísmo propio de las posturas nacionales de los países ricos y sean capaces de influir incluso sobre EEUU. Lamentablemente, todavía nos encontramos muy lejos de lograr estas metas. Desde una perspectiva menos utópica, podemos alegrarnos del notable avance que representa el NEPAD para el desarrollo africano.

TONY BLAIR: ¿PADRINO DEL RENACIMIENTO AFRICANO?

El Reino Unido ha sido uno de los países occidentales más comprometidos con el desarrollo de África, lo cual se explica por sus lazos coloniales y a través de la Commonwealth con muchos Estados africanos. En la actualidad, este interés político parece ser el eje central de la visión internacionalista de Tony Blair: un "mundo global e interdependiente" en el que Gran Bretaña actúa como "una fuerza del bien". El primer ministro británico considera que la situación actual del continente africano es "una cicatriz en la conciencia del mundo". "Si el mundo se concentrara en ella podría curarse, pero en caso contrario se volverá más profunda", afirmó en un discurso. En un artículo publicado en The Guardian, firmado conjuntamente con Thabo Mbeki, presidente de Sudafrica, afirmaba que "la lucha contra la pobreza en África es el reto moral más importante de nuestros tiempos".

Blair ha mostrado su fuerte compromiso y, aparentemente, está logrando elevar el rango del NEPAD en la agenda internacional. Entre el 7 y el 10 de febrero visitó cuatro países africanos con el objetivo de delimitar los términos en que el G8 ayudaría al continente, en virtud de "la necesidad y la posibilidad de una alianza reforzada entre los Gobiernos africanos en reforma y los países más ricos del mundo". En esos días mantuvo reuniones con los Gobiernos de Nigeria, Ghana, Sierra Leona —ex-colonias británicas— y Senegal —ex-colonia francesa— y pronunció discursos abiertos a la prensa. Realizó un importante esfuerzo diplomático y de marketing político para hacer llegar su mensaje tanto a los Gobiernos de los países ricos como a los dirigentes africanos, así como a la sociedad civil.

El viaje se produce en un momento en que los actores internacionales están más ocupados por la lucha contra el terrorismo tras los sucesos del 11 de septiembre y por la crisis de Oriente Medio. En cierta forma, la necesidad de combatir la pobreza en África está pasando a un plano secundario, pero Blair resalta en sus discursos que ahora más que nunca se hace evidente la necesidad y el beneficio mutuo de apoyar el desarrollo del continente. Para el primer ministro, "si África gana, nosotros ganamos, el mundo será más justo y seguro."

Su primer destino fue Nigeria, el país más poblado de África, donde la corrupción política, la intolerancia religiosa y la violencia han provocado un aumento de la pobreza a pesar de su potencial de desarrollo económico. La transición de un régimen militar a uno civil, hace cuatro años, no ha ayudado a suavizar el conflicto étnico —como ha demostrado el reciente rebrote de enfrentamientos entre cristianos y musulmanes—, y está previsto que la situación se recrudezca con la llegada de las elecciones en 2003. *Human Rights*

Watch advertía a Blair, en una carta dirigida antes de su visita, de la necesidad de dar respuesta “al papel del Gobierno en la violencia masiva y al fracaso de sus medidas preventivas”. Tony Blair adoptó una postura más diplomática, rindiendo tributo a “la nueva generación de líderes africanos que ven como su responsabilidad asegurar el desarrollo de África”, pero enfatizando al mismo tiempo que el NEPAD es “una calle de doble sentido”, donde el apoyo de Occidente está condicionado a que los países africanos se comprometan a afrontar la corrupción, violencia e inestabilidad.

En Ghana, que atraviesa un buen momento tras el éxito de sus elecciones de 2000, hizo público el plan de acción de su Gobierno para la paz y seguridad del continente africano. Dicho plan propone la creación de un tribunal africano de los derechos humanos y una reforma de las operaciones de paz de Naciones Unidas con mandatos más realistas y mejor coordinación entre los países. También solicita un mayor compromiso de los países de África, demandando que ratifiquen el Estatuto de Roma de la Corte Criminal Internacional. “Los largos conflictos de Angola, Sudán y Somalia, que han condenado a millones de personas a la pobreza, enfermedad o muerte prematura, están siendo ignorados por el resto del mundo”, afirma. El primer ministro anunció que tanto Gran Bretaña como la ONU estarían dispuestas a entrenar a fuerzas militares en África para combatir los conflictos internos. Ante el Parlamento explicó que “una de las razones por las que mucha gente en Occidente muestra escepticismo sobre la ayuda al desarrollo es porque, en el pasado, gran parte de la ayuda ha sido malgastada por elites y Gobiernos corruptos”.

El 9 de febrero, Blair aterrizó en Sierra Leona, donde fue recibido como un héroe nacional, en agradecimiento por su intervención militar en mayo de 2000 para proteger al Gobierno electo ante la ofensiva de los rebeldes, que ayudó a poner fin a una guerra civil de más de una década. Durante su estancia Blair reiteró que su país había “rescatado” o “salvado” a Sierra Leona, y manifestó su compromiso por “asegurar que la comunidad internacional ayude a reconstruir el país como nosotros la ayudamos a salir de su conflicto”. En último lugar visitó Senegal, una de las sociedades más libres de África, mayoritariamente musulmana, donde aseguró que no tiene “ninguna duda de que el NEPAD dominará la agenda del G8” en la cumbre de junio.

Tras la visita, sectores de la prensa local respondían que “África necesita acción, no palabras amables”. Entre otras cosas, se pedía a Blair que acompañase su discurso con una sustancial contribución al NEPAD, una labor diplomática en el seno de la UE para mejorar las condiciones de comercio y un mayor esfuerzo para convencer al G8 de apoyar al continente africano, reproduciendo el éxito político de su lucha contra el terrorismo. “África debe dejar de ser el continente reservado a las vacías palabras de amabilidad o al simbolismo político”, concluía un artículo del diario surafricano *Business Day*. El escepticismo africano sobre las intenciones de Blair es comprensible. No en vano, a pesar de manifestarse enormemente comprometido con el fin de los conflictos africanos, gracias a su apoyo la venta británica de armas a

África subsahariana se ha cuadruplicado en los últimos cinco años.⁷ En diciembre de 2001, por ejemplo, el Gobierno británico concedía una licencia de exportación a BAE Systems para proveer material armamentístico por valor de 40 millones de dólares a Tanzania. No es de extrañar que la política africana de Blair sea en ocasiones calificada de hipócrita o retórica.

J. G.

⁷ Mark Phythian, "The politics of British arms sales since 1964", Manchester University Press, Boston, 2000.

CÉSAR DOCAMPO

Filipinas, un Estado acosado

La inclusión de Filipinas en la lista de objetivos de la guerra contra el terrorismo de EEUU, le ha convertido, en febrero de 2002, en el destino de las tropas estadounidenses, lo que ha despertado antiguos fantasmas políticos. Las guerrillas insurgentes, comunistas o musulmanas, la práctica frenética del negocio del secuestro, la degradación medioambiental y la inestabilidad política constituyen los problemas a los que el Gobierno de Gloria Arroyo deberá hacer frente. Unos desafíos de vieja raigambre, algunos de los cuales han adquirido una dimensión cualitativamente diferente al agudizarse y agravarse en el tiempo.

Son muchas las causas que explican parte de estas situaciones críticas, pero es posible identificar en el carácter invertebrado del Estado filipino la última *ratio* de sus problemas fundamentales. La ruptura de su Estado colonial, más que fruto de la lucha de burguesías nacionales y clases medias, fue una cómoda concesión del Gobierno estadounidense en 1946, cuando ese tipo de posesiones coloniales era totalmente anacrónica. Desde entonces, la vida política filipina está signada por la ausencia de un sector social que piense en el país como un proyecto nacional. Por el contrario, el sistema político se estructuró a partir de grupos locales que negociaban con el poder central un *status quo* acomodaticio (al igual que lo hacían en la época colonial) y que resultó poco propenso al desarrollo de proyectos de perfil nacional. El abigarrado archipiélago, conformado por más de 7000 islas, parece reforzar ese destino de disolución y de débil unidad política. Tal situación se refleja en el carácter escasamente estructurado de los partidos, que no son más que lábiles configuraciones de patronazgos locales nada propensos a la lealtad partidaria y más bien dispuestos a traficar su apoyo al mejor postor.

La ausencia de una verdadera revolución nacional anticolonialista se expresó a nivel económico en el escaso desarrollo del mercado interno. La ausencia de sectores medios de magnitud ha provocado un crecimiento económico de características desiguales desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, y desequilibrado en términos geográficos, quedando vastas zonas del país huérfanas de la presencia de autoridades nacionales con suficiente poder de mando. Estos dos problemas los heredó la nueva democracia después del derrumbe del régimen de

César Docampo es politólogo y analista en temas de seguridad y conflictos regionales.
cesardoc@yahoo.com.ar

Ferdinando Marcos en 1986, pero poco se ha hecho para resolverlos. El débil crecimiento económico de las dos últimas décadas —comparado con Indonesia o Malasia, sin mencionar Corea—, ha agravado esos viejos síntomas de la “enfermedad” nacional filipina.

Durante la nueva fase democrática, dos presidencias han terminado su mandato completo: Corazon Aquino (1986-1992) y Fidel Ramos (1992-1998) El tercer Gobierno, el de Joseph Estrada (1998-2001), finalizó abruptamente al segundo año por corrupción. Estrada, curiosa mezcla de populismo retórico y ortodoxia neoliberal, fue demasiado corrosivo para los sectores privilegiados, temerosos de su influencia sobre los sectores populares y poco propensos a soportar un estilo excesivamente plebeyo. Reemplazado por su vicepresidente Gloria Arroyo —poseedora de un perfil “adecuado” para el gusto del *establishment*—, y después de un año en el poder, altas expectativas se ciernen sobre la que algunos denominan —quizás en una velada expresión de deseos— la “dama de hierro del sudeste asiático”.

Con variantes, todas las gestiones gubernamentales se han ocupado de armonizar con el espíritu de la época, léase ortodoxia económica y alineamiento con Occidente. Aquino inició el trabajo con fuertes políticas de reducción arancelaria, mientras que Ramos redondeaba la tarea con profundas medidas de liberalización financiera, de inversiones y comercial. El “buen clima de negocios”, al igual que otros países ocupados en ser buenos alumnos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, fue acompañado por un proceso de endeudamiento externo con un alto contenido especulativo. Hoy, con una deuda externa superior a 52 mil millones de dólares, gran parte del presupuesto nacional filipino se dedica al pago de los intereses de la misma. Los buenos números derivados de la ortodoxia —baja en el déficit fiscal, estabilidad del tipo de cambio— no logran ocultar esta amenaza que pesa sobre todo el sistema y que las aseguradoras de riesgo no olvidan a la hora de hacer sus calificaciones.

Pero mas allá de las variables clásicas, el Gobierno de Gloria Arroyo se enfrenta a tres problemas fundamentales que superan la gestión económica tradicional y suponen modificaciones políticas que afectan a aspectos sustanciales de la vida nacional. El primer gran desafío es enfrentar el principal déficit de la realidad económico-social filipina: la pobreza. El aumento de la desigual distribución del ingreso pone un claro mentís a las visiones más optimistas sobre las tendencias del crecimiento. En segundo lugar, cada vez resulta más imperioso enfrentar los profundos problemas medioambientales —que ya afectan directamente a las variables clásicas de la economía— que, en un país con una tasa de natalidad de 2,4% —el doble del promedio de la región— están convirtiendo vastos sectores del país en páramos de desolación y miseria crónica. Por último, el desafío más urgente y decisivo de Filipinas es contrarrestar la situación de inseguridad creciente que está afectando severamente a los negocios del país. No sólo dar solución política a los conflictos desarrollados por las guerrillas comunistas y musulmanas, sino también reconfigurar un sistema de seguridad —Fuerzas Armadas más Policía Nacional— altamente corrupto y desestructurado, incapaz de articular una cadena de mandos y de recibir una dirección estratégica adecuada.

Pobreza y degradación medioambiental

Más de un tercio de los 75 millones de filipinos existentes se encuentra por debajo de la línea de pobreza. En sectores del sur del país —Mindanao, Tawi Tawi, archipiélago Sulu— este índice alcanza el 60%. Quizá el mayor déficit de la democracia filipina resida en su incapacidad para derivar parte del ingreso nacional hacia los sectores más desfavorecidos. La situación se agrava a medida que la población crece a tasas muy elevadas.

La mala distribución de la tierra es el factor principal que subyace bajo la desigualdad social —Filipinas es el país con mayor desigualdad de Asia—. Durante el siglo XX, casi todos los Gobiernos —incluido el periodo colonial estadounidense— han dictado normas y leyes para enfrentar la cuestión agraria,¹ pero los sectores privilegiados han resistido con éxito —en ocasiones recurriendo a milicias privadas— cualquier cambio sustancial. Las miles de páginas de códigos y leyes se han transformado en documentos de escasa significación real.

La presión demográfica, junto a la extremadamente desigual distribución de la tierra, han provocado sistemáticas invasiones de tierras vírgenes en las zonas montañosas, lugar donde históricamente se han establecido poblaciones indígenas con prácticas agrícolas comunitarias. Estos grupos se han visto severamente perturbados por la presencia de campesinos sin tierras provenientes de las zonas bajas, con sus prácticas agrícolas predatorias, y por las compañías, principalmente extranjeras, que practican la tala sistemática de árboles con poca noción de la sustentabilidad. La profunda deforestación de estas zonas² no sólo afecta al ecosistema y la actividad económica que se sustenta en él, sino que influye severamente sobre los estilos de vida aborígenes —unas 10 millones de personas— de carácter ancestral. La pérdida de la riqueza vegetal va acompañada por la destrucción de un rico mundo de valores étnicos peculiares.

Así mismo, la deforestación genera una creciente erosión de los suelos y la destrucción de tierras por anegamiento. Tal situación empeora los índices de productividad agrícola, que se han reducido significativamente en la última década.³ En los casos más extremos, la sedimentación de los ríos, fruto de la deforestación, está dañando severamente los recursos hidrológicos, agravando el balance energético nacional ya de por sí endeble.

La dimensión de dichos desafíos es apabullante. Desde el comienzo del nuevo periodo democrático, en 1986, la sociedad civil filipina ha iniciado un arduo camino de construcción de organizaciones capaces de dar alguna respuesta a

*La mala
distribución
de la tierra
es el factor
principal que
subyace
bajo la
desigualdad
social*

¹ Si algo positivo dejó la ocupación estadounidense en Japón, Corea y Taiwan durante la II Guerra Mundial fue la imposición de la reforma agraria.

² La tasa de deforestación en los últimos 60 años ha estado entre las mayores del mundo. En 1934 los bosques cubrían el 57% del territorio; a principios de los años noventa alcanzaba apenas el 20%. Ver Marvic Leonen, "The Philippines: dwindling frontiers and agrarian reform", en Marcus Colchester y Larry Lohman (eds.), *The struggle for land and the fate of the forests*, Zed Books, Londres, 1993.

³ Norman Myers, *Ultimate security: the environmental basis of the political stability*, W. W. Norton & Co., Nueva York, 1993.

estos problemas, aunque sea de forma parcial y fragmentaria. ONG y organizaciones sociales de todo tipo, al margen de los endeble partidos políticos, han tenido un crecimiento exponencial, conformando actualmente alrededor de 60.000 entidades con un trabajo cada vez más efectivo y concreto. Muchos observadores han puesto su esperanza en ellas, dada la impericia de los Gobiernos o la molice de los partidos. Si bien el entramado de relaciones entre estas organizaciones es intenso, todavía no han logrado alcanzar una “voz nacional” debido a la heterogeneidad de sus orígenes y preocupaciones. Pero a causa de la severidad de muchos de los problemas y de su interrelación, no se descarta que en el futuro estas organizaciones civiles adquieran una perspectiva política nacional y logren terciar efectivamente en la mayoría de las decisiones públicas que afectan a todos los filipinos.⁴

Bandas armadas y guerrillas: el Estado en entredicho

El carácter endeble e invertebrado del Estado filipino se expresa con mayor dramatismo en su incapacidad para ejercer el monopolio legítimo de la violencia. La autoridad política vive en un estado permanente de acoso por bandas armadas dedicadas a todo tipo de actividades delictivas —donde el secuestro es la principal fuente de ingresos— y por organizaciones guerrilleras —comunistas y musulmanas— con más de veinte años de experiencia, sin contar los grupos paramilitares privados. Esta realidad asfixiante se refleja en la misma calidad de las organizaciones militares y policiales que, atravesadas por la corrupción y la indisciplina, transitan sin mediaciones las fronteras de la legalidad y la ilegalidad.

La industria del secuestro, con una larga tradición en la historia del país, se ha fortalecido en los últimos años. Ya no sólo es afectada la elite económica china —que maneja gran parte de los negocios del país—, sino cualquier individuo atractivo desde el punto de vista económico, inclusive los empresarios extranjeros.⁵ Posiblemente el secuestro sea el delito en el que el delincuente deba contar en mayor medida con la aquiescencia de la autoridad pública. En el caso filipino, las “afinidades” entre secuestradores y autoridades militares y policiales es manifiesta. Muchos oficiales y policías se han hecho adictos a tales prácticas.

Filipinas heredó de su lucha contra la ocupación japonesa un conjunto de organizaciones militares de ideología comunista y raigambre campesina que se transformó, bajo la nueva vida independiente del país, en un duro actor político

⁴ En 1996 un conjunto multifacético de organizaciones populares establecieron las bases para la conformación de una nueva entidad política, Akbayan (Partido de la Acción Ciudadana). La nueva agrupación enfatiza el trabajo político a nivel local y la participación efectiva, en las elecciones con candidatos propios. Las organizaciones populares rompen así el tradicional temor a involucrarse en actividades electorales. Joel Rocamora, *Formal Democracy and its alternatives in the Philippines: parties, elections and social movements*, agosto 2000. En www.tni.org

⁵ Recientes congresos y ferias internacionales han sido suspendidos por el temor de empresarios de Taiwan y Singapur a ser secuestrados. La psicosis de la clase empresarial va en aumento.

contestado. La rebelión campesina Huks, desarrollada entre finales de los años cuarenta y comienzos de los años cincuenta, requirió de todo el esfuerzo del Estado, junto a una importante ayuda estadounidense, para enfrentar el “peligro comunista” que pudo ser conjurado. Quizás en la derrota de la rebelión se perdió la última oportunidad para realizar una reforma agraria seria. No obstante, la lucha guerrillera de tono maoísta continuó de forma soterrada y resurgió en las décadas de 1960 y 1970, formando un ejército de más de 40 mil hombres y desafiando al poder central en todo el país, incluida Manila. Si bien después de muchos errores políticos y disensiones internas, el Nuevo Ejército del Pueblo se ha debilitado sensiblemente, sigue siendo un actor corrosivo para el Estado.

La presidenta Aquino fue la primera que inició negociaciones más o menos serias con los comunistas, pero desde el inicio se vieron las limitaciones del poder presidencial. No sólo las Fuerzas Armadas boicotearon las negociaciones con ataques a los campamentos rebeldes, también el *establishment* económico y los grupos paramilitares del interior del país se opusieron con mayor o menor virulencia. Desde entonces, la historia se repite: las iniciativas de negociación emanadas desde Manila se disuelven en un mar de indecisión, mala fe y sabotajes velados por parte de los enemigos del proceso de conciliación.

El Estado filipino también ha tenido que enfrentar un segundo grupo guerrillero de origen musulmán. Éste ha operado durante más de 20 años en Mindanao y el resto de las islas del suroeste. Los musulmanes —que constituyen el 5% de la población total— son mayoría en varias provincias de Mindanao y en algunas islas del archipiélago Sulu. Desde la conquista española en el siglo XVI, esta zona ha mostrado una marcada resistencia a cualquier tipo de asimilación. La política del poder central aposentado en Manila transitó a lo largo de los siglos desde la indiferencia y el conflicto hasta algún tipo de pacto de no agresión. Pero a partir de la conformación de los Estados y su necesidad de delimitar fronteras y establecer los símbolos del poder, la preservación de la identidad musulmana se volvió un conflicto más candente y políticamente más significativo. Los estadounidenses, después de arrebatarse el país a los españoles en 1898, emprendieron una fuerte política represiva, la cual adquirió niveles tan cruentos que hasta despertó la crítica en muchos medios de comunicación estadounidenses.

Desde principios del siglo XX hasta la actualidad, la isla de Mindanao ha sido el principal escenario del conflicto entre cristianos y musulmanes. Una nueva época comenzó con la independencia de Filipinas después de la II Guerra Mundial. La política de ocupación de tierras musulmanas por parte de campesinos cristianos, impulsada desde Manila, incrementó la tensión en la zona a partir de los años cincuenta y dió el origen a nuevas generaciones de militantes y combatientes musulmanes. La década de 1960 vio la aparición de esta nueva generación, más educada y activa, que operó en sintonía con otro conjunto de movimientos de liberación nacional en el Tercer Mundo. En este momento se conformó el Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN) y la lucha insurgente adquiere todas las características de una cruzada. En parte, las milicias musulmanas fueron una respuesta a las cristianas que operaban en la zona en defensa de los territorios usurpados. El FMLN se constituyó en la columna vertebral de la resistencia a la integración forzada y al despojamiento de tierras

*Las
iniciativas de
negociación
emanadas
desde Manila
se disuelven
en un mar de
indecisión,
mala fe y
sabotajes
velados por
parte de los
enemigos del
proceso de
conciliación*

A pesar de las políticas represivas, el Gobierno de Manila no descartó nunca el camino de la negociación, de buena o de mala fe, en parte porque desde el lado musulmán había varios sectores, principalmente los más tradicionalistas y acomodaticios, que estaban dispuestos a un acuerdo. Hasta el presidente Ferdinando Marcos, y a pesar del tono fuertemente represivo de su régimen, realizó acuerdos con estos grupos que con el tiempo demostraron ser únicamente papel pintado. Los sucesores de Marcos, Corazón Aquino y Fidel Ramos, ambos con mejores intenciones que el dictador, se sentaron a la mesa de negociaciones. Después de muchos devaneos, en 1996 se logró establecer un esquema de autonomía en algunas provincias de Mindanao que pasaron a estar a cargo del líder del FMLN Nur Misauri.

Los distintos sectores del poder plantean posturas diferentes respecto a la ecuación “negociación-represión” frente a las poblaciones musulmanas del sur. Al interior de los grupos musulmanes también hay fuertes disputas, no sólo por las definiciones tácticas y estratégicas, sino por meras cuestiones de liderazgo personal. El estilo y las tácticas de negociación de Misauri despertaron el recelo de varios grupos y a principios de los años noventa un grupo del FMLN se escindió para formar el Frente Moro de Liberación Islámico (FMLI). Esta denominación marcaba un significativo cambio: en la década de 1960, Liberación Nacional; en la década de 1990, Liberación Islámica. La nueva ola de internacioalismo islamista también llegaba a las islas del sur de Filipinas.

El FMLI ha encabezado posturas más radicales. La experiencia autonomista de Misauri ha sido pobre en resultados y provocado mucha frustración, lo que ha envalentonado a aquellos que creen que la única solución es la independencia.⁶ En los últimos años el impulso independentista adquiere nuevos bríos. El aumento de la pobreza y exclusión de la población musulmana incrementa el deseo independentista. Las posiciones más extremas reclaman alrededor del 40% del territorio nacional, con su principal baluarte en la isla de Mindanao, algo irrealizable dada la correlación de fuerzas. La existencia de un tercer grupo insurgente islámico, el de *Abu Sayyaf*, que opera en Filipinas desde inicios de los años noventa, aumenta dramáticamente el conflicto —dado el carácter espectacular de sus secuestros y el tono cruento de muchas de sus operaciones— y dificulta las negociaciones por una mayor autonomía

EEUU y un nuevo frente contrainsurgente

EEUU, bajo la suposición de que *Abu Sayyaf* mantiene conexiones con la red *Al Qaeda*, han encontrado en el sur de Filipinas un nuevo frente de combate contra el islam insurgente. La presencia estadounidense al sur de Mindanao y de la isla Basilan —centro de operaciones de *Abu Sayyaf*— para el ejercicio de prácticas

⁶ Misauri abandonó el poder y encabezó un intento de rebelión en Mindanao frustrado por las autoridades. Actualmente se encuentra detenido por cargos de sedición. Un nuevo liderazgo, apoyado por Manila, se encuentra al frente de la Zona Autónoma Musulmana.

conjuntas con fuerzas filipinas (denominadas *Balikatan 01.-2*) han originado varias disputas.⁷ Las fotos de varios rangers vestidos de civil portando armas largas, mientras uno de sus compañeros realizaba operaciones bancarias, ha despertado la indignación popular. En el ejército, dos oficiales de alta graduación han sido desplazados solapadamente por no aceptar las condiciones de operación que suponía la presencia de soldados estadounidenses en la zona. Según el documento final que guía las operaciones de las tropas extranjeras, éstas operan bajo su propio comando pero en última instancia se encuentran bajo la orden de la autoridad filipina. Esto originó la polémica en EEUU debido a que la Constitución prohíbe que fuerzas nacionales se encuentren bajo control de otro país. No obstante, los observadores comprenden que las tropas estadounidenses, en caso de verse atacadas por el enemigo, operarán bajo su propio comando y según sus propios criterios independientemente de cualquier nivel de comando filipino, regional o nacional.⁸

¿El perfil operativo de *Abu Sayyaf* justifica este esfuerzo estadounidense? Los analistas especulan sobre el grado de peligrosidad de la organización. No hay acuerdo sobre el número de voluntarios, no obstante es un grupo reducido que no supera los 3000 miembros.⁹ En cuanto a su estrategia política, algunos analistas suponen que sus declaraciones oficiales sólo ocultan un mero deseo de lucro, satisfecho con la política sistemática de secuestros. Esta parece una opinión más bien reduccionista, o muy apegada a la visión oficial de Manila.

La presencia estadounidense parece demostrar que no estamos frente a un mero grupo de oportunistas que suman sus acciones a una de las industrias nacionales de Filipinas: el secuestro. En principio, la posible vinculación de *Abu Sayyaf* con *Al Qaeda* parece verosímil y cierta debido al origen de muchos de sus miembros, especialmente su fundador. Dado que Filipinas es el único país de la región que está en condiciones políticas de aceptar tropas estadounidenses en su territorio, era impensable que Washington desaprovechara la oportunidad. En la región de marras, conviven Malasia e Indonesia, dos países que guardan grupos insurgentes en su territorio y de los cuales no se descarta la cooperación. Es posible que esta sea la principal preocupación de Washington y que su presencia en la región, además del perfil de combate contrainsurgente, también contemple tareas de inteligencia a medio plazo.

⁷ La oposición argumentó que la Constitución prohíbe la presencia de tropas extranjeras, pero la presidenta Arroyo justificó su posición considerando que la ley dictada hace dos años (*Visiting Forces Agreement*) legaliza la actuación de los *rangers*.

⁸ Se supone que la presencia de los *rangers* responde a la práctica de ejercicios conjuntos de entrenamiento. No obstante, el Jefe del Estado Mayor estadounidense, el general Richard Myers, dijo en una audiencia del Congreso que “era absolutamente posible que las tropas estadounidenses pudieran sufrir bajas durante los ejercicios, especialmente en combates con *Abu Sayyaf*”. En “Manila plans to ban US forces from combat role”, *Financial Times*, 8 de febrero de 2002.

⁹ Algunos grupos del FMLN que respondían a Nur Misuari se han aliado a *Abu Sayyaf*.

Manila espera que la contribución estadounidense —que no supera los 600 hombres— mejore la *performance* de su ejército de tierra.¹⁰ En momentos decisivos no parecieron estar a la altura de las necesidades y los últimos años han estado jalonados de fracasos. Algunos analistas especulan hasta de connivencia entre algunos miembros del ejército y el grupo de *Abu Sayyaf*, lo que no sería de extrañar dada la tradición del arma y la gran cantidad de dinero que empieza a circular por las islas del sur fruto de la industria del secuestro.

Filipinas guarda en su territorio una de las tantas fronteras del mundo islámico con el mundo cristiano u occidental. En estos momentos tal situación no puede más que ser fuente de preocupación y de análisis de los observadores internacionales. Si bien *Abu Sayyaf* supone cierto nivel de peligro, al igual que los otros grupos insurgentes, los problemas reales de Filipinas residen en una estructura social altamente desigual y en un crecimiento económico que, más allá de algunos indicadores del buen gusto ortodoxo, no logra más que generar mayor pobreza y crisis medioambientales más agudas e irreversibles. Ni la presencia estadounidense ni las buenas notas de los organismos internacionales lograrán solucionar estos problemas. Sólo un proyecto político que incluya a la mayoría de la población a través de una autoridad política sólida y legítima, podrá vislumbrar algunas de las soluciones que la sociedad filipina tanto necesita.

Derechos colectivos indígenas: una barrera contra la depredación

La nefasta retroalimentación entre pobreza y degradación medioambiental se expresa de forma dramática en la cuestión indígena. Con casi el 20% de la población, las diversas comunidades etno-lingüísticas que pueblan Filipinas han sido sometidas a un conjunto de políticas violentas que las han obligado a ser testigos de la destrucción de sus territorios ancestrales y, en muchos casos, a la emigración forzada. Las comunidades indígenas, principalmente situadas en las tierras altas, las más ricas en activos naturales y por tanto las más afectadas por el estilo de crecimiento imperante altamente depredador, junto a un grupo sustancial de ONG y grupos de activistas medioambientales han confrontado con el poder central y las empresas para preservar el habitat donde han desarrollado sus estilos de vida desde tiempo inmemorial.

El resultado de las batallas legales y de los conflictos abiertos, muchos

¹⁰ El Gobierno de Bush ha pedido 77 millones de dólares de ayuda militar para Filipinas, un aumento sustancial respecto a los 22 millones del año pasado. La firma de un acuerdo de ayuda logística mutua (Mutual Logistics Support Agreement) es el paraguas para la transferencia de equipos. Además, permite hacer usar moderadamente la antigua Base Clark que, junto a la Base Naval de Subic, debió ser abandonada por los estadounidenses en 1992 cuando el Senado no renovó el acuerdo, firmado en 1947, para su permanencia.

de ellos violentos, es desesperanzador. La degradación medioambiental continúa y la preservación de los saberes ancestrales y de la vida cotidiana de las comunidades se debilitan. No obstante, en los últimos años, ciertos acontecimientos y actitudes políticas derivadas desde el poder central parecen vislumbrar algún tipo de esperanza.

En 1997 se promulgó la Ley sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas y desde entonces se abrieron nuevos caminos para la lucha de las comunidades aborígenes. El principal instrumento derivado de esta pieza legislativa son los Certificados de Dominio Ancestral, por el cual se reconocen los derechos colectivos de las comunidades sobre un territorio previamente especificado. Hasta ahora, el Gobierno ha reconocido más de 100 reclamos a través de la Comisión Nacional del Pueblo Indígena, un cuerpo creado por la Ley Indígena y compuesto por miembros del Gobierno y de las comunidades.

La resistencia al otorgamiento de estos Certificados de Dominio Ancestral ha sido muy marcada. Durante el Gobierno de Estrada hubo una denuncia hecha por particulares frente a la Corte Suprema de Justicia aduciendo la inconstitucionalidad de la mencionada Ley. Según los denunciantes, ésta contradecía la prerrogativa del Estado a ejercer el derecho público sobre todo el territorio nacional. Tal denuncia fue una buena excusa para que Estrada suspendiera todo el proceso de ejecución y puesta a punto de los Certificados de Dominio Ancestral.

Con el Ejecutivo de Arroyo (enero 2001) la situación ha cambiado. La Corte Suprema saldó el contencioso a favor de la Ley Indígena y el nuevo Gobierno parece dispuesto a seguir adelante con sus lineamientos. No obstante, las empresas y muchos municipios afectados por los nuevos derechos están oponiéndose, vía legal y de facto, al ejercicio de los derechos indígenas. En el caso de las empresas mineras, la principal fuente de derechos deriva de la Ley de Minería promulgada varios años antes que la Ley Indígena. Estas dos leyes son los dos baluartes legales en los que se apoyan las principales partes en conflicto. Éste se verá agravado debido a que los pueblos indígenas poseedores de los certificados de marras tendrán derecho a dar un previo consentimiento a cualquier tipo de explotación sobre sus tierras, y porque algunas comunidades indígenas han comenzado a ejercer su derecho a la recolección de impuestos y cobro de servicios turísticos en sus territorios, desplazando a la autoridad política tradicional.

El gran desafío de las comunidades indígenas es la administración de los recursos bajo su cuidado. Si bien son poseedoras de saberes ancestrales que contribuirán al buen manejo de los ecosistemas, es necesario un conjunto de técnicas y conocimientos modernos, no sólo para realizar una explotación sustentable y económicamente beneficiosa, sino también para contrarrestar las argucias y artimañas de los enemigos de este nuevo sistema de reconocimiento de derechos colectivos. En este sentido, el trabajo de las ONG está siendo decisivo.

C.D.

NICOLÁS DORRONSORO

Cachemira: la obstinación de la identidad

El conflicto de Cachemira¹ ha sido tradicionalmente una cuestión olvidada y mal conocida por la opinión pública internacional. Las siguientes páginas constituyen un esfuerzo por ofrecer una visión panorámica del conflicto que ayude a situar y valorar los acontecimientos que se suceden en la zona. Desde 1998, han muerto a causa del conflicto cachemir más de 35.000 personas, la mayoría de ellas civiles.²

Desde 1947 India y Pakistán se enfrentan por la soberanía del estado de Jammu y Cachemira. A primera vista, sorprende que un conflicto originado poco después del fin de la II Guerra Mundial continúe vigente en el siglo XXI. Esta extraordinaria longevidad resulta más incomprensible cuando los dos contendientes comparten enormes niveles de pobreza y analfabetismo: el 40% de los niños paquistaníes menores de cinco años y el 63% de la población india de la misma edad sufren malnutrición; el 65% de los paquistaníes y el 52% de los indios son analfabetos.³ Buena parte de esta realidad está directamente relacionada con el conflicto entre ambos países. El enfrentamiento con India exprime la economía paquistaní hasta destinar un 45% del presupuesto nacional a gasto militar, mientras que la India dedica aproximadamente la mitad que Pakistán a este capítulo.⁴ La rotundidad de estas cifras, sin embargo, no es argumento suficiente para una paz duradera entre ambos Estados. La intensa percepción del otro como una amenaza real a la propia supervivencia ha demostrado ser mucho más poderosa y ha llevado a ambos países a poseer el arma nuclear.

¹ Rosa Meneses Aranda, "India, Pakistán y EEUU: juego de alianzas por Cachemira, *Papeles de Cuestiones Internacionales*, nº 77, primavera de 2002.

² Alexander Evans, "Why Peace Won't Come to Kashmir", *Current History*, abril de 2001.

³ Robert Wirsing, "The Kashmir Conflict", *Current History*, abril de 1996.

⁴ Ahmed Rashid, "Pakistan's Coup: Planting the Seeds of Democracy?", *Current History*, diciembre de 1999.

Nicolás Dorronsoro
es periodista,
master en
Relaciones
Internacionales y
en Sociología
Política

Son dos los conflictos que tienen lugar en la zona: uno busca la integración de Cachemira en Pakistán; y el otro persigue la independencia del territorio.⁵ Las versiones de la historia de Cachemira que pugnan entre sí son tres, cada una con sus propios argumentos históricos y culturales. La postura independentista entiende que Cachemira es una nación cuya identidad propia reside en la religión mayoritaria, el islam sufí, y en una historia de lucha contra la dominación exterior. La segunda versión considera que la identidad de Cachemira descansa en la naturaleza islámica de su población, por lo que debería formar parte de Pakistán, de conformidad con el principio de “dos naciones” que dio origen a este país.⁶ Según la tercera postura la identidad propia de Cachemira responde a la influencia del hinduismo en la región, por lo que una India secular y democrática constituye el mejor marco en el que preservar la cultura cachemir.⁷

Las raíces del conflicto

El estado de Jammu y Cachemira está compuesto por tres regiones: el valle de Cachemira, que es mayoritariamente musulmán (95%) y en el que se encuentra la mayor parte de la población; Jammu, que posee una mayoría hindú pero también una significativa minoría musulmana; y Ladakh, mucho menos poblado y de mayoría budista. La naturaleza artificial del estado —un excelente caldo de cultivo para los problemas posteriores— se gesta a mediados del siglo XIX con la creación por parte de Gran Bretaña del reino de Cachemira. Tras derrotar al ejército Sij en 1846, el Gobierno británico permitió hacerse con el valle de Cachemira al entonces gobernante hindú de Jammu, Gulab Singh, por el precio de 7,5 millones de rupias. Como consecuencia de ello, el reino carece de una identidad étnica o lingüística “natural” desde su creación.⁸

Los acontecimientos que precipitan el conflicto se desarrollan en el marco de la independencia de India y Pakistán en 1947. La interpretación partidista de estos hechos ha originado una confrontación paralela en los libros de historia (en la que, por supuesto, el rival es el causante del inicio de las hostilidades).

Durante la era colonial, 562 estados del subcontinente indio, conocidos como “principescos”, habían gozado de una semi autonomía bajo el Gobierno británico. Como consecuencia del proceso independizador, los gobernantes de estos territorios debían incorporarse a India o Pakistán antes del 15 de agosto de 1947.

⁵ Prem Shankar Jha, *Kashmir 1947. Rival versions of history*, Oxford University Press, Nueva Delhi, 1996.

⁶ La teoría de las “dos naciones”, que dio origen a Pakistán, consideraba que musulmanes e hindúes del subcontinente indio constituían dos naciones distintas, por lo que los musulmanes de la región eran acreedores de un Estado propio.

⁷ Maya Chadda, *Themes in Kashmiri Nationalism*, Columbia University Press/Oxford University Press, 1997, cap. III (<http://www.kashmirgroup.freeseerve.co.uk/>).

⁸ *Ibidem*.

De entre todos ellos, el estado de Jammu y Cachemira planteaba la dificultad de contar con una población mayoritariamente musulmana (77%) gobernada por un maharajá hindú, Hari Singh.

Pakistán defendía la incorporación de Cachemira arguyendo la teoría de dos naciones y la contigüidad geográfica de la región.⁹ Por el contrario, el entonces primer ministro de la India, Jawaharlal Nerhu, de origen cachemir, consideraba que un estado mayoritariamente musulmán como Cachemira podía coexistir en paz en un Estado laico de mayoría hindú. En contra de ambos pretendientes, el maharajá de Cachemira buscaba la independencia del territorio.

Llegada la fecha límite del 15 de agosto, el maharajá intentó congelar de manera temporal su incorporación a uno u otro Estado mediante la firma de un acuerdo con ambos. Sin embargo, sus esfuerzos por ganar tiempo se vieron frustrados por la invasión de un contingente de tropas procedentes de Pakistán el 22 de octubre.¹⁰ Ante la imposibilidad de hacer frente a la invasión, el maharajá de Cachemira pidió ayuda a la India.

Nerhu ofreció su ayuda con dos condiciones: que Hari Singh firmara la anexión de Cachemira a India y que ésta contara con el beneplácito de Sheik Abdullah, líder del partido político musulmán mayoritario en la región.¹¹ Cumplidos los dos requisitos, el ejército indio intervino en Cachemira y frenó el avance de las fuerzas de procedencia paquistaní.

La situación llevó a la India a solicitar la mediación de Naciones Unidas el 1 de enero de 1948 (circunstancia que lamentaría posteriormente). Por una parte, el Consejo de Seguridad reconoció la validez legal de la anexión. Por otra, según la resolución 47/1948 de abril las fuerzas paquistaníes debían abandonar el territorio y la presencia militar india debía reducirse al mínimo para que, una vez se dieran estos requisitos, los habitantes de la región decidieran a qué Estado deseaban incorporarse en un referéndum bajo supervisión internacional.

Sin embargo, los contendientes no modificaron sus posiciones. Ambos países hicieron caso omiso de la resolución y las posturas se endurecieron. La intervención de Naciones Unidas hizo posible un alto el fuego en enero de 1949. Cinco meses después, Pakistán e India llegaron a un acuerdo sobre la composición de la línea del frente y Naciones Unidas dispuso observadores a ambos lados de ésta para vigilar que el alto el fuego se respetara. De este modo, la línea de fuego se convirtió en una frontera de facto: Pakistán incorporó el territorio conquistado bajo la denominación de Cachemira Libre (*Azad Kashmir*) y dos terceras partes de la región permanecieron en territorio indio como el actual estado de Jammu y Cachemira.

*Pakistán
defendía la
incorporación
de Cachemira
arguyendo la
teoría de dos
naciones y la
contigüidad
geográfica
de la región*

⁹ El término *Pakistán* fue acuñado en 1933 tomando las primeras letras de Punjab, Afghanistan, Kashmir, junto con la terminación *-istan* en la que se hacía referencia a Sindh y Beluchistán. *Pak* significa puro o casta en urdú. Ishtiaq Ahmed, *State, nation and ethnicity in contemporary South Asia*, Pinter, Londres y Nueva York, 1996.

¹⁰ Este episodio ha generado numerosos escritos ya que la legitimidad de buena parte de lo ocurrido posteriormente descansa en los motivos de esta intervención.

¹¹ Sumit Ganguly, "An Opportunity for Peace in Kashmir?", *Current History*, diciembre de 1997.

De la independencia al estallido de 1988

Es preciso distinguir dos relaciones en el conflicto: el conflicto entre India y Pakistán por Cachemira; las relaciones del estado de Jammu y Cachemira con la Unión India, que desencadenaron otro conflicto diferente en 1988.

A) Conflicto India – Pakistán

Tras el alto el fuego de 1949, el conflicto de Cachemira volvió a ser objeto de una nueva guerra a gran escala en 1965, que se saldó sin cambios en el *statu quo ante*. Sin embargo, otro enfrentamiento por un territorio distinto, Bangladesh, sí tuvo consecuencias de primer orden para el futuro de la región. Como resultado del acuerdo de Simla, en 1972, entre una India victoriosa y un Pakistán humillado, ambos países acordaron su rechazo a una intervención extranjera para solucionar el conflicto.¹² Desde entonces, la India ha especificado que este acuerdo supone el único marco válido para la resolución del contencioso. Pakistán, por el contrario, considera que el acuerdo de Simla carece de validez porque la India lo ha utilizado para aplazar cualquier intento de negociación.

Las consecuencias de esta derrota fueron enormes para Pakistán y para la relación entre ambos países. Por un lado, la independencia de Bangladesh demostró que, en este territorio, los lazos lingüísticos eran más fuertes que los religiosos, lo que supuso un durísimo golpe tanto para la teoría de las dos naciones (razón de ser de Pakistán) como para las aspiraciones paquistaníes sobre Cachemira.¹³ Por otra parte, la pérdida territorial agudizó el sentimiento de vulnerabilidad de los paquistaníes.¹⁴ Esta circunstancia, unida a las primeras pruebas nucleares de India en 1974, espoleó el desarrollo del programa nuclear paquistaní.

Desde entonces, la política exterior de ambos países ha discurrido en compañía de una carrera tecnológica por la obtención y el perfeccionamiento del arma nuclear.¹⁵

B) Relación India-Cachemira: los cimientos del independentismo cachemir

La evolución del estado de Jammu y Cachemira en el seno de la Unión India es, en buena medida, la historia del impulso y posterior retroceso de una autonomía territorial. En un principio, Nerhu y Sheikh Abdullah acordaron un estatus de máxima autonomía para la región. La concepción de Jammu y Cachemira como

¹² Ishtiaq Ahmed, *State, nation and ethnicity in contemporary South Asia*, Pinter, Londres y Nueva York, 1996.

¹³ Sumit Ganguly, *Op.Cit.*

¹⁴ Pratap Bhanu Mehta, "India: The Nuclear Politics of Self-Esteem", *Current History*, diciembre de 1998.

¹⁵ El International Institute of Strategic Studies (www.iiss.org) considera que Pakistán posee plutonio para desarrollar de 10 a 30 bombas atómicas, mientras que India dispondría de este material para un mínimo de 65 y un máximo de 90.

un estado con una cultura e identidad diferenciadas quedó amparada por el artículo 370 de la Constitución india. Como consecuencia de estas garantías, una asamblea constituyente cachemir ratificó el Tratado de Acesión y adoptó una Constitución para Jammu y Cachemira en 1954, lo que le convirtió en el único estado indio con Constitución propia.¹⁶

La muerte de Nerhu en 1964 supuso el inicio de un progresivo cambio en la relación del poder central con los estados de la Unión India. Tal y como indica Gupta, “tanto Indira como Rajiv Gandhi se desviaron de los métodos de Nerhu insistiendo en la centralización de la autoridad; cortando las raíces federales de la estructura de poder; eliminando sistemáticamente el poder de los centros regionales y de sus líderes, incluidos los de su propio partido; reduciendo a los gobernantes de los respectivos estados a la categoría de honorables vasallos”.¹⁷ Como consecuencia del proceso centralizador, la relación entre India y Cachemira se deterioró hasta acabar convirtiéndose en un terreno abonado para la violencia independentista.

En 1988 se produjo un estallido de violencia, en cuyo origen jugaron un papel importante cuatro factores:

- Pese a las victorias sistemáticas del partido nacionalista cachemir, el retroceso en la autonomía de la región propició un sentimiento de gran desconfianza hacia la democracia india.¹⁸
- Los progresos en la alfabetización y en la economía acentuaron la conciencia nacionalista mayoritaria en la región.¹⁹
- La identidad islámica del territorio se endureció ante la progresiva intensificación del nacionalismo hindú (que pide la eliminación del artículo 370 y la incorporación plena en la Unión India).²⁰
- Los cambios del sistema internacional en 1989 estimularon la aspiración independentista.

El autodenominado Frente de Liberación de Jammu y Cachemira inició una espiral de violencia en julio de ese mismo año con la explosión de tres bombas en edificios del Gobierno indio en Srinagar. Pese al carácter nacionalista de la

¹⁶ Pakistán afirmó que las leyes aprobadas no eran consistentes con lo establecido por Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad tampoco otorgó validez a la medida. Ishtiaq Ahmed, *Op. Cit.*

¹⁷ Shekhar Gupta, *India Redefines its role*; Adelphi Paper 293, International Institute of Strategic Studies, Londres, 1995.

¹⁸ Ishtiaq Ahmed, *Op. Cit.*; Ahmed Rashid, “Uncertain India”, *Current History*, abril de 1996.

¹⁹ La alfabetización en el estado de Jammu y Cachemira creció de un 17% en 1961 a un 36% en 1981. En 1965 había cuarenta y seis periódicos en la región; en 1984, la cifra era de 203. Sumit Ganguly, *Op. Cit.*
Ishtiaq Ahmed también señala la gran mejora de las condiciones de vida en la región entre 1977 y 1984. Ishtiaq Ahmed, *Op. Cit.*

²⁰ *Ibidem.*

El crecimiento del nacionalismo hindú y el mayor cariz islámico del terrorismo cachemir han subrayado la identidad religiosa de los contendientes en los últimos años

violencia, Pakistán, en un ejercicio de oportunismo político, se involucró en el conflicto proporcionando santuarios, entrenamiento, organización y armas a los terroristas.²¹ El resultado fue una "islamización" de la violencia, que se vio reflejada en los ataques a la comunidad hindú cachemir a comienzos de los años noventa. India respondió con el despliegue de más de 300.000 soldados en Cachemira y la violación sistemática de los derechos humanos entre 1990 y 1996, lo que otorgó legitimidad al terrorismo. El clásico principio de acción-represión se instaló en el territorio.

De este modo, se ha originado una situación en la que Pakistán, Cachemira y la India sólo ven a "sus" víctimas. Mientras que Pakistán y los habitantes de Cachemira contemplan al ejército indio como una fuerza de ocupación²² y le acusan de limpieza étnica en la zona, la India señala la realidad de los campos de refugiados hindúes en Jammu y Nueva Delhi, así como la discriminación y opresión de la minoría hindú en Cachemira.

El crecimiento del nacionalismo hindú²³ y el mayor cariz islámico del terrorismo cachemir han subrayado la identidad religiosa de los contendientes en los últimos años. La llegada al poder de los nacionalistas del Bharatiya Janata Party (BJP) en 1998 es un síntoma del debilitamiento que ha experimentado el secularismo del sistema político indio en la última década. Por otra parte, el constante apoyo paquistaní en Cachemira, la violencia del ejército indio y la intervención en la zona de numerosos combatientes procedentes de Afganistán han propiciado una mayor presencia del factor religioso en el terrorismo cachemir, en detrimento del nacionalismo (resulta difícil definir qué porcentaje de los grupos armados lucha por la independencia y cuántos lo hacen en pro de la unión con Pakistán, ya que cerca de dos docenas de grupos afirman operar en la región).²⁴

La situación actual en la zona se ha convertido en un reflejo del modelo teórico de conflicto nacionalista desarrollado por Rogers Brubaker. Según el conflicto nacionalista es el resultado de la interacción de tres nacionalismos diferentes: un nacionalismo, en este caso el hindú, denominado "nacionalizador" o "nacionalizante", que considera a la nación hindú como legítima destinataria del estado, es decir, un estado "de" y "para" el nacionalismo hindú; un nacionalismo de "patrias

²¹ Sumit Ganguly, *Op.Cit.*; Ahmed Rashid, *Op. Cit.*

²² Jonah Blank, "Kashmir: Fundamentalism Takes Root", *Foreign Affairs*, noviembre/diciembre 1999, p. 43; Salman Rushdie, "Kashmir, the imperiled paradise", *The New York Times*, 3 de junio de 1999.

²³ El *Hindutva* o nacionalismo cultural hindú entiende que es el hinduismo el que constituye la identidad nacional india, por lo que la comunidad hindú debe poseer la primacía política (el 82% de la población india es hindú). Es un nacionalismo victimista que se alimenta del resentimiento de siglos de dominación musulmana y de un temor ancestral al Islam. Como consecuencia de la partición, el nacionalismo hindú considera que los musulmanes indios no son leales a India

²⁴ "Who are the Kashmir militants?", *BBC news*, 2 de enero de 2002 (http://news.bbc.co.uk/hi/english/in_depth/south_asia/2002/kashmir_flashpoint/).

exteriores" (practicado por Pakistán), que afirma que el estado debe apoyar a sus nacionales de otros países ante una amenaza; y, atrapado entre los dos, un nacionalismo de "minorías nacionales" (Cachemira) que no armoniza necesariamente con el nacionalismo de "patrias exteriores".²⁵

Cachemira tras el 11 de septiembre: un escenario nuevo

Una semana después del 11 de septiembre de 2001, uno de los mayores expertos en Cachemira, Alexander Evans, fue rotundo al afirmar que "[los atentados] tienen consecuencias inmediatas para Afganistán y Pakistán (...). Pero es la cuestión de Cachemira la que cambiará para siempre".²⁶ El posterior asalto al Parlamento indio el 13 de diciembre y la tensión desatada en la zona han acelerado este proceso.

La enorme presión internacional, especialmente estadounidense, en contra del terrorismo marca un antes y un después en Cachemira. La intervención de EEUU en Afganistán ha transmitido un mensaje: amparar al terrorismo ha dejado de ser una opción. Dicho de otro modo: la presión militar, económica y política a todo régimen que ampare el terrorismo es real (otra cuestión es qué es lo que EEUU decide considerar de modo unilateral como terrorismo).

Por otra parte, el fin del régimen talibán también ha afectado directamente a los grupos armados que operan en Cachemira, ya que muchos de sus integrantes se preparaban en Afganistán.²⁷ China, el principal aliado estratégico y militar de Pakistán, también ha hecho saber a Islamabad que rechaza cualquier estrategia que aumente la inestabilidad en el sur de Asia.²⁸

Pakistán ha efectuado un giro de ciento ochenta grados en su política frente al terrorismo en Cachemira. Muestra de ello es la ilegalización de *Jaishi-i-Muhammad* y *Lashkar-i-Tayyaba*, los dos grupos responsables del ataque al Parlamento indio según la India. Esta medida sin precedentes comporta un alto riesgo personal y político para el presidente paquistaní, Pervez Musharraf. Con objeto de dotarse de legitimidad y consolidar su poder ante las elecciones al Parlamento paquistaní del próximo mes de octubre, Musharraf convocó, el pasado 30 de abril, un referéndum sobre su continuidad en el cargo. A pesar de las graves irregularidades del proceso electoral, la victoria en este referéndum parece haber garantizado a este militar, nacido en Nueva Delhi, su permanencia en el poder en Pakistán durante los próximos cinco años.

²⁵ Rogers Brubaker, *Nationalism reframed*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

²⁶ Alexander Evans, "Attack on America: Lasting Impact on Kashmir", *Kashmir Observer*, Srinagar, 18 de septiembre de 2001 (<http://www.kashmirgroup.freeseerve.co.uk/>).

²⁷ Ahmed Rashid, "Pakistan's Coup: Planting the Seeds of Democracy?", *Current History*, diciembre de 1999.

²⁸ Rupert Wingfield-Hayes, "China tempers support from Pakistan", *BBC news*, 4 de enero de 2002.

¿Diálogo?

Del esfuerzo paquistaní por acabar con su apoyo al terrorismo en Cachemira y de la capacidad india para valorar este esfuerzo dependerá en buena medida la distensión en la zona y la posibilidad de que ambos países entablen un auténtico diálogo. Éste no será fácil, ya que la relación entre Pakistán e India está sembrada de negociaciones fallidas y la desconfianza es mutua. La larga duración del contencioso (con lo que esto supone de varias generaciones adoctrinadas en una única versión de los hechos) ha convertido el conflicto en una cuestión de honor nacional.

Las posturas ante un hipotético diálogo parecen inamovibles. La posición paquistaní en Cachemira (más sólida) se basa en el incumplimiento indio de la resolución 47/1948 del Consejo de Seguridad, que obliga a convocar un referéndum en la zona. India, por el contrario, considera que la solución pasa por el acuerdo de Simla de 1972, es decir, el diálogo únicamente entre India y Pakistán. Ambos países rechazan la opción de la independencia, ya que ninguno puede permitirse sentar un precedente al contar con otros casos potenciales. Algunos analistas consideran que una independencia de Cachemira podría desatar una ola de violencia hindú contra la minoría musulmana en la India.²⁹ Por otra parte, la creación de una Cachemira independiente —abrumadoramente musulmana— deslegitimaría aún más (tras Bangladesh) la propia razón de ser de Pakistán como país.³⁰

Como consecuencia de estos factores, parece que el papel del principal interesado en el fin del conflicto —el pueblo cachemir— se limita al de convidado de piedra. Es probable que la concesión de una mayor autonomía a la región, tal y como señala Martin Woolacott, sea la única vía que consiga satisfacer a los habitantes de Cachemira, a India y a Pakistán.³¹

El análisis del conflicto cachemir suscita una impresión final que Salman Rushdie ha sabido expresar de modo simple y claro: “Cachemira para los cachemir’ es un vieja frase, pero es la única que expresa cómo los sujetos de este conflicto se han sentido siempre; cómo, tal y como yo creo, la mayoría de ellos todavía dirían que se sienten, si fueran libres para decir lo que piensan sin miedo”.³²

²⁹ Ishtiaq Ahmed, *Op. Cit.*

³⁰ Tal y como citó Ishtiaq Ahmed, en una mesa redonda organizada por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo en 1993, el líder del autodenominado Frente de Liberación de Jammu y Cachemira argumentó la que parece la salida más justa al conflicto: el control de la totalidad de Cachemira por Naciones Unidas durante 5 a 10 años seguido de un referéndum en el que el pueblo de Cachemira decida libremente si quiere ser independiente o integrarse en India o en Pakistán. Ahmed Rashid, *Op. Cit.*

³¹ Martin Woolacott, “Autonomy for Kashmir is the answer”, *The Guardian*, 4 de enero de 2002.

³² Salman Rushdie, *Op.Cit.*

Observatorio de Conflictos

**Europa tiene un papel
que cumplir en Colombia** 83

**Informe: Violencia continúa
en Sri Lanka** 89

Europa tiene un papel que cumplir en Colombia

Colombia precisa un nuevo marco de negociación. El proceso de paz ha fracasado y el conflicto se agrava. Existe el peligro de que este país sea uno más en la lista de la guerra contra el terrorismo global. La política de la Unión Europea frente al conflicto colombiano debe estar comprometida con el proceso de paz. España, desde la Presidencia de la Unión Europea, debe impulsar un nuevo esquema de negociación en Colombia por su doble condición de país con fuertes vínculos con América Latina y por ser parte de los “países amigos” del proceso de paz en Colombia. Es preciso diseñar una estrategia coordinada entre los países de la Unión Europea y los demás “países amigos” del proceso de paz, para realizar una acción decidida y rápida que restablezca la mesa de diálogo y negociación entre el Gobierno y la guerrilla en Colombia.

Declaración del Centro de Investigación para la Paz (CIP/Fundación Hogar del Empleado) sobre el conflicto en Colombia

Esta estrategia debe tener en cuenta ciertas particularidades del desarrollo del conflicto armado colombiano en los últimos meses y algunas consecuencias a escala nacional e internacional:

1. El conflicto armado colombiano es interpretado, cada día más, como parte de la lucha contra el terrorismo liderada por EEUU.
2. A escala nacional, ni el Gobierno ni las Fuerzas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo– (FARC-EP) parecen estar dispuestos a reiniciar los diálogos a corto plazo. El Gobierno sustenta su posición en el discurso antiterrorista y de lucha contra las drogas y califica a esta guerrilla de narco-guerrilla y terrorista.¹ Las FARC, por su parte, se mantienen en la tesis de que el Gobierno, como representante de la oligarquía de Colombia, se retiró de las negociaciones para no permitir cambios estructurales en lo económico, político, social y militar.²

¹ Alocución Presidencial, 20 de febrero de 2002.

² Comunicado de las FARC- EP, 21 de febrero de 2002.

La Unión Europea debe ofrecer sus oficios de mediador activo e impulsar la participación de la sociedad civil en las negociaciones

3. En el campo político, el candidato con más posibilidades para ganar las elecciones presidenciales, Álvaro Uribe Vélez, representa a aquellos sectores que consideran la vía militar como la mejor salida al conflicto y que rechazan las negociaciones.³
4. La sociedad civil colombiana, principal víctima de los diferentes actores armados del conflicto y sus patrocinadores, está dividida, cansada de una negociación sin resultados y es mayoritariamente pesimista con respecto a la posibilidad de un nuevo proceso de paz.

Se precisa una estrategia inmediata para aprovechar el plazo que le queda al actual Gobierno colombiano y a España en la Presidencia de la Unión Europea, coordinada con una estrategia de largo plazo que permita sentar las bases para el desarrollo de un proceso de paz viable y sostenible.

A corto plazo, la Unión Europea debe:

1. Impulsar espacios de diálogo sobre el respeto a la población civil y la lucha contra los grupos paramilitares:

Durante los tres años de negociación, el respeto a la población civil y la lucha contra los grupos paramilitares fueron los principales motivos de enfrentamientos y desacuerdos entre el Gobierno y las FARC-EP. El Ejecutivo circunscribió la negociación a llegar a un acuerdo de respeto a la población civil a través de un cese del fuego y de las hostilidades, lo que fue totalmente desdeñado por las FARC, quienes incrementaron las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los derechos humanos. A su vez, las FARC se centraron en la necesidad de que el Gobierno mostrara resultados en la lucha contra los grupos paramilitares. El Ejecutivo, a pesar de haber presentado algunos resultados positivos en la lucha contra los paramilitares, no fue capaz de detener su crecimiento ni las masacres, amenazas y asesinatos colectivos perpetrados por estos grupos.⁴

La Unión Europea debe abrir espacios informales de diálogo para acercar nuevamente a las partes (Gobierno y FARC-EP), la sociedad civil, las cúpulas militares y los candidatos a la presidencia de Colombia, en torno a una discusión que conjugue el respeto a la población civil y la lucha contra los grupos paramilitares. En dichos espacios, la Unión Europea debe ofrecer sus oficios de mediador activo, con el fin de restablecer las relaciones de cooperación perdidas con la

³ Según la última encuesta publicada en marzo, el candidato independiente liberal Álvaro Uribe repunta con un 59,5 % de preferencia frente al liberal Horacio Serpa con un 24%.

⁴ Según el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, presentado en marzo de 2001, "los resultados presentados por el gobierno contrastan con la acelerada expansión y presencia de grupos paramilitares en, por lo menos, 409 municipios (un 40% del país). El Ministerio de Defensa colombiano reconoce que actualmente operan más de 8.000 paramilitares, lo cual significa un crecimiento del 81% en los últimos dos años".

ruptura del proceso e impulsar la participación de la sociedad civil en las negociaciones.

A corto plazo, el objetivo de estas conversaciones es lograr un acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP, en el que cada una de las partes se comprometa, de acuerdo con un calendario definido, a mostrar resultados precisos y verificables por la comunidad internacional en torno al respeto al DIH por parte de la guerrilla, y dé resultados tangibles en la lucha contra los paramilitares por parte del Gobierno que conduzca a un alto el fuego. A medio plazo, es necesario que se incorpore a la sociedad civil como actor válido en las mesas de negociación.

2. Fortalecer las relaciones entre la sociedad civil y la comunidad internacional

La pérdida de confianza entre los actores políticos, la estigmatización del contrario, la falta de resultados concretos durante el proceso de paz y la convicción de las partes de que la guerra es el único camino hacia la paz, provoca que los espacios ofrecidos por la comunidad internacional para discutir los temas anteriormente descritos sean probablemente desestimados y descartados en el interior de Colombia.

Con el fin de presionar a las partes para que participen en los espacios propuestos, es necesario formar una coalición de todos aquellos que consideran que la paz en Colombia sólo es alcanzable mediante una negociación política. Ni el Gobierno ni la guerrilla consideran estar en una situación de empate forzado que los obligue a reiniciar un proceso de paz, ya que no son ellos los que están muriendo en el conflicto colombiano. Por el contrario, son precisamente los ciudadanos afectados directamente por el conflicto, quienes deben participar activamente y presionar a las partes a que inicien un proceso de paz que permita la supervivencia de los no combatientes.

La Unión Europea debe recuperar las iniciativas que desde la sociedad civil se han manifestado en contra de la guerra, fortalecerlas y apoyarlas para que sean escuchadas y tenidas en cuenta para la toma de decisiones con respecto al conflicto armado. Estas iniciativas las llevan a cabo grupos de mujeres, asociaciones de derechos humanos, de desplazados, de jóvenes y de campesinos, entre otros. La Unión Europea debe hacer un esfuerzo importante para convocar a los movimientos sociales que están a favor de una solución política del conflicto armado, respaldar, incluso económicamente, sus iniciativas y apoyar la difusión de sus peticiones y propuestas en el ámbito colombiano e internacional. Fortaleciendo estos movimientos y abriendo la posibilidad de que la sociedad civil participe activamente en la mesa de negociaciones, se podría generar un proceso de paz sostenible en Colombia.

3. Fundamentar la lucha contra el terrorismo en el respeto a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y las libertades civiles

Para Colombia, una de las consecuencias de la lucha contra el terrorismo es el inminente incremento de la ayuda militar a este país. De la misma manera que el Plan Colombia no mostró los resultados esperados en lo referente a la lucha

contra las drogas, es previsible que un mayor apoyo a las Fuerzas Militares, como se plantea desde el Gobierno de EEUU, no derive en una mayor protección a la población civil. Más aún, frente a las constantes violaciones de los derechos humanos por parte del Ejército colombiano denunciadas por varias organizaciones nacionales e internacionales, la opción de dar más asistencia militar a las Fuerzas Armadas para luchar contra las guerrillas no parece una opción acertada ni coherente con una política eficaz de protección a la población civil.

Europa debe apoyar aquellas medidas contra la violencia y el terrorismo que se encuentren dentro de los marcos legales y democráticos. Por tanto, tiene que distanciarse de “guerras contra el terrorismo” que no se basen en dichos principios. Para el caso colombiano, la Unión Europea deberá apoyar iniciativas que pretendan el restablecimiento de un Estado de derecho en todo el territorio del país, fortaleciendo instituciones nacionales con apoyo internacional que restaurezcan la justicia, luchen contra la impunidad y propicien seguridad y desarrollo. Así mismo, desde su posición de aliada de EEUU, Europa cumpliría un papel relevante si dialoga críticamente con Washington para que revise su política hacia Colombia.

A largo plazo:

A largo plazo, es necesaria la concreción, por parte de la Unión Europea, de políticas coherentes en lo referente a tres temas de crucial importancia para Colombia: los cultivos ilícitos, el tráfico de armas y la pobreza.

1. Cultivos ilícitos:

Todas las partes involucradas en el conflicto colombiano financian la guerra a partir de los cultivos ilícitos. Las FARC-EP y los paramilitares utilizan las ganancias del narcotráfico o de los cultivos para comprar armas para la guerra. Por su parte, las acciones del Gobierno son financiadas, en su gran mayoría, con la ayuda estadounidense contemplada en el Plan Colombia. De esta manera, la guerra en Colombia está financiada, casi en su totalidad, por dinero proveniente del consumo de drogas ilícitas en los países desarrollados o por la lucha contra la producción, patrocinada principalmente por EEUU.

Además de exacerbar los niveles de conflicto, deteriorar las condiciones de vida de los pequeños productores y perjudicar el medio ambiente, la política de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia ha mostrado ser altamente ineficaz, sin resultados tangibles en cuanto a reducción en su producción y su tráfico. Frente a esto, la Unión Europea debe liderar una política basada en procesos graduales de desarrollo integral y concertado con las comunidades, estableciendo mecanismos de financiación transparentes que permitan la ejecución de programas de desarrollo y garanticen el acceso al mercado de productos alternativos que puedan ser comercializados en los países desarrollados.

La Unión Europea, que ya se ha mostrado en desacuerdo con el componente militar del Plan Colombia, debe insistir ante el Gobierno colombiano en la necesidad de suspender las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos con herbicidas

químicos, ya que se ha demostrado que son altamente ineficaces a la hora de disminuir la producción global de estos cultivos y que tienen como resultado directo el desplazamiento de cultivos y poblaciones hacia áreas aún más frágiles, incrementando la deforestación e intensificando el conflicto armado.

2. Tráfico de armas:

Además del problema de la financiación de la guerra mediante los cultivos ilícitos, el conflicto en Colombia se sustenta en un comercio incontrolado e ilegal de armas ligeras y de pequeño calibre. Los países de la Unión Europea deberán entonces reforzar sus políticas en materia de controles de exportación de armamento, corretaje, marcaje y seguimiento de armas, con el fin de detener o, al menos, reducir el tráfico ilícito de arsenales que se usan para la guerra en países como Colombia.

3. Pobreza:

Teniendo en cuenta que las principales causas de la guerra en Colombia son la pobreza, la concentración de la riqueza, los altos índices de desempleo, la marginación social y la crisis en el sector agrícola, es necesario que la Unión Europea dé prioridad a mecanismos de cooperación dirigidos especialmente a afrontar dichos problemas, con el fin de ofrecer oportunidades a quienes consideran que la guerra es la única opción de sostenimiento económico. Igualmente, es necesario que la Unión Europea cree mecanismos de financiación dirigidos especialmente a las poblaciones desplazadas por el conflicto armado.

CAROLINA MARIA RUDAS GÓMEZ

Informe: Violencia continúa en Sri Lanka

Desde su independencia en 1948, Sri Lanka vive un conflicto en el que la identidad étnica —cingalesa o tamil— marca la pertenencia a uno u otro bando. A pesar de varios intentos de negociación con los grupos más radicales como los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE), y de la participación activa de India y de varios países, la antigua colonia inglesa ha tenido que afrontar dos fases críticas del conflicto armado durante los años ochenta y noventa, en las que murieron aproximadamente 60.000 personas. Actualmente, tras el anuncio de los LTTE de cesar el fuego durante un mes a partir del 24 de diciembre de 2001, se vislumbra una posibilidad concreta de alcanzar la paz. Con este informe sobre el conflicto de Sri Lanka se inaugura la sección Observatorio de Conflictos.

El conflicto de Sri Lanka se origina durante la colonización inglesa, en la que la minoría tamil gozó de una serie de privilegios respecto a la mayoría cingalesa, lo que fomentó el resentimiento entre ambas etnias. Después de la independencia en 1948, la comunidad cingalesa obtuvo el poder. A partir de ese momento, el Partido de Unidad Nacional (UNP) y el Partido de Liberación de Sri Lanka (SLFP), ambos representantes cingaleses, adoptaron medidas legislativas discriminatorias contra el pueblo tamil. Éstas se concentraron en tres áreas específicas: el reconocimiento de la lengua tamil, el acceso a la educación universitaria y la colonización cingalesa en las áreas tradicionales tamilyes. Dichas medidas generaron la creación de varios grupos tamilyes que aún reivindican el reconocimiento de su lengua y de la autonomía del pueblo tamil.

En 1958 se proclama la Constitución que instituye el cingalés como única lengua oficial, relegando el lenguaje tamil de la administración pública y de la educación, lo que generó un amplio descontento entre la minoría tamil y una serie de campañas de resistencia civil lideradas por el Partido Federal de origen tamil. En 1974, la estandarización de las calificaciones para la educación y el establecimiento de cuotas de

Carolina María Rudas Gómez es Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de los Andes de Bogotá y Master en Resolución de Conflictos por la Universidad de Bradford (Inglaterra)

ingreso a la Universidad para cada distrito, afectaron directamente a los tamiles en las provincias del norte y del este, generando la formación de grupos de resistencia. El Estado fomentó la colonización cingalesa de las provincias del norte y del este, aumentando el resentimiento entre las dos comunidades. El Partido Federal, junto con otros partidos tamiles del norte, conforman el Frente Unido de Liberación Tamil (TULF) que intentó sin éxito, mediante la acción parlamentaria, derogar las normas presentadas, aumentando los niveles de descontento entre la población tamil.

Escalamiento del conflicto

A partir de 1977, las reivindicaciones políticas tamiles se transformaron en acciones violentas realizadas por varios grupos de jóvenes militantes que propugnan por el separatismo de las provincias del norte y del este. Entre estos, adquirieron importancia los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE), que desarrollaron acciones armadas contra la policía y el Ejército. Estos enfrentamientos tuvieron respuesta en el sur de la isla con acciones violentas contra la población tamil. En 1978 la violencia obligó al Gobierno a realizar algunas concesiones parciales, como la creación de gobiernos provinciales que permitirían a los tamiles gobernar las provincias del norte y del este. Los grupos radicales tamiles no aceptaron dichas medidas.

El Ejecutivo aprobó una legislación especial antiterrorista que dio paso a la proliferación de arrestos masivos y a la desaparición de jóvenes tamiles. En estas condiciones se celebraron elecciones provinciales en 1981, en las que militantes tamiles asesinaron a un candidato de UNP y a dos policías. En represalia, la policía mató a varias personas y destruyó diversos edificios en la ciudad de Jaffna, incluyendo la biblioteca pública, bastión de la historia y la cultura tamil. Los militantes tamiles respondieron con varios atentados contra la población en general.

Primera Guerra del Eelam

En 1983 se inició la primera Guerra del Eelam, después del boicot propiciado por los LTTE a las elecciones locales y del asesinato de tres candidatos del UNP. La violencia anti-tamil aumentó considerablemente tras el asesinato de 13 soldados en Jaffna por los LTTE. En la capital, Colombo, con el apoyo indirecto y directo de las fuerzas de seguridad, se destruyeron miles de casas tamiles, cientos de tamiles fueron masacrados y 200.000 desplazados.

El Gobierno indio intervino dando armas y entrenamiento a los rebeldes tamiles. Posteriormente, al no estar totalmente de acuerdo con las peticiones secesionistas de los LTTE, en 1984 se ofreció como mediador y se celebró una conferencia con todos los partidos de Sri Lanka para discutir las reivindicaciones tamiles, a la que no se invitó a los rebeldes armados y, por lo tanto, fracasó. A partir de 1985 se recrudeció la violencia con masacres de civiles cingaleses por parte del LTTE y de pobladores musulmanes del este, acusados de cooperar con las fuerzas de seguridad. Al mismo

¹ Eelam es el nombre con el que el pueblo tamil llama a su nación.

tiempo, se abrió un nuevo espacio de negociación entre el Gobierno, el TULF y los principales grupos militantes que fracasó nuevamente. La situación se vio agravada por la presencia de las fuerzas militares indias (IPKF).

En 1987, el Ejército de Sri Lanka lanzó una campaña militar masiva en el norte, que incluyó el bloqueo de comida, medicina y combustible. Dicha campaña fue boicoteada por el reparto de comida y medicinas por parte del Gobierno indio. Después de una intensa actividad diplomática, se firmó el Acuerdo Indo-Lankan entre los dos Gobiernos. En dicho acuerdo se hicieron propuestas detalladas para permitir a los tamiles formar parte del gobierno de los consejos provinciales y se propuso la retirada de las fuerzas de paz, con lo que se abrió un paso al alto el fuego. Bajo la presión del Ejecutivo indio, la mayoría de los militantes tamiles accedieron a cumplir el acuerdo, pero los LTTE renunciaron rápidamente y atacaron a las fuerzas de paz. Mientras tanto, surgía una nueva insurgencia armada cingalesa en el sur. Las fuerzas de paz de la india comenzaron a atacar civiles tamiles.

La situación pareció cambiar en 1988, cuando se celebraron elecciones provinciales con la participación de los partidos tamiles moderados. En diciembre de ese año se aprobó la nueva Constitución que incluye el tamil como lengua oficial. A las elecciones generales de 1989, se presentó una alianza entre los partidos tamiles moderados. Después del atentado mortal perpetrado por el LTTE contra el primer ministro indio, Rajiv Gandhi, las tropas indias se retiraron de suelo esrilanqués. Por unos meses se percibió un acercamiento entre el LTTE y el Gobierno de Sri Lanka pero este se rompió a mediados de 1990.

Segunda Guerra del Eelam

Ante el fracaso de las negociaciones, el Gobierno adoptó fuertes medidas en contra de los tamiles. A lo largo de los años 90, la policía y el Ejército detuvieron a miembros de diferentes grupos de liberación nacional. Además, se creó una fuerza de defensa civil que atacó objetivos civiles tamiles y se bombardeó Jaffna. Por su parte, los LTTE continuaron con el asesinato de políticos, ministros y civiles musulmanes.

En las elecciones de 1994 ganó el partido de Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, Alianza Popular (AP), lo que abrió nuevas perspectivas para un acercamiento entre las partes en litigio. En las primeras rondas de conversaciones el Gobierno propuso un alto el fuego y un programa de rehabilitación social en las zonas más afectadas. Sin embargo, los LTTE exigieron unas condiciones sólo parcialmente aceptadas por el Ejecutivo, lo que provocó el fin de las conversaciones y el inicio de nuevas acciones violentas por parte del grupo armado.

El Gobierno optó por una nueva ofensiva militar recuperando la provincia de Jaffna, lo cual provocó una contraofensiva de los LTTE que dejó cientos de muertos y desplazados. Algunos de los momentos más críticos en este periodo fueron la destrucción de la base militar de Mullaitivu por parte de los LTTE, el 20 de julio de 1996, en la que murieron 1200 personas; la respuesta gubernamental, un mes después, con 250 muertos en un día; el avance guerrillero, en enero de 1997, que causó mil muertos en una semana; o el atentado suicida de febrero de 1996 contra la sede del banco central de Sri Lanka, donde perecieron cien personas. Al mismo

*Ante el
fracaso de las
negociaciones,
el Gobierno
adoptó fuertes
medidas en
contra de los
tamiles*

tiempo, el Gobierno presentó un proyecto de reforma constitucional en el que se incluyen algunas de las demandas tamiles, siempre dentro de la unidad nacional. En 1996 el borrador fue discutido en una comisión del Parlamento, pero no se llegó a un consenso. En 1999 Bandaranaike Kumaratunga ganó nuevamente las elecciones por un periodo de cinco años y continuó la batalla entre el Gobierno y los LTTE por conquistar y reconquistar territorios. Durante 2000 y principios de 2001, ambas partes declararon unilateralmente el alto el fuego en diversas ocasiones, sin ser aceptado por el contrario.

Acercamiento de las partes

El 27 de noviembre de 2001, en parte como consecuencia de los atentados terroristas del 11 de septiembre, el líder de los LTTE, Velupillai Prabhakaran, mostró una nueva voluntad de paz, y explicó que la reivindicación tamil, de vivir en sus tierras tradicionales con paz y dignidad y determinando su vida política y económica, no debe considerarse como una posición separatista o terrorista. Esta declaración supone una esperanza para la paz ya que la actitud separatista que hasta el momento habían mantenido los LTTE anulaba cualquier posibilidad de diálogo con el Gobierno. Adicionalmente, el 24 de diciembre los LTTE anunciaron la posibilidad de detener las hostilidades durante un mes.

En febrero de 2002 Prabhakaran y el primer ministro, Ranil Wickremasinghe, firmaron el Memorando de Entendimiento sobre el Permanente Cese de Hostilidades, con una clara participación de Noruega y otros países escandinavos como veedores del acuerdo con el fin de sentar las bases para una paz duradera. El acuerdo sobre el alto el fuego impide a ambas partes lanzar ofensivas militares, atacar a la población civil y allana el camino para que los LTTE puedan desarrollar funciones políticas en el norte y este del país, ocupadas por el Ejército y controladas por el Gobierno. Actualmente comienza a desplegarse la Misión de Observadores para Sri Lanka, y en un plazo de tres a seis meses está previsto mantener negociaciones directas.

En el Ejecutivo se produce una situación peculiar ya que el primer ministro Wickremasinghe y la presidente, Chandrika Bandaranaike Kumaratunga (AP) pertenecen a dos partidos rivales, lo que conlleva una necesidad de mutuo entendimiento y un equilibrio inestable que podría poner fin al proceso de paz. Por otra parte, el líder de los LTTE continúa insistiendo en la necesidad de que el Gobierno levante la proscripción sobre la organización, como un prerequisite para participar en las conversaciones de paz. Wickremasinghe ha anunciado categóricamente que por el momento no considerará el levantamiento de la proscripción.

Actores del conflicto

Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE)

Provenientes del Movimiento de Estudiantes Tamiles que protestó por las reformas a la educación durante los años setenta, los LTTE, dirigidos por Velupillai

Pirabhakaran, se fundaron el 5 de mayo de 1976, después de la creación de una Constitución que reforzaba medidas discriminatorias contra el pueblo tamil. Su principal objetivo durante los 25 años de lucha ha sido formar un Estado independiente de origen tamil en las provincias del este y del norte de Sri Lanka. Su proyecto político se basa en la necesidad de asegurar el derecho de autodeterminación del pueblo tamil y la independencia política. Los LTTE consideran que los tameses, al tener un territorio ancestral, un lenguaje diferente, una cultura específica y una historia de 3000 años de antigüedad, deben ser considerados como pueblo o nación, y por lo tanto tienen derecho a la autodeterminación y a escoger su estatus político.

Los LTTE se sostienen por las actividades políticas y financieras de la diáspora tamil internacional —principalmente asentada en Inglaterra, Canadá, EEUU— y por su propia infraestructura comercial y propagandística. Poseen armamento convencional de tierra y aire así como una unidad de hombres bomba suicidas que dirigen sus ataques contra blancos políticos, económicos y culturales. Participaron en las conversaciones de paz en 1985, 1989-1990 y 1994-1995, pero se retiraron en todas ellas. Han cometido innumerables violaciones a los derechos humanos durante la guerra, incluidas las masacres de civiles cingaleses y musulmanes, y han forzado el desplazamiento de musulmanes asentados en las provincias del norte. Esta organización está calificada como terrorista, además de en Sri Lanka, en Malasia, India y EEUU. Algunas agencias de inteligencia de Sri Lanka y extranjeras estiman que son aproximadamente entre 14.000 y 18.000 hombres armados.

Fuerzas de Seguridad de Sri Lanka

El Ejército ha sido siempre la principal fuerza de seguridad de Sri Lanka. Se le ha responsabilizado en repetidas ocasiones de asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras violaciones a los derechos humanos. La policía, compuesta por 60.000 personas, es responsable de la seguridad interna en la mayoría del país, y ha sido utilizada en operaciones militares en contra de los LTTE. El Ejército, compuesto por 17.000 miembros, y la marina, integrada por 18.500 personas, conducen la mayoría de las operaciones contra los LTTE. Las guardias civiles compuestas por más de 20.000 miembros, respaldados por la policía, proveen seguridad a las comunidades musulmanas y cingalesas cerca o dentro de la zona de guerra. El Gobierno también apoya a varias milicias de oposición a los LTTE.

Frente Unido de Liberación Tamil (TULF)

El TULF nació en 1976, resultado de la unión de varios grupos de la elite tamil, entre los que se encuentra el Partido Federal. Defendiendo una visión separatista, el TULF obtuvo un buen porcentaje en la elección de 1977 y se instaló como la oposición oficial. En los siguientes años, no pudo controlar las milicias armadas ni obligar al Gobierno a comprometerse con la política de *devolution* (dovolver el

control político y las tierras a las minorías tamiles), perdiendo así apoyo popular. En 1983 se prohibió la defensa del separatismo y el TULF perdió su participación política. Durante la década de 1980, el partido participó en las iniciativas dirigidas por el Gobierno indio. En 1988 regresó al Parlamento y en 1994 presentó un manifiesto que promulgaba la federalización del país absteniéndose de defender el separatismo.

Alianza Popular (AP) y el Partido de Liberación de Sri Lanka (SLFP)

La AP, que inició su carrera política en las elecciones de 1994, incluye a varios partidos minoritarios de izquierda. Su principal constituyente es el Partido de Liberación de Sri Lanka (SLFP), que gobernó entre 1956-1965 y 1970-1977, implementando varias medidas para fortalecer los intereses cingaleses. La AP es liderada por Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, hija de S.W.R.D. Bandaranaike y Srimavo Bandaranaike (expresidentes del SLFP), y viuda del líder socialista Vijaya Kumaratunge, asesinado en 1988. Bajo una plataforma de paz y reconstrucción, ganó una mayoría parlamentaria parcial en 1994 y abrió la posibilidad de rondas de conversaciones preliminares con el LTTE. Posteriormente Kumaratunga venció en las elecciones presidenciales con una mayoría casi absoluta, ganándose el apoyo de varias comunidades étnicas. Al romperse las conversaciones, el Gobierno de la AP dirigió la avanzada militar contra las áreas dominadas por el LTTE y desarrolló un paquete de reformas a la Constitución que incluían provisiones de autonomía en las provincias para el pueblo tamil.

Partido de Unidad Nacional (UNP)

El partido de Unidad Nacional, de centro-derecha, presidió el Gobierno de Sri Lanka treinta años desde la independencia. Fundado durante la colonia, hizo significativas concesiones al nacionalismo cingalés entre los años cincuenta y sesenta. Desde 1977, durante la presidencia de J. R. Jayewardene, buscó transformar el Estado socialista corporativo de Sri Lanka en una economía de mercado libre. En la década de 1980 propició la violencia de Estado. Desde 1988, bajo el Gobierno del presidente Ranasinghe Premadasa, se inició un entendimiento con los LTTE lo que generó la retirada de la Fuerza de Paz India. En 1990, Premadasa lanzó un asalto militar violento en el norte y el este. Éste fue asesinado por los LTTE en 1993. Actualmente, el partido es dirigido por Ranil Wickremesinghe, quien propició el inicio del actual proceso de paz.

ONG nacionales

Las ONG de Sri Lanka, a pesar de haber sido duramente afectadas por el conflicto, continúan trabajando por la paz. En 1998 se celebró una conferencia por parte del Consejo Nacional de Paz, en el que se reúnen 1500 personas de todas las

etnias para exigirle al Gobierno y a los grupos armados buscar un acuerdo de paz honorable para toda la población de Sri Lanka.

Actores internacionales

Gobiernos europeos

Los Gobiernos escandinavos han sido persistentes en promover las iniciativas de paz, aunque su contacto con los LTTE y los grupos nacionalistas tameses ha propiciado acusaciones, principalmente a Noruega, de respaldar a esta etnia. En los últimos años, el Ejecutivo de Sri Lanka ha contactado con diferentes Gobiernos europeos, principalmente con Gran Bretaña, para que se califique de terrorista a los LTTE. Noruega lideró la firma del Memorando para el Cese de Fuego Permanente y los países escandinavos se han ofrecido como garantes del actual proceso de paz.

India

El Gobierno de la India ha defendido los derechos políticos y civiles de los tameses de Ceilán, e intentado asegurar la devolución sin llegar a apoyar el separatismo. Los métodos para conseguir estos objetivos han variado considerablemente. Desde 1983 la India entrenó y armó varios grupos de tameses militantes, e impulsó tanto a estos como al Ejecutivo de Sri Lanka a negociar, al tiempo que envió una Fuerza de Paz (IPKF) para asegurar el alto al fuego en el norte y este de la isla. En 1989 las Fuerzas de Paz entraron en guerra con los LTTE, hasta que fueron retiradas en 1990. Después del asesinato del ex-primer ministro de la India, Rajiv Gandhi, por los LTTE, la intervención del Gobierno hindú en el conflicto ha disminuido. Desde 1994, ha apoyado el paquete de reformas liderado por el Gobierno de la AP.

ONG internacionales

Diversas ONG internacionales operan en Sri Lanka promoviendo el desarrollo y llevando a cabo tareas humanitarias. Numerosas ONG de resolución de conflictos han trabajado a nivel político y social.

Diáspora de Sri Lanka

Los expatriados tameses anteriores a la guerra son altamente educados, financieramente seguros y se concentran en los países de habla inglesa. Después de 1983 los tameses emigrantes, menos educados y más pobres que sus antecesores, se ubicaron en los países europeos, América del Norte y Australia. Los más pobres,

aproximadamente 200.000, permanecen en campos de refugiados en la India. Aproximadamente 700.000 tamiles son refugiados. Los tamiles expatriados proveen una amplia proporción de las finanzas y propaganda que apoya a los LTTE.

Estados Unidos

A partir de 1977, el interés de EEUU en Sri Lanka creció debido a la apertura de la economía de la isla y al enfriamiento entre el Gobierno Indio y el de Sri Lanka. Desde el final de la guerra fría y el acercamiento entre la India y EEUU, las relaciones políticas y comerciales entre Sri Lanka y EEUU han aumentado. EEUU ha entrenado al Ejército de Sri Lanka y ha tenido un papel preponderante en denunciar las actividades terroristas de los LTTE. El actual proceso de paz ha recibido apoyo de EEUU, aunque continua manteniendo que los LTTE permanecerán en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado.

Otros Estados

Algunos países de la comunidad internacional han impuesto restricciones a los LTTE después del 11 de septiembre. Australia y Canadá los incluyeron en sus listas de grupos terroristas. En este último país existe una gran comunidad de tamiles expatriados que se consideran una de las principales fuentes de financiación de los LTTE. En febrero, el Gobierno británico proscribió al grupo armado.

Consecuencias del conflicto

Violaciones de los derechos humanos

Según los informes de varias ONG internacionales, en los últimos dos años se han recogido recurrentes violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y de los LTTE.

Al Gobierno se le acusa de desapariciones forzadas, torturas y muertes en custodia, retener detenidos tamiles sin un juicio previo, violaciones de derechos humanos por parte de grupos paramilitares y violencia sexual contra mujeres tamiles por parte de las fuerzas armadas. A pesar de que en los últimos años el Gobierno ha tenido una respuesta más positiva para investigar dichas denuncias, la impunidad aún es la norma. En el 2000 el Ejecutivo nombró un nuevo jefe y cinco nuevos comisionados para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (HRC), al igual que estimuló las acciones del comité para investigar los casos de arresto improcedente y tortura. A finales de 2000, el Gobierno estableció un Comité interministerial y un grupo de trabajo sobre las denuncias contra violaciones de derechos humanos realizadas por las instituciones de la ONU y por organizaciones internacionales de derechos humanos. Desafortunadamente, la creación de nuevos órganos no ha agilizado las investigaciones. En casos como la tortura, desde

que el Gobierno ratificó la Convención de la ONU en contra de la tortura en 1994, nadie ha sido acusado de tal crimen

Por su parte, los LTTE han cometido asesinatos de prisioneros de guerra, desapariciones, torturas, arresto arbitrario y extorsión. Así mismo, han impedido las actividades políticas y gubernamentales en el norte y en el este. Unicef los condenó públicamente por la utilización de niños soldados.

Ataques contra las minorías étnicas, raciales y nacionales

El Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas ha observado con preocupación la incierta situación de 85.000 tamiles de origen indio que viven en Sri Lanka. Estas personas no poseen ni la ciudadanía de la India ni la de Sri Lanka, no tienen ningún acceso a servicios básicos como la educación, ni disfrutan de sus derechos económicos, sociales y culturales

Desplazamiento

El Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas ha manifestado su preocupación por la situación de aproximadamente 800.000 desplazados, muchos de los cuales han tenido que vivir en albergues provisionales durante los últimos quince años debido al conflicto armado. Carecen de servicios de saneamiento, enseñanza, alimentación, vestuario y atención de salud. El Comité ha expresado su alarma por los resultados de una encuesta independiente según la cual la incidencia de la malnutrición de las mujeres y los niños que viven en esos albergues es del 70%, así como por las informaciones de que en muchos casos la ayuda alimentaria no llega a los destinatarios previstos.

INFORMACIÓN EN INTERNET

DATOS GENERALES

CIA World Factbook - www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ce.html

ONG

University Teachers for Human Rights (Jaffna) - <http://www.uthr.org/>

Informes y artículos

- Informes de Amnistía Internacional -
www.web.amnesty.org/web/ar2001.nsf/webasacountrie
- Human Rights Watch - <http://hrw.org/wr2k2/asia10.html>
- US Department of States. Country Reports on Human Rights Practices -
www.state.gov/drl/rls/irf/2001/5668.htm
- Organización mundial contra la tortura - <http://www.omct.org>
- Artículos de conflicto étnico y derechos humanos. Info Lanka -
<http://www.infolanka.com/org/srilanka/issues.html>
- Articles on Ethnic Conflict & Human Rights Issues
Report by Jesuit Refugee Service - <http://www.jesref.org/inf/lka-spcl/>
- South Asian Terrorism Portal (documentos, análisis, información actualizada, seguimiento diario del conflicto):
www.satp.org/satporgtp/countries/shrilanka/index.html
- ACCORD Sacrifice, War and Negotiation in Sri Lanka. Agosto 1998.

Naciones Unidas

- For the Record: UN Human Rights Activities -
<http://www.hri.ca/fortherecord2001/vol3/srilanka.htm>
- Report of the UN special Rapporteur's in Sri Lanka 1998 -
http://www.sangam.org/FB_REPORTS/Index98Rapp.htm
- Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales : Sri Lanka. 16 de junio de 1998

Medios de comunicación

- *The academic* - <http://www.theacademic.org/>
- *Digest of News Links on Sri Lanka* -
<http://www.lacnet.org/slnews/index.html>
- *Spotlight on Sri Lanka* - <http://www.is.lk/is/spot/index.html>
- *Sunday Times* - <http://www.lacnet.org/suntimes/>
- *Tamil Guardian* - <http://www.tamilguardian.com/>

Gobierno

- Ministry of Foreign Affairs - <http://www.lanka.net/fm/>
- Ministerios - <http://www.lk/national/ministry.html>

Otros enlaces sobre el conflicto

- INCORE - <http://www.incore.ulst.ac.uk/cds/countries/srilanka.html>
- Infolanka - <http://www.infolanka.com/>
- Sri Lanka Web Window - <http://www.lk/>

Páginas pro-tamiles

- Australasian Federation of Tamil Associations - <http://www.ozemail.com.au/~eelam>
- Eelam Web - <http://www.eelamweb.com/>
- Human Rights Violations against Tamils in Sri Lanka - <http://www.tamilcanadian.com/eelam/hrights/>
- Hotspring.org - <http://www.hotspring.org/>
- Ilankai Tamil Sangam, USA - <http://www.sangam.org/>
- Tamil Eelam Homepage - <http://www.eelam.com/>
- Tamil Net - <http://www.tamilnet.com/>

Páginas anti tamiles

- Eliminate LTTE terror - <http://ourworld.compuserve.com/homepages/umberto/>
- Save our Sri Lanka from terrorism - <http://www.angelfire.com/ct/lanka/index.html>
- Kalaya - <http://infolanka.com/org/kalaya/>
- Friends of Sri Lanka in the US - <http://members.tripod.com/~FOSUS/>
- Sinhaya - <http://www.sinhaya.com/>
- Society for Peace, Unity and Human Rights in Sri Lanka - <http://www.spur.asn.au/>
- The Society for Unity, Peace and Rehabilitation of Sri Lanka in South Australia - <http://members.ozemail.com.au/~slpage/>
- Sri Lanka - <http://easyweb.easynet.co.uk/~sydney/>
- Voice of Lanka - <http://www.voiceoflanka.net/>

DATOS BÁSICOS

Situación geográfica: isla del Océano Índico, situada al sureste de la India, separada de ésta por el canal de Palk. Una zona montañosa en la zona central divide la isla en dos sectores definidos.

Población: 19.408.635 de habitantes aproximadamente

Tasa de mortalidad infantil: 1,6% estimado (2001)

Esperanza de vida al nacer: 72,09 años

Grupos étnicos: cingaleses 74%, tamiles 18%, otros 8%

Religiones: budista 70%, hindú 15%, cristianos 8%, musulmanes 7% (1999)

Lenguas: singalés (lenguaje oficial y nacional) 74%, tamil (lenguaje nacional) 18%, otros 8%

Alfabetismo: aproximadamente 90,2%

Nombre del país: República democrática socialista de Sri Lanka

Tipo de gobierno: República

Capital: Colombo

Divisiones administrativas: ocho provincias: Central, Nor-central, Noreste, Noroeste, Sabaragamuwa, Sur, Uva, Occidental

Independencia: 4 de febrero de 1948 (del Reino Unido)

Constitución: 16 de agosto de 1978

Gobierno: Presidente: Chandrika Bandaranaike Kumaratunga. Primer ministro: Ranil Wickremasinghe. El presidente se considera el jefe de Estado y la cabeza del Gobierno.

Elecciones: presidente elegido por voto popular por seis años. La última elección se realizó en diciembre de 1999, la próxima se realizará en diciembre del 2005.

Economía: En 1977 Sri Lanka abandonó las políticas proteccionistas para implantar políticas orientadas hacia el mercado. Actualmente, los sectores más dinámicos son el procesamiento de comidas y bebidas, textiles, telecomunicaciones y banca. En 1996 la agricultura representaba el 20% de las exportaciones, mientras que los textiles representaron un 63%. El PIB creció a una tasa anual de 5,5% durante la década de 1990 hasta que la situación de inseguridad lo hizo descender hasta un 3,8% en 1996. La economía repuntó entre 1997 y 1998, con un crecimiento de 6,4% y 4,7%, pero decreció en 1999 hasta un 4,3%, volviendo a aumentar en 2000 hasta un 5,6%.

Crecimiento del PIB: 5.6% estimado (2000)

Población debajo de la línea de pobreza: 22% estimado (1997)

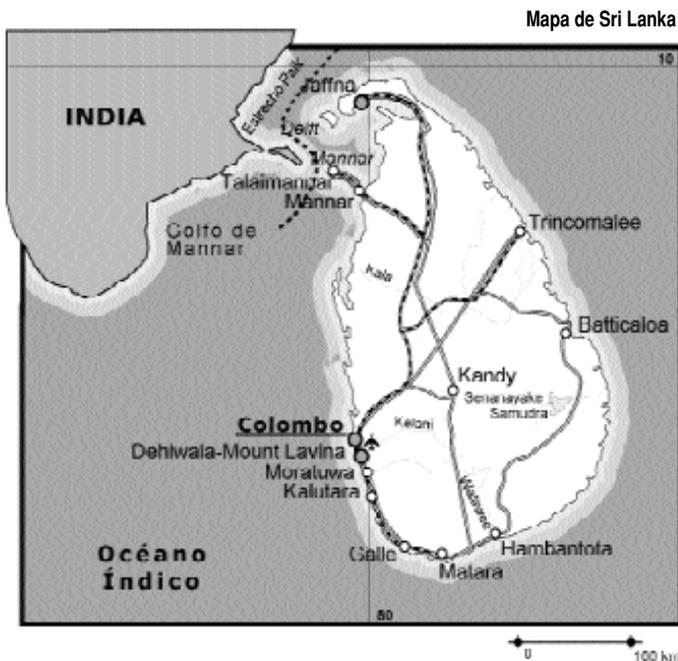
Índice de desempleo: 8,8% estimado (1999)

Distribución étnica: los principales grupos étnicos son el cingalés y el tamil. Los cingaleses representan el 74% de la población, los tamiles de Sri Lanka el 12 % y los tamiles indios el 0,5% de la población. Los tamiles indios fueron trasladados a la isla por los ingleses durante el siglo XIX para trabajar en las plantaciones agrícolas.

La población tamil está concentrada en la provincia del norte (82.2%) y en la provincia del este (43%), áreas a las que los tamiles se refieren como sus territorios tradicionales, lo cual es disputado por los cingaleses. Cerca de 500.000 tamiles (17% de la población tamil) viven fuera de dichas regiones. Un tercio de esta población habita en el distrito de Colombo. Los tamiles indios se concentran principalmente en las montañas centrales. Los cingaleses se sitúan en las siete provincias restantes. En el norte la población cingalesa es del 07,5%, y en el este de 24,8%.

Los musulmanes constituyen el 07,15% de la población de Sri Lanka distribuidos principalmente en la provincia del este y en pequeños grupos a lo largo del país.

Fuente: <http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ce.html>



Indigenismo

Conflicto mapuche en Chile

105

IGNACIO BARRIENTOS PARDO

Conflicto mapuche en Chile

Desde hace cinco años el conflicto indígena en el sur de Chile se recrudece progresivamente. Sin embargo, en los últimos doce meses, sucesivos actos, en ocasiones acompañados de violencia de grupos indígenas por la recuperación de tierras; la supuesta vinculación de determinados sectores indígenas con grupos extremistas; la represión policial sobre los comuneros; la creación de cuerpos de autodefensa por parte de empresas forestales y terratenientes; o las amenazas de los descendientes de colonos suizos, franceses, españoles e italianos de crear un frente común ante las embajadas de países europeos para impedir la cooperación internacional con las organizaciones indígenas, dan cuenta de un cambio cualitativo en la conflictividad. Varias razones explican este fenómeno. En este artículo se explora brevemente en la historia de la relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno para explicar las manifestaciones más recientes del conflicto.

Ignacio Barrientos Pardo es abogado especializado en temática indígena en Chile y doctorando por la Universidad Autónoma de Madrid

En los últimos años se habla de Chile como un buen ejemplo de desarrollo tanto económico como político. Desde el punto de vista económico, tiene sus cuentas ordenadas. Entre 1990 y 1998 redujo la distancia que lo separa del ideal mundial para el pleno desarrollo humano en un 22%, situándolo en el primer lugar de América Latina. En Sudamérica es el país que presenta la mejor evolución en la década 1990-2000.¹ Respecto a lo político, tras 11 años de Gobiernos democráticos está salvando el último obstáculo que impedía la consolidación de la democracia.

No obstante, existe una realidad menos conocida que afecta a casi el 10% de su población. Chile enfrenta un larvado conflicto con sus pueblos originarios, y especialmente con el pueblo mapuche. Durante mucho tiempo se restó importancia, incluso en los foros internacionales, a la existencia de indígenas en Chile.² En el censo de 1992 el Gobierno de Patricio Aylwin incluyó una pregunta

¹ Ministerio de Planificación y Cooperación, Gobierno de Chile, *Desarrollo Humano en la comunas de Chile*, Temas de desarrollo humano sustentable, PNUD, 2000, N° 5.

² En 1907 el primer Censo de Indios Araucanos estableció una cantidad de 101.118 indígenas. El Censo de Población y Vivienda de 1982 dio como resultado 138.670 indígenas.

sobre autoidentificación étnica. Un total de 928.060 personas declararon pertenecer al pueblo mapuche. En menos de 10 años, Chile descubrió que su población constaba de un 9,6% de indígenas. En cuanto a su distribución geográfica, el 44% de la población mapuche reside en la Región Metropolitana, constituida por Santiago y comunas aledañas. El resto habita principalmente en las Regiones VIII, IX y X (las que antiguamente formaban el amplio territorio mapuche). Un 79% de la población mapuche vive en pueblos o ciudades densamente poblados, lo que constituye un gran porcentaje de mapuches urbanos. Sin embargo, en la Región de la Araucanía, donde se concentra el conflicto, la población mapuche es mayoritariamente rural (un 30,2 % vive en la ciudades y un 69% en el campo).³

A pesar de los elogios al proceso chileno, el país atraviesa un periodo de profundización de las desigualdades sociales. Las tres regiones señaladas presentan los niveles más bajos de desarrollo humano en salud, educación e ingresos, lo que dista de la creciente actividad empresarial, sobre todo en la VIII y IX Región. Las estadísticas oficiales demuestran que la brecha entre la población mapuche y no mapuche no se han superado en relación a las tasas de mortalidad, al promedio de años de estudio, la calidad de la educación, el analfabetismo, entre otros.⁴

Origen del conflicto

A finales del siglo XIX, Chile era un país en expansión.⁵ El episodio de expansión territorial más importante, por su influencia en el actual conflicto indígena, fue la guerra contra los mapuches, conocida bajo el eufemismo de “Pacificación de la Araucanía”, que culminó en 1881, y que incorporó más de 10 millones de hectáreas de tierra en el sur del país.⁶

Tras la victoria militar en la Araucanía,⁷ se adoptaron unas medidas que quebrantaron la unidad y fuerza del pueblo mapuche con el objetivo de prevenir cualquier intento de rebelión. Entre ellas destacan:

³ Gabriela Pérez Pino, “Población Mapuche en Chile. Situación demográfica (Censo de 1992)”, *Pueblo Mapuche: Desarrollo y autogestión. Análisis y perspectivas en una sociedad pluricultural*, Escaparate, Temuco, 2000.

⁴ *Ibidem*.

⁵ En pocos años Chile ganó por la fuerza dos nuevas provincias del norte (Tarapacá y Antofagasta), como producto de la Guerra del Pacífico que lo enfrentó a Perú y Bolivia, terminada en 1881. En 1880 se produjo la ocupación agrícola y colonización de la Patagonia chilena y de Tierra de Fuego. En 1888 tuvo lugar la anexión de Isla de Pascua.

⁶ Los mapuches no fueron vencidos por la Corona Española con la que entablaron acuerdos conocidos como “Parlamentos”.

⁷ Así se llama al territorio en el que vivieron y actualmente habitan aproximadamente el 36% de los mapuches en Chile. De acuerdo a la división administrativa del país, este territorio comprende las actuales Regiones VII (Del Bío-Bío), IX (De la Araucanía) y X (De los lagos).

- La radicación territorial compulsiva y arbitraria de los jefes familiares y caciques locales, junto a la gente que “les pertenecía”, denominadas reducciones, para lo que se dividió parte del antiguo territorio mapuche en 3.078 títulos de merced.⁸
- El resto de las tierras ocupadas fueron rematadas a colonos extranjeros y nacionales para su aprovechamiento productivo. En muchos casos, por razones puramente estratégicas, se entregaron a colonos franjas de terrenos aledaños a las reducciones mapuches para quebrar de esa manera la continuidad territorial indígena.
- Simultáneamente a la reducción, se desestructuró la sociedad indígena aboliendo el sistema de jerarquía del cacicazgo, y su consecuente poder e influencia social, y proscribiendo las costumbres e instituciones. La radicación de los mapuches, a través de títulos de merced, no sólo fue una reducción territorial, sino también cultural.

La usurpación como causa del empobrecimiento mapuche

A partir de 1881 cambió inexorablemente la sociedad mapuche y su relación con el Estado y con la sociedad chilena. La reducción territorial marca la historia de esta relación. Antes de la guerra la sociedad mapuche era principalmente ganadera y trashumante. Ésta actividad exigía vastos territorios no sujetos a propiedad privada y que se extendían más allá de las fronteras de Chile. Las medidas estatales perturbaron la estructura económica del pueblo mapuche, convirtiendo a los indígenas en campesinos pobres y alejando el bienestar en el que vivían hasta ese momento.⁹ Entre los factores, amén de la propia reducción territorial, que influyeron en el empobrecimiento de los mapuches destacan: la escasa cultura agrícola de los mapuches acostumbrados a una explotación extensiva del suelo, la pésima calidad de los terrenos asignados y su degradación y erosión progresiva, y el deterioro de sus mecanismos de solidaridad interna.

A principios del siglo XX los mapuches fueron víctimas de la violencia, del engaño y de la rapiña de colonos y particulares, limítrofes con las tierras comunitarias, que ejercieron presión y/o urdieron argucias para disminuir la superficie de sus terrenos o conseguir su expulsión. Se contaba con un Estado impotente en un territorio llamado “La Frontera”; y con la complacencia y complicidad de funcionarios públicos y judiciales. Ante la carencia de Estado, primaba la ley del más fuerte. Se perpetuaba así una segunda usurpación por parte de los propietarios

*Las medidas
estatales
perturbaron
la estructura
económica
del pueblo
mapuche,
convirtiendo
a los
indígenas en
campesinos
pobres y
alejando el
bienestar en
el que vivían
hasta ese
momento*

⁸ El Estado cedió por esta vía sólo 500 mil hectáreas. Con esta superficie sólo se favoreció a 77.751 indígenas, cuando se estima que la población mapuche ascendía a aproximadamente 100.000 personas. Éste es el origen de las actuales comunidades indígenas de menor potencial agrícola y de reducidas dimensiones. Con el tiempo, merced al aumento de la población, estas dos circunstancias han originado el minifundio mapuche.

⁹ Son muchos los relatos que describen la abundancia de la época previa a la ocupación militar. Una muestra de ello es la rica y hermosa platería mapuche.

particulares. La resistencia pasiva y la desconfianza de los indígenas fueron sus primeros frutos y han marcado las directrices del conflicto. De ese tiempo proviene la denominación de *huinca* para el no mapuche, que significa ladrón, perro, usurpador.¹⁰

Otro factor que influye en la relación entre los indígenas y la sociedad chilena son los estereotipos que se crean en los albores del siglo XX. El mapuche es visto por la sociedad chilena como indio flojo, sucio, borracho y ladrón. En la conciencia colectiva se justificará así la pobreza mapuche, ocultándose la ocupación y la reducción como su causa original. La reducción cultural involucró que el indígena, lo mismo que en el resto del continente, equivalía a un lastre. La única posibilidad será la integración civilizadora. Chile no será la excepción en América Latina.

El 5 de septiembre de 2001 los Obispos del sur de Chile, bajo el título "Por la dignificación del pueblo mapuche", señalaron que "los conflictos actuales (...), difícilmente tendrán una solución adecuada si no se asume como país los antecedentes históricos que los han originado. (...) Si el pueblo mapuche, en la actualidad, se encuentra reducido a condiciones de pobreza y marginación, se debe particularmente a la pérdida de la mayor parte de su territorio y a la denigración de su cultura".

El movimiento mapuche

En 1911 tiene su origen el movimiento mapuche, cuando los hijos de los principales caciques, educados en las escuelas nacionales, toman conciencia de la situación de su pueblo. Ese año se crea la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, portadora de un indigenismo integracionista y partidaria de la división de las comunidades surgidas de la radicación. En 1934, siempre dentro de la vertiente integracionista, jóvenes mapuches, hasta entonces miembros de esta Sociedad, fundan la Corporación Araucana, cuyo principal líder fue Venancio Coñoeapan.¹¹

En 1914, Manuel Aburto Panguilef crea la Sociedad Mapuche de Protección Mutua, basada en la defensa cultural, territorial, religiosa y lingüística de los mapuches. En los años veinte Panguilef fundó, junto a otros dirigentes, la Federación Araucana, que realizó 19 congresos indígenas en los que se intentaba rescatar la tradición ritual mapuche. En 1932, la Federación planteó su máxima reivindicación: la República Indígena, concebida como una alianza efectiva de los indígenas, campesinos y obreros para conquistar el poder y lograr el reconocimiento de sus demandas. En un país con una fuerte conciencia centralista y unitaria esta proclama causó alarma y fue catalogada como un atentado a la patria. Este dirigente, gracias a su relación con la Federación Obrera de Chile (FOCH) y el Partido Comunista, articula el discurso de resistencia étnico cultural con la cuestión social

¹⁰ Se calcula que las tierras usurpadas ascienden a cerca de 70.000 hectáreas. José Bengoa, *Historia de un conflicto. El Estado y los mapuches en el siglo XX*, Planeta/Ariel, Santiago de Chile, 1999.

¹¹ José Bengoa, *La Historia del Pueblo Mapuche, Siglo XIX y XX*, LOM, Santiago de Chile, 2000.

y popular chilena, encauzando políticamente las demandas mapuches. En los años cuarenta, el prestigio de la Federación y del propio Panguilef decayeron sensiblemente.¹²

Durante la década de 1950, la línea indigenista de la Corporación Araucana toma fuerza, a la vez que se funda la Asociación Nacional Indígena de Chile, de orientación izquierdista. Por su parte, las políticas gubernamentales oscilaban desde el integracionismo al asimilacionismo. La lucha indígena era vista como una modalidad de la lucha social, y fueron muchos los dirigentes mapuches que intervinieron en la política nacional, especialmente en partidos de izquierda y en organizaciones sindicales. Sin embargo, algún sector del indigenismo moderado estableció alianzas con el Partido Conservador chileno.

Los convulsionados años setenta evidenciaron la problemática indígena. Una fuerte efervescencia social sacudía el campo, traducida en las primeras recuperaciones o tomas de terrenos. En 1962 se promulga la Ley de Reforma Agraria, siendo uno de sus objetivos resolver las demandas de los mapuches a través de la compra de terrenos privados. En 1967, se dicta una nueva Ley de Reforma Agraria que posibilitaba la expropiación de grandes predios. Este procedimiento fue notoriamente activado por una estrategia de recuperaciones efectuadas por diversas organizaciones indígenas. En 1972, el Gobierno de Salvador Allende dicta la Ley N° 17.729, que contiene normas de protección de las tierras indígenas, crea el Instituto de Desarrollo Indígena, y autoriza a este organismo para solicitar la expropiación de predios particulares a favor de comunidades mapuches.

El golpe de Estado de Pinochet (1973) dio lugar a un proceso de contrarreforma agraria, además de la aplicación de un control represivo y un desmantelamiento del movimiento mapuche. Se comenzó a aplicar la ideología neoliberal en el campo, siendo uno de sus principales exponentes un decreto ley (N° 701) que, además de promover la expansión forestal mediante subsidios, autorizó a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para enajenar las tierras que habían sido objeto de la contrarreforma agraria, muchas de las cuales todavía estaban ocupadas por comunidades mapuches. La CONAF cumplió su cometido adjudicándolas mayoritariamente a grandes empresas forestales. En 1979, se promulgó un decreto ley que impulsó un proceso de división de las comunidades mapuches constituidas a partir de las 3.078 radicaciones.¹³ Pese a la resistencia indígena, la división se materializó en más de un 80%, y su resultado fue el minifundio. La pauperización de la sociedad mapuche se hizo crónica al violentarse los últimos mecanismos comunitarios de cooperación. La migración campo-ciudad se convirtió nuevamente en una estrategia de sobrevivencia. Pero esta normativa involucró un golpe al pueblo mapuche desde una perspectiva identitaria, pues uno de los efectos de la división de la comunidad consistía en que la hijuela resultante de ella dejaba de ser tierra indígena, y lo mismo ocurría con sus ocupantes. Se trataba de un disimulado mecanismo de desindianización.

*La
pauperización
de la
sociedad
mapuche se
hizo crónica
al violentarse
los últimos
mecanismos
comunitarios
de
cooperación*

¹² *Ibidem.*

¹³ En 1927 se dictó la primera ley de división de comunidades, pero fue rápidamente derogada por la fuerte oposición que concitó.

La democracia impuso la lógica del diálogo con los pueblos indígenas. Un diálogo muchas veces postergado. En 1989, en ciudad Nueva Imperial, situada en el corazón del territorio mapuche, se reunió el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin con numerosos dirigentes indígenas para firmar un acuerdo cuyos puntos centrales eran: el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la promulgación de una ley indígena con la participación activa de las organizaciones. El compromiso indígena consistía en la canalización institucional de sus reivindicaciones. Es lo que se llamó el Parlamento de Nueva Imperial (1989).

Fruto de ese acuerdo se promulgó, en 1993, la Ley Indígena, a partir de la que se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) con dos fondos: Fondo de Desarrollo y Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. La CONADI fue concebida como un organismo mixto, con participación gubernamental e indígena, con la responsabilidad de implementar la política indígena. Esta iniciativa generó muchas expectativas, a las que no ha respondido adecuadamente, pues tras el largo procedimiento legislativo en virtud de numerosas mociones de enmienda, el alcance de su contenido se vio seriamente disminuido. Por su parte, las iniciativas de reconocimiento constitucional y de ratificación del convenio de la OIT fueron rechazadas. Estos son en la actualidad meros proyectos, lo que influye en el agravamiento del conflicto.

Las causas del recrudecimiento del conflicto

Entre otros, los factores que explican el aumento de la conflictividad son:

- 1) El incumplimiento de los acuerdos de 1989: después de 12 años siguen sin cumplirse dos importantes puntos de los acuerdos de Nueva Imperial, lo que genera desconfianza y recelo en las organizaciones indígenas.
- 2) La insuficiencia de la Ley Indígena en la satisfacción de las demandas indígenas: el nuevo texto legal desde su promulgación defraudó a sus principales promotores. La normativa sobre protección de las tierras y aguas indígenas fue estimada vulnerable; no se aseguró a los indígenas el uso y explotación de los recursos naturales existentes en el subsuelo; la participación indígena resultó ser meramente consultiva y con pocas posibilidades de influir en las acciones estatales; el presupuesto destinado a los ejes de la CONADI han resultado escasos para responder a la creciente presión del movimiento mapuche.
- 3) La reelaboración del discurso indígena: cuando se firmó el acuerdo de 1989 no se encontraba completamente articulado el nuevo discurso de la dirigencia mapuche. En la actualidad emerge un planteamiento autonomista que persigue, entre otras, la recuperación y reconocimiento del territorio y costumbre mapuche. Las demandas han evolucionado, merced a la globalización de la cuestión indígena, teniendo como referencias a los diversos pueblos indios que viven situaciones similares y los distintos

foros internacionales. Es la influencia de lo que José Bengoa llama "emergencia indígena"¹⁴.

- 4) La irresolubilidad de la demanda territorial: una constante de las reivindicaciones mapuches es la tierra ancestral. No es casualidad que lo que se llama el conflicto mapuche esté centrado en sucesivas acciones de recuperación o toma de terrenos que enfrentan a indígenas con empresas forestales o agricultores descendientes de colonos. Ante esos hechos, los mecanismos creados por la Ley Indígena han sido ineficaces. No han bastado las numerosas compras de tierras en conflicto ni los subsidios estatales. Si a esto se agrega el cambio conceptual de la demanda territorial que implica la reconstrucción del territorio mapuche, la solución no es fácil.
- 5) La fragilidad de la institucionalidad indígena: la CONADI no ha podido cuajar como el organismo encargado de la política indígena. En un país con un modelo centralista, la CONADI es el único servicio público de carácter nacional que no tiene sede en la capital de Chile. Ello ha servido para marginalizar y regionalizar la cuestión mapuche. Además, la existencia de la CONADI se ha visto cruzada por el debate político, social y judicial suscitado por la construcción de la Represa Ralco,¹⁵ incidiendo en la destitución de dos de sus directores nacionales. La propia estructura y carencia de medios materiales que ha afectado a la corporación la han vuelto ineficaz.
- 6) La extrema pobreza de los mapuches: aunque el tema crucial del movimiento mapuche es la tierra, el alto porcentaje de población mapuche urbana obliga a alertar sobre otras circunstancias que influyen en la conflictividad. La extrema pobreza es, indudablemente, una de sus causas. El origen de la pobreza indígena urbana se puede encontrar en la corriente migratoria mapuche desde el campo a la ciudad, especialmente a Santiago de Chile, iniciada en la segunda década del siglo XX para trabajar en la industria y en el servicio doméstico.

Claves del conflicto

Además de agravarse, el conflicto indígena ha aumentado su complejidad pues envuelve al Estado, a la sociedad chilena, a los empresarios nacionales, las empresas transnacionales y a organismos internacionales, por lo que se multiplican los frentes. En unas ocasiones tiene lugar en las instituciones políticas; en otras implicarán recursos al sistema judicial, y en no pocas, recursos ante organizaciones internacionales.

¹⁴ José Bengoa, *La emergencia indígena en América Latina*, FCE, Santiago de Chile, 2000.

¹⁵ En la región del Bío-Bío (VIII Región) ENDESA construye en la cuenca superior del río Bío-Bío, desde principios de la década de los noventa del siglo pasado, la Represa Ralco, que una vez concluida inundará las tierras de varias comunidades indígenas.

El movimiento mapuche no es homogéneo.¹⁶ Actualmente son dos organizaciones las que impulsan principalmente las reivindicaciones. El Consejo de Todas las Tierras, cuyo líder más conocido es Aucán Huilcamán, opera desde finales de los años ochenta utilizando como estrategia las recuperaciones de terrenos en conflicto para luego entablar negociaciones. A pesar de su relativo éxito, su ambivalencia frente a la institucionalidad estatal le significó perder credibilidad en algún sector del movimiento indígena. Este fue asumido por una organización denominada Coordinadora Malleco-Cautín, que con un discurso más radical ha empleado la estrategia de recuperaciones, principalmente en manos de empresas forestales o de descendientes de colonos, pero sin la misma disposición al diálogo. Uno de sus dirigentes afirmó, “nos aburrimos de esperar, así que recuperamos nuestras tierras y no tenemos que conversar con nadie. Ese es problema del gobierno”.¹⁷ Estas declaraciones han ido acompañadas de marchas, actos pacíficos, pero también de hechos violentos como incendios, retenciones y agresiones de personas.

Los sucesivos Gobiernos han asumido posturas ambivalentes y en muchos casos contradictorias. Por un lado, han intentado entablar diálogos con las diversas organizaciones mapuches, aumentado el presupuesto de la CONADI para la compra de tierras, creando grupos de trabajo para el estudio de la situación de los indígenas, entre otras medidas. Por otro, han solicitado la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, una norma especial para casos de alteración del orden público. Los Gobiernos han intentado buscar soluciones amigables, pero no han vacilado en usar la fuerza policial para la represión, lo que constituye un indicio de la incomprensión de la magnitud y carácter del problema en la cúpula del Estado. Además, sobre el Ejecutivo se cierne el temor a sanciones internacionales que afecten su buena imagen en materia de derechos humanos.¹⁸

El último intento por lograr una salida pacífica al conflicto fue la creación, el 31 de marzo de 2000, de la Comisión por la Verdad Histórica y Nuevo Trato, cuyos objetivos son establecer nuevas formas de participación indígena y explicar la relación entre los pueblos indígenas y el Estado. Durante algún tiempo los actos reivindicativos mermaron en espera de los resultados pero, tras meses de insatisfacción, las organizaciones volvieron a usar sus estrategias de conflicto. En enero de 2001 se nombró como presidente de la Comisión a Patricio Aylwin, y se cursó invitación a los dirigentes del Consejo de Todas Las Tierras y de la Coordinadora, quienes no han concurrido a sus reuniones. La creación de la Comisión para la

¹⁶ En *El Mercurio* se dio a conocer que la violencia constituía un factor de división del movimiento mapuche. Lo mismo ocurría con las estrategias de negociación. *El Mercurio*, 8 de marzo de 2002 (www.elmercurio.cl). Incluso, en los últimos meses, se han producido enfrentamientos, con resultado de víctimas fatales, entre comunidades indígenas interesadas en el mismo predio adquirido por la CONADI.

¹⁷ *La Tercera*, domingo 10 de octubre de 1999.

¹⁸ La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) admitió a estudio la demanda presentada en 1996 por el Consejo de Todas la Tierras en contra del Estado chileno por violación de los derechos procesales de 144 comuneros mapuches en 1992. El procedimiento se mantuvo suspendido desde 1997 por la búsqueda de una solución amistosa que, en definitiva, no se logró. *El Mercurio*, 12 de abril de 2002. (www.elmercurio.cl)

Verdad Histórica y Nuevo Trato no ha servido para fomentar el diálogo, principalmente, por que las organizaciones indígenas que más interesaba que asistieran se han autoexcluido. Las razones de hace ochenta años prevalecen: desconfianza y resistencia.

No hay indicios que el conflicto, considerando las posiciones que asumen las partes involucradas, sea resuelto a medio plazo. Varias organizaciones mapuches han optado por la confrontación abierta, ante la incapacidad del Estado para satisfacer sus demandas. Desde hace dos años, la radicalización del movimiento indígena ha aumentado generando una actitud de rechazo en la sociedad no mapuche. El Gobierno y el sector empresarial demandan mayor control policial y sanciones más duras para quienes amenacen o quebranten el Estado de Derecho. Por un lado, se investiga la relación de la violenta movilización mapuche con alguna organización terrorista y su infiltración por agentes foráneos, y por el otro, se hace lo mismo con una supuesta organización paramilitar anti-mapuche creada en la zona sur del país. El clima de tensión se eleva a niveles desconocidos.

La CONADI atraviesa una nueva crisis institucional, mientras se escuchan propuestas que piden su disolución. En los planes del Gobierno no está apoyar la institucionalidad indígena creada en 1993. Sus últimas actuaciones han consistido en la designación de un Coordinador de Políticas y Programas Indígenas,¹⁹ que evidencia esa crisis y la incapacidad de la CONADI para cumplir su encargo, y en el anuncio del Ministerio de Planificación del lanzamiento del Plan Orígenes, dotado con 133 millones de dólares para los pueblos indígenas, que persigue trabar una nueva relación y mejorar sus condiciones de vida de manera integral desde una dimensión cultural.²⁰

Las empresas forestales declaran ser amenazadas en sus actividades por las acciones de los mapuches, y han sido víctimas de atentados en sus instalaciones y contra su personal. El sector empresarial muestra preocupación por el nivel y seguridad de las inversiones en la zona y por la vigencia del derecho de propiedad. Los descendientes de colonos extranjeros (italianos, suizos, franceses, alemanes y españoles) amenazan con crear un frente común para protestar ante las embajadas de los países europeos por el apoyo económico y político que otorgan a grupos mapuches que emplean la violencia contra sus familias y bienes. La transnacional Endesa sigue, bajo resguardo policial, en su intento de trasladar los transformadores para la puesta en funcionamiento de la Represa Ralco. Las familias indígenas obligadas a dejar los terrenos que serán inundados, persisten en su oposición al megaproyecto hidroeléctrico.

Es probable que los conflictos interétnicos no tengan solución, pero al menos cabe esperar su atenuación o su pérdida de centralidad. En Chile, al inicio del Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) se dieron pasos importantes en este sentido. Luego, el diálogo se interrumpió, y no se han generado espacios que logren uno real y efectivo con todas las partes involucradas. Las recetas para estos conflictos son generalmente: diálogo y participación. No obstante, hace falta algo más

*La
radicalización
del
movimiento
indígena ha
aumentado,
generando
una actitud de
rechazo en la
sociedad no
mapuche*

¹⁹ *El Mostrador*, 19 de marzo de 2002. (www.elmostrador.cl)

²⁰ *El Mostrador*, 31 de marzo de 2002. (www.elmostrador.cl)

que buena disposición. Se requiere, por un lado, acuerdos sólidos sobre los contenidos esenciales e iniciales del diálogo, y que la participación, además de amplia, sea percibida por los indígenas, como influyente y no meramente decorativa. Una participación que reúna estas condiciones posibilita un diálogo eficaz. Asimismo, se necesita que las partes tengan una actitud política consistente y flexible para enfrentar el diálogo sin dogmatismo ni fundamentalismo. La política estatal ha mantenido cierta flexibilidad, pero ha sido notoriamente inconsistente²¹ en lo sustancial de las medidas adoptadas. Por su parte, las organizaciones mapuches mantienen sus demandas territoriales y culturales, reelaboradas desde principios de los años noventa, pero simultáneamente radicalizan su acción, generando en la sociedad un clima de mayor rechazo hacia sus reivindicaciones y poniendo en suspenso su capacidad de influir en la toma de decisiones.

Todo indica que Chile, a menos que se comprenda que el conflicto indígena es una cuestión social, ética y política que involucra a toda la sociedad, continuará en su extravío en la búsqueda de una solución. Queda la esperanza de que el informe de la Comisión para la Verdad Histórica y Nuevo Trato abra el camino.

²¹ “Se dice que un comportamiento es consistente cuando una persona se adhiere firmemente a un postulado o creencia para evitar la contradicción...”. Rafael Alonso y Sara Berberl, “Procesos grupales e intergrupales”, en Pilar González (ed.), *Psicología de los grupos. Teoría y aplicación*, Editorial Síntesis, Madrid, 1999.

Educación

Conocer lo que pasa: la educación para la paz después del 11 de septiembre

117

XESÚS R. JARES

Conocer lo que pasa: la educación para la paz después del 11 de septiembre*

Durante los siete meses posteriores al histórico 11 de septiembre de 2001, se han publicado diversas revistas y libros sobre las consecuencias de los execrables atentados terroristas de Nueva York y Washington. Sin embargo, no hemos visto ningún trabajo dedicado a analizar la incidencia de estos hechos en el campo educativo. Las únicas referencias han sido de tipo periodístico, en las que se preguntaba sobre la capacidad de comprensión de los atentados por la población infantil y las posibles consecuencias psicológicas que en ella podía generar. Demandas formuladas por la especial incidencia mediática que han tenido los atentados pero que, además de incompletas, sesgan su orientación al fijarse únicamente en las consecuencias psicológicas y en un sector de la población. Se necesitan otras reflexiones de base más sociológica que tengan en cuenta al conjunto de las personas. En este sentido, se formulan las siguientes diez propuestas educativas para encarar el “nuevo”¹ escenario internacional.

* Una versión más ampliada de este artículo puede leerse en el N° 49 de los *Cuadernos Bakeaz*, Bakeaz, Bilbao, 2002.

¹ Consideramos que han surgido cinco procesos sociales, estrechamente interrelacionados entre sí, pero que en modo alguno podemos calificar de novedosos, tal como han sostenido diversos analistas. Eso sí, los atentados del 11 de septiembre han hecho que sean más visibles. Dichos procesos son: la recuperación de la ideología dual de la guerra fría; el miedo de la población y su instrumentalización para favorecer la militarización de la sociedad y la aprobación de nuevas inversiones militares; la

Xesús R. Jares es profesor de la Universidad de A Coruña. Coordinador de Educadores pola Paz-Nova Escola Galega. jares@udc.es

1. Enfatizar el valor de la vida humana y la cultura de la no-violencia

En primer lugar, los atentados del 11 de septiembre han supuesto, entre otras cosas, la violación de dos principios fundamentales que están muy ligados al tipo de educación y cultura en el que somos socializados: el desprecio por la vida humana y la fractura de la necesaria unidad que debe existir entre los fines y los medios en toda lucha política o social. La violación de estos dos principios no es ninguna novedad para muchos países del mundo que padecen el fenómeno terrorista, entre ellos España, ni tampoco para EEUU que lo ha practicado y alentado —terrorismo de Estado— en diversos países y periodos históricos. La novedad reside en el alto volumen de personas que fallecen en los atentados pero, sobre todo, por producirse en el mismo corazón financiero, político y militar de EEUU. Como se ha señalado, es la primera vez que desde la guerra de 1812 el territorio estadounidense se ve atacado e incluso amenazado. Desde la educación para la paz debemos reforzar nuestras propuestas inequívocas a favor de una cultura de la no-violencia que comience por el respeto por la vida de los demás y por los principios democráticos.²

2. Combatir el miedo

El miedo obstaculiza la racionalidad, la convivencia y la solidaridad, negando la esencia misma del sentido educativo. Tanto en el plano individual como en el social, debemos contrarrestar las políticas que fomentan el miedo, dado que éste es un proceso que debilita las posibilidades ciudadanas, individuales y colectivas, y suele conducir a la búsqueda de un salvador que elimine, o al menos mitigue, las causas que lo provocan. Los días y meses posteriores al día de los atentados han sido utilizados por la mayoría de los dirigentes e ideólogos de la política estadounidense para usar

pérdida de determinadas libertades y, consecuentemente, la vulneración de determinados derechos humanos; el aumento del racismo y la imposición de una visión unilateral del mundo; y el refuerzo de la hegemonía mundial de EEUU.

² Un ejemplo de realización de este principio es el “Programa educativo municipal Aprender a Convivir” que coordino desde hace dos años en Vigo (www.aprenderaconvivir.org). Todos los centros de la ciudad recibieron la “Carta a la comunidad educativa” firmada por la concejala de Educación, Ana Gandón, en la que además de la condena de los atentados se invitaba a las diferentes comunidades educativas a trabajar el libro *La no-violencia explicada a mis hijas* de Jacques Sémelin, Plaza&Janés, Barcelona, 2001, enviado gratuitamente a todos los centros de Vigo. Además, el profesorado recibió un dossier de artículos de prensa sobre los atentados y las respuestas a los mismos. Esta fue una iniciativa de rechazo de los atentados pero al mismo tiempo ofreciendo una alternativa: la comprensión de los hechos y sus consecuencias junto al compromiso por una cultura de paz que simbolizamos en la estrategia de la acción no-violenta. Posteriormente, en el “XV Encontro Galego e IX Galego-Portugués de educadoras/es pola paz”, celebrado en A Guarda (Pontevedra) del 16 al 18 de noviembre de 2001, se aprobó una resolución de condena tanto de los atentados en EEUU como de la respuesta bélica de EEUU sobre Afganistán.

ese miedo en beneficio de las políticas armamentistas y belicosas, disfrazado de un patriotismo asfixiante de la racionalidad y la comprensión. Como ha señalado Cornelius Castoriadis, cuando las personas aceptan su impotencia dejan de ser autónomas, y con ello pierden la capacidad de autodirigirse. Las personas y las sociedades se vuelven entonces heterónomas, es decir, dirigidas por otros que son los que trazan el rumbo, aceptando plácidamente el destino marcado y abandonando toda esperanza de determinar el itinerario de nuestra propia nave. Así, entramos en la “época de la conformidad universalizada”.³

3. La búsqueda de la verdad y la enseñanza de la verdad histórica

El profesorado, y muy particularmente el de Historia, deberían aprovechar este acto terrorista para fomentar el rechazo de la violencia y, sin caer en el antiamericanismo, explicar la historia reciente de EEUU por haber utilizado y fomentado políticas y prácticas igualmente condenables encuadradas en el terrorismo de Estado.⁴ Con el análisis de esos hechos históricos estamos en mejores condiciones para encarar la pregunta que se hacía el presidente Bush y los estadounidenses después de los atentados, “¿por qué nos odian tanto?”. La respuesta no es la que Bush ha dado, “porque odian nuestras libertades”, sino que debemos buscarla en la injusticia y el dominio. Como ha señalado Jon Sobrino, “sólo con la voluntad de verdad se descubre la verdad mayor. Es verdad que existe terrorismo, pero la verdad es mayor. Las potencias lo han usado cuando les ha venido en gana: en Auschwitz, Hiroshima y Gulag, hace tiempo. EEUU, además, en América Latina en los años sesenta y ochenta, en Irak y Sudán, más recientemente. En la actualidad, a través de tres países —Uganda, Ruanda y Burundi—, mantiene viva la guerra del coltán en la República del Congo, con 80.000 muertos al mes en dos años. Y se mantiene el terrorismo del que no se habla; campea impertérrito el terrorismo del hambre, de la pobreza, el que causa millones de excluidos y refugiados, el que arrumba al sida a la ignorancia y al desprecio”.⁵

Es necesario situar estos terribles atentados con los de antes y después del 11 de septiembre. Reiterando una vez más su condena y exigiendo justicia para los culpables, el árbol de aquel día no puede impedir que veamos el bosque del horror y del sufrimiento que asola a la mayoría de la humanidad, por mucho que este bosque ya no se encuentre en EEUU, aunque en parte también. No se trata de hacer comparaciones, ni de establecer muertes de primera o de segunda pues la muerte iguala a todos los seres humanos, pero el mismo día que morían casi 3.000 personas en Nueva York por ese salvaje atentado lo hacían 40.000 personas en el

*Es necesario
situar estos
terribles
atentados con
los de antes
y después
del 11 de
septiembre*

³ Cornelius Castoriadis, *El ascenso de la insignificancia*, Cátedra, Madrid, 1999.

⁴ Algunos ejemplos que se pueden utilizar en las aulas se encuentran en el libro de Noam Chomsky, *11/09/2001*, RBA, Barcelona, 2002.

⁵ Jon Sobrino, “Redención del terrorismo”, *Política exterior*, enero-febrero de 2002, Vol. XVI, N° 85.

planeta, igualmente dignas y necesarias para la vida como las anteriores, por causas evitables vinculadas al hambre. Por consiguiente, tanto en el plano social como en el educativo, esta realidad debe gozar de una prioridad absoluta en tanto en cuanto la pobreza abochorna la existencia de la humanidad por ser la causante del mayor número de muertes y de sufrimiento en el planeta.

4. Ir a las causas de los problemas

La búsqueda de la verdad tiene que conducir necesariamente al análisis de las causas de los problemas. Para poder resolver los conflictos el primer paso es comprenderlos en toda su extensión, sin apriorismos o prejuicios.⁶ Analizar las causas debe llevarnos a levantar un mapa del conflicto que nos sirva de guía para su resolución. Como afirmaba José M^a Tortosa, “si no se va a las causas, la violencia volverá a presentarse”.⁷ En el caso de los atentados en EEUU, las causas fundamentales tienen que ver con la pobreza y la desigualdad creciente en el mundo entre ricos y pobres, agudizadas con la globalización neoliberal; las políticas de corte imperialista practicadas por EEUU en las últimas décadas, muy particularmente en relación al contencioso palestino-israelí y la guerra del Golfo; y la radicalización de un sector de la población propugnada por grupos extremistas utilizando una interpretación interesada y fundamentalista del Corán. Tal como han advertido diversos intelectuales musulmanes, “la experiencia nos confirma que allí donde se impone la *sharia*, aparece el despotismo sangriento de los religiosos fanáticos, el desprecio por los derechos humanos (pues los integristas no consideran al hombre sino al creyente) y finalmente el terrorismo contra la mujer, como ocurre en Irán, Arabia Saudí o Sudán”.⁸

5. El valor de la justicia y el rechazo de la venganza y el odio

Comprendemos el dolor y la rabia tras la muerte de vidas inocentes.⁹ Como ha afirmado Ulrich Beck, “ninguna causa, ningún dios, ninguna idea abstracta puede justificar el atentado terrorista contra el World Trade Center. No se trata de un ataque contra EEUU, sino contra los valores de la Humanidad y de la civilización, y de un ataque contra los valores del Islam, un ataque contra todos nosotros”. Ahora bien, frente a la injusticia y el terror no se debe responder ni con sus mismos métodos ni con la venganza y el odio, sino con la fuerza de la razón y la justicia. Como ha señalado José Saramago, “una

⁶ Xesús R. Jares, *Educación y conflicto. Guía de educación para la convivencia*, Popular, Madrid, 2001.

⁷ José María Tortosa, “Del diagnóstico a la terapia”, *Inetemas*, diciembre de 2001, Nº 22.

⁸ Sami Naïr, *En el nombre de Dios*, Icaria, Barcelona, 1995.

⁹ Pero el pueblo estadounidense también debe comprender que ese mismo sentimiento lo han sentido muchas personas en diferentes partes del planeta y en diferentes periodos históricos a causa precisamente del ejército o agentes del Gobierno estadounidense u otras organizaciones al servicio de la política exterior estadounidense.

justicia compañera cotidiana de los hombres, una justicia para la cual lo justo sería el sinónimo más exacto y riguroso de lo ético, una justicia que llegase a ser tan indispensable para la felicidad del espíritu como indispensable para la vida es el alimento del cuerpo. Una justicia ejercida por los tribunales, sin duda, siempre que a ellos los determinase la ley, mas también, y sobre todo, una justicia que fuese emanación espontánea de la propia sociedad en acción, una justicia en la que se manifestase, como ineludible imperativo moral, el respeto por el derecho a ser que asiste a cada ser humano".¹⁰

El odio es contrario a una cultura de paz y de convivencia respetuosa. Niega en su misma esencia el sentido educativo. Por eso, frente a la política del odio, del "se busca vivo o muerto", debemos encarar los conflictos desde otra perspectiva, la perspectiva racional y no violenta que es la única que a la larga nos permite resolver los conflictos de forma duradera. En este sentido, debemos pedir a nuestros estudiantes formas alternativas de resolución del conflicto que no sea la guerra que retroalimenta la espiral de la violencia al generar más destrucción y odio. Un buen ejercicio didáctico es sugerir preguntas semejantes a las que ha formulado el jesuita español Jon Sobrino:¹¹

- ¿Qué hubiese ocurrido si el Congreso y la Casa Blanca, animados y apoyados por todas las universidades occidentales ilustradas que creen en la libertad, la igualdad y la fraternidad, por todas las iglesias y religiones que creen en un Dios de débiles y víctimas, por todos los movimientos humanistas que creen en los derechos a la vida del ser humano, se hubiesen preguntado por qué tal horror, qué ha hecho ese país en sus dos siglos de existencia para incitar al odio?
- ¿Qué hubiese ocurrido si hubieran abierto los ojos a su propia realidad y su corazón al dolor que han infligido en el planeta?
- ¿Qué hubiese ocurrido si, unilateralmente y precisamente en esos momentos, hubiesen puesto gestos de aprecio a los pueblos musulmanes y de todo el Tercer Mundo, gestos de compasión a sus agentes que llevan siglos de pobreza y sufrimiento, gestos de intercambio de riquezas naturales y espirituales y no la depredación de materias primas y la imposición de una pseudocultura?
- ¿Qué hubiese ocurrido si la primera palabra, sin quitar el dolor ni la búsqueda de justicia para los culpables, hubiese sido una invitación a la reconciliación?

La venganza y el odio también deben ser eliminados de las *madrasas* — escuelas coránicas—, por estar regidas por fuertes principios fundamentalistas y atentatorias a la dignidad humana. En estos centros, cerrados para las mujeres, es donde surgen en septiembre de 1994 los talibán.¹² "Los talibán han superado la tradición *deobandí* de aprendizaje y reforma: no aceptan la duda sino como pecado, el

¹⁰ Acto de clausura del II Foro Social Mundial de Porto Alegre (Brasil), 2002.

¹¹ Jon Sobrino, *Op. Cit.*

¹² Plural de la palabra persa *telebeh*, buscador de la verdad.

La manipulación informativa debe ocupar un lugar preferente como objeto de análisis, además de ser un medio para llevar a la práctica la búsqueda de la verdad

debate es herejía. Se oponen a la modernidad”, afirma Arranz.¹³ Sin duda se trata de un tratado de pedagogía doctrinaria y fundamentalista que no puede ser tolerado. Cuando este pensamiento adquiere poder a través de los talibán supone graves vulneraciones de los derechos humanos fundamentales, muy especialmente de los derechos de la mujer, y hasta del derecho al patrimonio común de la humanidad.

6. Luchar contra la ignorancia y la manipulación informativa

Los atentados han puesto de manifiesto un desconocimiento muy grande del islam. “Basta con repasar los titulares de la prensa occidental o ver las noticias en televisión para comprobar cómo el desconocimiento, acompañado de la dictadura de la actualidad, perjudican el análisis y la comprensión de la realidad que concierne a los árabes y a todo lo relativo al mundo árabe en general”, afirma Desrues.¹⁴ Según Edward Said, más que un choque de culturas se trata de un choque de ignorancias.¹⁵ Ignorancia que sin duda facilita el etiquetaje y estigmatización de los musulmanes como “enemigos”, “moros” o “fundamentalistas”.¹⁶ En el plano educativo, los materiales curriculares deben esforzarse por introducir información relativa a la cultura árabe al mismo tiempo que se deben cuestionar los prejuicios que sobre la misma se están construyendo. En España, y en Europa en general, debemos corregir esta invisibilidad de dicha cultura porque la inmigración árabe es la más numerosa.

La manipulación informativa debe ocupar un lugar preferente como objeto de análisis, además de ser un medio para llevar a la práctica la búsqueda de la verdad. Como quedó contrastado en la guerra del Golfo, nuevamente la manipulación informativa acompaña a la contienda bélica. En el caso de los atentados de septiembre y la guerra de Afganistán se ha dado un paso más al crear la “muy orwelliana”, en palabras de Ignacio Ramonet, Oficina de Influencia Estratégica (BIS) por parte del Pentágono, “explícitamente encargada de difundir falsas informaciones para intoxicar a la prensa internacional e influenciar a las opiniones públicas y a los dirigentes políticos tanto de los países amigos como de los Estados enemigos”.¹⁷ “Como en los años del macartismo y de la guerra fría, bajo el control del Ministerio estadounidense de Defensa, una especie de ministerio de la desinformación y de la propaganda se ha establecido para instaurar, como en las dictaduras ubuescas, la verdad

¹³ Jose Luis Arranz, “Claves para situar un conflicto”, *Inetemas*, diciembre 2001, Nº 22.

¹⁴ Thierry Desrues, “El Islam y los árabes. Algunos elementos para comprender su unidad y diversidad”, *Inetemas*, diciembre de 2001, Nº 22.

¹⁵ Edward Said, “El choque de las ignorancias”, *El País*, 10 de octubre de 2001.

¹⁶ Un breve texto introductorio con el que contrarrestar estos estereotipos en Secundaria es el de Hélène Barnier, *Percepciones sobre el mundo árabe*, Observatorio de Conflictos, Colección Las raíces de los conflictos, Unidad didáctica 3, CIP/FUHEM, Madrid, 1997.

¹⁷ Ignacio Ramonet, “El eje del mal”, *Le Monde diplomatique*, edición española, marzo de 2002, Nº 77.

oficial” afirma Ramonet.¹⁸ En este sentido habla Joaquín Estefanía de un “nuevo macartismo” cuando los dirigentes políticos conservadores de Europa y EEUU intentan desprestigiar y anatematizar al movimiento antiglobalización.¹⁹ Facilitar la comprensión de este tipo de procesos frente al poderío mediático que muestra los efectos pero no las causas, ayudará a una toma de posición más racional y menos proclive al miedo, la angustia y la amenaza que nos acecha.²⁰

7. Insistir en el valor de la democracia y la necesidad de la globalización de los derechos humanos

La educación para la paz debe realizarse desde y para los derechos humanos.²¹ Los derechos humanos son el mejor legado que nos ha dejado el siglo XX y probablemente la construcción socio-cultural más importante del ser humano. Por ello, los centros educativos deben hacer frente a las políticas neoliberales que, asentadas en el individualismo, la competitividad, el gerencialismo y la excelencia del mercado, cuestionan los derechos humanos, entre ellos el propio derecho a la educación, la democracia y el Estado del bienestar. Luchar contra la conversión de la democracia en mera libertad de consumo, aceptando las normas y valores impuestos por el mercado a través de la “ingeniería de la persuasión”,²² son tareas prioritarias de las educadoras y educadores para la paz.

Uno de los logros más importantes en el proceso de humanización que significa la lucha por los derechos humanos es el establecimiento de instituciones internacionales de justicia, como los tribunales internacionales que juzgan los crímenes cometidos en Ruanda y en la antigua Yugoslavia. La decisión que en 1998 tomó la comunidad internacional de crear una Corte Penal Internacional (CPI) mediante el Tratado de Roma con jurisdicción sobre el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, ha sido justamente considerada como un paso vital en la lucha contra la impunidad.²³ El 1 de julio de 2002 entrará en vigor la CPI al ser ratificada por más sesenta Estados.²⁴

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Joaquín Estefanía, “El nuevo macartismo”, *El País*, 18 de marzo de 2002.

²⁰ Para trabajar esta temática: Noam Chomsky e Ignacio Ramonet, *Cómo nos venden la moto*, Icaria, Barcelona, 1995.

²¹ Xesús R. Jares, *Educación y derechos humanos. Estrategias didácticas y organizativas*, Popular, Madrid, 1999b.

²² Ignacio Ramonet, “Pensamiento único y nuevos amos del mundo”, en Noam Chomsky e Ignacio Ramonet, *Op.Cit.*

²³ La lucha a favor de una justicia internacional está ligada a la lucha contra la impunidad, y ambas ligadas a la lucha por los derechos humanos. Cualquiera que sea la causa, la impunidad significa, en última instancia, la negación de la justicia para las víctimas y crea un clima en el que los individuos pueden seguir cometiendo violaciones sin temor a ser arrestados, procesados o castigados.

²⁴ Destaca el rechazo de EEUU a la CPI, por la posibilidad de que ciudadanos estadounidenses sean juzgados, así como algunas de sus acciones militares ya realizadas o

8. Sensibilizar sobre la reorganización de la ONU como garante de las relaciones internacionales

Los atentados del 11 de septiembre han provocado una reacción internacional de condena casi unánime. Sin embargo, la falta de autocrítica y la política unilateral que ha establecido EEUU desde ese momento ha supuesto un nuevo golpe a Naciones Unidas. El Gobierno de Bush “debería aprovechar la condena prácticamente unánime e inequívoca del crimen que ha evidenciado la vulnerabilidad de EEUU frente al terrorismo, para ejercer el liderazgo del sistema multilateral cuyo eje son Naciones Unidas, en lugar de acentuar el unilateralismo exhibido en este tiempo para satisfacer sus intereses o combatir las amenazas a su seguridad, usurpando competencias, imponiendo formas de cooperación a otros Estados, maximizando los efectos de políticas coercitivas y, por supuesto, no aceptando limitaciones para la propia soberanía cuyo alcance y verificación no esté en sus propias manos”.²⁵

Tampoco podemos aceptar las críticas de quienes han pedido la disolución de Naciones Unidas por su falta de inoperancia. El problema del terrorismo, como el de la contaminación del planeta o el enjuiciamiento para todos aquellos que cometen crímenes contra la humanidad, son aspectos que necesitan una respuesta global y unas Naciones Unidas plenamente democráticas y no sujetas a las superpotencias. El reto no es demandar su desaparición, sino las reformas necesarias que hagan de Naciones Unidas una auténtica organización internacional más democrática, más operativa —y por lo tanto con más medios— y adaptada a la nueva situación internacional.²⁶ Es importante recordar cómo este principio entronca con uno de los componentes más clásicos en la historia de la educación para la paz, la educación para la comprensión internacional.²⁷

9. Ofrecer alternativas y facilitar el conocimiento de las conquistas sociales

Al mismo tiempo que no podemos ocultar la realidad de que vivimos en un mundo desigual, injusto y violento,²⁸ es necesario ofrecer alternativas y dar a conocer los

previstas para el futuro. También es de señalar la no ratificación de China y Rusia, entre otros.

²⁵ A. Remiro Brotóns, “Estados Unidos no se pregunta en qué se equivoca”, *Política exterior*, enero-febrero de 2002, Vol. XVI, Nº 85.

²⁶ Un documento breve que puede ser utilizado en las aulas sobre ello es: Alberto Piris, “Proposta para a reforma das Nacións Unidas nos ámbitos da paz e da seguridade internacionais”, en Xesús R. Jares (coord.), *Construír a paz. Cultura para a paz*, Xerais, Vigo, 1996. Una versión semejante en castellano: *Propuestas para la reforma de las Naciones Unidas. Informes*, CIP-SIP, Madrid, 1994, Nº 7.

²⁷ Xesús R. Jares, *Educación para la paz. Su teoría y su práctica*, Popular, Madrid, 1999a; UNESCO, *La educación para la cooperación internacional y la paz en la escuela primaria*, UNESCO, París, 1983.

²⁸ Datos para corroborar esta afirmación podemos obtenerlos de los informes anuales

logros de las conquistas sociales de la humanidad. Por ejemplo, si bien el esclavismo persiste en el siglo XXI no se puede olvidar el enorme avance que ha hecho la humanidad en este terreno; si bien existe sexismo y violencia contra las mujeres, tampoco se puede obviar la historia y los avances de la lucha feminista; si bien existe violencia e intolerancia, tampoco es menos cierto que se dan espacios de libertad y de ternura.

Además, el sistema educativo debe ponerse al día y presentar las diferentes propuestas para solucionar los problemas apuntados y someterlos a escrutinio de los estudiantes, a la vez que se les debe dar la oportunidad para que sean protagonistas de posibles nuevas alternativas. Entre las propuestas que podemos presentar están la aplicación de la tasa Tobin, la abolición de la deuda externa, el fortalecimiento de la democracia y la sujeción de la economía a la política, la reducción de los gastos militares en beneficio de los gastos sociales, el cumplimiento del 0,7% para ayuda al desarrollo, la eliminación de los paraísos fiscales, las consecuencias sociales y económicas de la globalización neoliberal, entre otros.

10. Educar en el valor del compromiso y la esperanza, frente a la indiferencia y el derrotismo

Desde los años noventa los ideólogos del conservadurismo están desarrollando un fuerte discurso sobre aspectos como el fin de la historia la única sociedad posible. Como ha señalado Sami Naïr, “el pensamiento crítico, la esperanza, la simple idea de que otro mundo es posible, han sido duramente atacadas en los últimos años en que cualquier propuesta se ve tildada de “irrealizable” por el conformismo del pensamiento único”.²⁹ Ejemplos de ello existen en todos los campos del saber. Así, en una entrevista publicada en *El País* y otros periódicos europeos el 10 de febrero de 2002, el historiador británico Paul Kennedy, docente en la Universidad estadounidense de Yale, propugna que el mundo tiene que aprender a convivir con el EEUU imperial, y termina la entrevista con estas ilustrativas palabras: “En cierto modo, la cuestión radica en la mera grandeza de EEUU más que en su arbitrariedad. Es como si se tratase de una gran jaula de monos, en la que conviven simios de diferentes tamaños y en una esquina se acurruca un gorila de 230 kilos. Los otros monos más pequeños se tienen que conformar. Podríamos inclinarnos por el concepto de que hay que hacer pensar al gorila en la verdad, aunque sea sacrificando su destino. Si un día crece y ve que un mono pequeño tiene unos buenos plátanos, los cogerá, y nadie podrá impedirlo”.

Al margen de la desafortunada comparación, no tanto por compararnos con simios sino por equiparar el mundo a una jaula, el pensamiento del citado historiador es un ejemplo genuino y actual de la ideología de la resignación, de la sumisión al poder se ejerza como se ejerza. Por ello, el profesor concluye que, debido

del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o de Amnistía Internacional, entre otros.

²⁹ Sami Naïr, “Después de Porto Alegre”, *El País*, 12 de febrero de 2002.

al poder de EEUU, sin precedentes en la historia, —afirmación que desde el punto de vista histórico no discutimos, aunque no deje de ser discutible—, nada podemos hacer ante el gorila aunque nos coja los plátanos de nuestro huerto.

Desde la pedagogía crítica se viene insistiendo en el valor de la esperanza³⁰ y en la necesidad de “recuperar el valor de la utopía como motor de transformación de la sociedad”,³¹ frente a la generalización de la desidia, la pasividad, la indiferencia, el fatalismo, la resignación. Como ha señalado José Gimeno,³² sin utopía no hay educación. Igualmente, desde el modelo crítico-conflictual-no violento de la educación para la paz³³ se ha insistido en el papel de la educación, junto al compromiso social y la acción política, como recursos del ser humano para transformar aquellas situaciones injustas y perversas, por muy difíciles que sean. De aquí el papel otorgado a la acción. Tanto en el plano educativo como en el social, no debemos quedar indiferentes ante este tipo de situaciones que significan vulneración de los derechos humanos por muy enfrente que tengamos a los poderes políticos, mediáticos, económicos, etc. Parafraseando al poeta palestino Mahmud Darwish, debemos seguir el curso del canto aunque escaseen las rosas.³⁴

³⁰ Paulo Freire, *Pedagogía de la esperanza*, Siglo XXI, México DF, 1993.

³¹ Jurjo Torres, *Educación en tiempos de liberalismo*, Morata, Madrid, 2001.

³² José Gimeno Sacristán, “La educación que tenemos, la educación que queremos”, en Francisco Imbernón (coord.), *La educación en el siglo XXI. Los retos del futuro inmediato*, Barcelona, Graó, 1999.

³³ Xesús Jares, *Op. Cit.*, 1999a.

³⁴ Mahmud Darwish, *Menos rosas*, Hisperión, Madrid, 2001.

Lecturas sobre educación

LOS VALORES EN LA EDUCACIÓN

Pedro Ortega Ruiz

Ramón Mínguez Vallejos

Ariel Educación, Barcelona, 2001, 256 páginas.

Los valores, como creencias básicas a través de las cuales interpretamos el mundo y damos significado a los acontecimientos y a nuestra propia existencia, se manifiestan y expresan de forma distinta dependiendo del contexto cultural o del momento histórico.

Nuestra sociedad actual, en la que tanto se habla de crisis de valores, parece demandar un nuevo enfoque en la educación de valores básicos para la convivencia. A nivel teórico, e incluso institucional, se ha tomado conciencia de la importancia de una educación basada en los valores que inspiran los derechos fundamentales. Pero, en la práctica, se constata la necesidad de una mejora de la misma. Desarrollar una pedagogía efectiva de los valores no es una tarea fácil. Ello exige la colaboración entre la escuela, la familia y la sociedad. Por ello este libro resulta de interés no sólo para educadores, sino para cualquier persona del ámbito escolar interesada en el tema de los valores en la educación.

La creciente preocupación por determinados fenómenos sociales como la delincuencia, la violencia, la xenofobia, la intolerancia o el reparto injusto de la riqueza; la necesidad de potenciar el desarrollo de todas las dimensiones de la persona a la que apunta la investigación pedagógica actual; y el hecho de que a partir de la Ley

Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), la actividad educativa debe estar orientada a la realización de los valores de la tolerancia, justicia, libertad, diálogo, igualdad, paz, respeto al medio ambiente, entre otros es decir, los valores socio-morales que se consideran indispensables para la formación integral de la persona, como individuo y como ciudadano; son algunas de las razones de Pedro Ortega y Ramón Mínguez para incluir con urgencia los valores en el currículo escolar y no para eliminarlos, como se está discutiendo actualmente.

Los valores en la educación se divide en ocho capítulos. En la introducción, se da respuesta a las preguntas ¿qué son los valores? y ¿porqué educar en valores?, y se afirma que la educación en este sentido requiere un compromiso del centro, una formación adecuada del profesorado, la integración de los valores en el currículo y la necesaria cooperación de la familia. Cada uno de los capítulos restantes está dedicado a uno de los valores siguientes: “Diálogo”, “Tolerancia”, “Libertad”, “Solidaridad”, “Justicia”, “El valor de la Naturaleza” y “Paz”. A su vez, cada capítulo se estructura en dos partes bien diferenciadas y complementarias: una, dedicada a la reflexión teórica del valor de que se trate y otra, dedicada a la

práctica del valor, en la que a partir de una selección de textos se invita al análisis y al debate y se ofrecen conclusiones, sugerencias y propuestas para la acción, siempre con el carácter de propuestas abiertas u orientaciones. El libro se muestra así como una combinación equilibrada entre teoría de los valores y técnica o procedimiento de enseñanza de los mismos. La reflexión a la luz de las distintas interpretaciones filosóficas de los valores antes mencionados, tiene la finalidad de elaborar una pedagogía adecuada, teniendo siempre en cuenta una propuesta educativa respetuosa de los distintos modos de entender al hombre y al mundo. Es decir, una propuesta que busque el mejor modo de preparar a los individuos para vivir en una sociedad plural en la que existan unos valores mínimos compartidos.

Por otro lado, la práctica del valor aparece indefectiblemente ligada a la educación en los mismos. Los valores “se aprenden en y desde la experiencia. Se hacen nuestros cuando los consideramos formas valiosas de vida, cuando juzgamos que merece la pena comprometerse con ellos. No hay educación en valores sino hay, por una parte, propuesta, exposición “experiencial” del valor; por otra, opción libre y compromiso con el mismo” afirman los autores.

En todos los capítulos de libro se refleja la idea de que los valores no se transmiten por imposición. Como decía Sheller “los valores no se imponen, se contagian”. Estos pueden ser realizados, descubiertos e incorporados por la persona, y la mejor pedagogía de los valores es verlos reflejados en la conducta de las personas que nos rodean y que encarnen un

determinado valor de una forma congruente, auténtica y comprometida. *Los valores en la educación* intenta huir de las elaboraciones intelectuales alejadas de la realidad y rescatar la práctica cotidiana del valor, es decir, su descubrimiento y apropiación a partir de la experiencia.

Educación en la tolerancia exige, además de transmitir el concepto o idea de la misma, que se perciban y ofrezcan comportamientos de personas tolerantes, que se descubra el valor de la tolerancia en uno mismo y la apropiación del mismo por su descubrimiento a través de la experiencia. Identificar un problema de convivencia en el aula, buscar entre todos soluciones posibles y lograr el compromiso de los alumnos en acciones concretas para su solución, puede ser una práctica del valor de la tolerancia desde la experiencia cotidiana. Instar a los alumnos a participar en asuntos públicos del barrio o de la ciudad que impliquen la aceptación del pluralismo, denunciar situaciones de marginación que están produciendo injusticias en el entorno o promover la adquisición de productos de comercio justo pueden contribuir a la experiencia del valor de la solidaridad. Estos son algunos ejemplos de las numerosas propuestas prácticas que contiene el libro.

Por último, es de destacar que los autores defienden una propuesta de enseñanza de los valores que difiere de la actual normativa (LOGSE), que los considera temas transversales que deben ser tratados dentro de los contenidos disciplinares y en este sentido atravesar todo el currículo. Entienden que la enseñanza del valor no depende tanto de su

vinculación a unos contenidos concretos como de las estructuras relacionales del aula, del estilo de enseñanza y del clima moral de la clase.

En definitiva, *Los valores en la educación* supone un intento de clarificar el discurso teórico sobre los valores y a la vez ofrecer una práctica o pedagogía distinta de los mismos. Un intento de contribuir, en palabras de los autores “a la mejor formación de las jóvenes generaciones y a la construcción de una sociedad más justa, libre y solidaria”.

La lectura de este libro puede complementarse con *Informe educativo 2002*, de la Fundación

Hogar del Empleado (Grupo Santillana de Ediciones, Madrid, 2002), dedicado a la calidad y, además de hacer el correspondiente análisis político y ofrecer un estado actual del sistema educativo a través de los indicadores más relevantes, incide en los aspectos básicos que determinan la calidad de la enseñanza y aborda en diversos apartados el tema de la educación en valores.

M^a Antonia García Marín
Master en Relaciones
Internacionales. Centro de
Investigación para la Paz (CIP)

**Situación de refugiados
palestinos en Yenín**

133

HUMAN RIGHTS WATCH

Situación de refugiados palestinos en Yenín

Un equipo de tres investigadores de Human Rights Watch pasó siete días en Yenín, del 19 al 28 de abril de 2002, para confeccionar este informe. El equipo entrevistó a más de un centenar de residentes del campo de refugiados, recogiendo testimonios detallados de las víctimas y testigos, contrastándolos y corroborándolos cuidadosamente con otras fuentes. Los investigadores de Human Rights Watch también recolectaron información de otros testigos directos de los hechos acontecidos en Yenín, entre ellos cooperantes internacionales, personal médico y funcionarios locales. Además, la investigación se nutre de fuentes de información pública, incluyendo fuentes gubernamentales israelíes. Pero las Fuerzas Armadas israelíes no han accedido a las reiteradas peticiones de información por parte de Human Rights Watch sobre sus incursiones militares en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Aunque extensa, la investigación de Human Rights Watch no pretende ser exhaustiva. Quedan pendientes posteriores pesquisas: especialmente cuando se inicien las excavaciones, y también si Israel accede finalmente a que se entreviste a soldados involucrados en esta operación.

El 3 de abril de 2002 las Fuerzas Armadas israelíes lanzaron una operación militar de gran calibre en el campo de refugiados de Yenín, hogar de más de 14.000 palestinos en su gran mayoría civiles. El objetivo declarado por los israelíes era capturar o matar militantes palestinos responsables de los atentados suicidas y de otros ataques que han acabado con la vida de más de 70 israelíes y otros civiles desde marzo de 2002. La incursión del Ejército israelí en Yenín ha supuesto una escalada bélica sin precedentes con respecto a otras operaciones militares organizadas por el mismo, desde que en septiembre de 2000 comenzara el actual conflicto palestino-israelí.

Human Rights Watch es una organización de defensa de los derechos humanos con sedes en EEUU y Europa

Traducción: Eric Jalaín Fernández

La presencia de militantes palestinos armados dentro del campo de refugiados de Yenín, y los preparativos realizados por estos para repeler la incursión israelí, no excusa a su Ejército de la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario tomando todas las precauciones posibles para evitar el daño a los civiles. Israel tiene la obligación legal de asegurar que sus ataques a objetivos militares legítimos no cause daños desproporcionados a la población civil. Desgraciadamente, estas obligaciones no fueron respetadas. La investigación de Human Rights Watch demuestra que, durante su incursión en el campo de refugiados de Yenín, las fuerzas israelíes cometieron serias violaciones del Derecho Internacional Humanitario, alcanzando algunas de ellas *prima facie* el rango de crímenes de guerra.

Debido a la alta densidad urbana del campo de refugiados, combatientes y civiles se hallaban prácticamente entremezclados. Residentes civiles del campo relatan cómo sufrieron durante días un fuego continuo de misiles disparados por helicópteros contra sus casas. Algunos se vieron obligados a huir de casa en casa en busca de refugio, mientras otros estaban atrapados por los combates. Amenazados por un toque de queda que el Ejército israelí mantuvo por medios letales utilizando francotiradores, muchos civiles fueron incapaces de encontrar un lugar seguro. Human Rights Watch ha documentado casos en los que los soldados convirtieron hogares en posiciones militares, confinando a sus habitantes en una habitación. En otros casos, soldados israelíes obligaron a civiles, que intentaban huir, a volver a sus casas.

A pesar de la densidad de la población, el Ejército israelí tiene la obligación legal de distinguir entre habitantes civiles y combatientes. Sin embargo, en ocasiones, sus acciones fueron indiscriminadas, sin hacer distinciones, especialmente la mañana del 6 de abril, cuando el lanzamiento de misiles desde helicópteros sorprendió a numerosos civiles mientras dormían. Un mujer murió por disparos desde un helicóptero, y, en otra parte de la ciudad, una niña de cuatro años resultó herida mientras dormía, cuando un misil alcanzó su casa. En ambos casos se trataba de edificios exclusivamente civiles, en cuya proximidad no había combatientes.

El Ejército israelí utilizó *bulldozeres* blindados para demoler casas de residentes con el supuesto objetivo de abrir vías entre las estrechas y tortuosas calles de Yenín (algunas de las cuales contenían bombas trampa), y permitir así el paso de sus tanques y armamento pesado hacia el interior del campo. Pero la demolición se extendió más allá del simple propósito de facilitar el acceso a los soldados, especialmente en el distrito de Hawashin, resultando sobradamente desproporcionada para los objetivos militares declarados.

La devastación causada en Yenín por los tanques y los *bulldozer* ha impresionado a numerosos observadores. Por lo menos 140 edificios (en su mayor parte bloques multifamiliares) han sido totalmente destruidos, y más de 200 han sufrido considerables daños hasta quedar inhabitables o altamente inseguros. Se estima que 4000 personas (más de un cuarto de la población de la ciudad) se han quedado sin hogar debido a la incursión. Las infraestructuras de agua, alcantarillado y red eléctrica también han sufrido graves daños. Más de un centenar de los 140 edificios destruidos se hallaban en el distrito de Hawashin, donde el 9 de abril una emboscada de militantes palestinos mató a 13 soldados israelíes. A diferencia de

otros sitios del campo, donde los *bulldozer* se dedicaron a derribar para ampliar las calles, aquí el Ejército israelí arrasó todo el barrio. Una de las prioridades de la misión especial de la ONU debería ser establecer hasta qué punto la destrucción de Hawashin superó tan ampliamente las necesidades militares como para ser considerada un exceso bélico, o incluso un crimen de guerra.

La destrucción resultó aún más dañina debido al defectuoso aviso a los residentes civiles. Aunque las Fuerzas Armadas israelíes lanzaron varias advertencias, muchos civiles conocieron la demolición de su casa cuando los *bulldozer* comenzaban a aplastarlas. Jamal Fayid, un parálítico de 37 años, murió cuando su vivienda fue demolida con él en su interior por el Ejército, que no concedió el tiempo suficiente a sus familiares para sacarlo de ahí. Muhammad Abu Saba'a, de 65 años, tuvo que implorarle a un operador de un *bulldozer* para que detuviera la máquina pues su familia aún se hallaba dentro de la casa. Cuando regresaba a su semi-derruido hogar, un soldado israelí lo mató de un disparo.

Human Rights Watch puede confirmar que las operaciones de las Fuerzas Armadas israelíes en Yenín mataron por lo menos a 52 palestinos. Esta cifra puede aumentar cuando comiencen los trabajos de rescate e investigación, y cuando los familiares detenidos por Israel sean localizados o liberados. Atendiendo a las escasas denuncias de desaparecidos, Human Rights Watch no prevé que esta cifra aumente sustancialmente. Mínimo 22 de los muertos confirmados son civiles, incluyendo niños, incapacitados físicos y ancianos. Al menos 27 son sospechosos de haber sido combatientes palestinos pertenecientes a movimientos como *Jihad Islámica*, *Hamas* y las Brigadas Mártires de *al-Aqsa*. Algunos eran miembros de las Fuerzas de Seguridad Nacional de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), o de otros sectores de la policía o fuerzas de seguridad de la ANP. Human Rights Watch no ha podido determinar de forma concluyente el estado de los tres cadáveres restantes de los casos documentados.

La organización de derechos humanos no ha encontrado evidencias que apoyen las denuncias de masacres o de ejecuciones extrajudiciales masivas realizadas por el Ejército israelí en el campo de refugiados de Yenín. Sin embargo, muchas de las muertes de civiles documentadas por Human Rights Watch corresponden a asesinatos ilegales y deliberados llevados a cabo por el Ejército israelí. Muchas muertes se podrían haber evitado si éste hubiera tomado las precauciones apropiadas para proteger la vida de los civiles durante su operación militar, como exige el Derecho Internacional Humanitario. Entre los asesinatos de civiles destacan los siguientes casos: el de Kamal Zgheir, de 57 años y en silla de ruedas, que el 10 de abril fue disparado y atropellado por un tanque en una carretera principal fuera de la ciudad, a pesar de exhibir una bandera blanca atada a su silla; Mariam Wishahi, de 58 años, resultó muerta en su casa el 6 de abril por un misil, justo horas después de que su hijo fuera disparado en la calle a pesar de que iba desarmado; Jamal Fayid, de 37 años y parálítico, fue aplastado entre los escombros de su casa el 7 de abril, a pesar de los ruegos de su familia para que les permitiera sacarlo de allí; y Faris Zaiban, de 14 años, que fue abatido de un disparo procedente de un coche blindado israelí cuando se dirigía a una tienda de comestibles, el 11 de abril, en un momento en el que el toque de queda había sido levantado temporalmente.

*Muchas
muertes se
podrían
haber evitado
si el Ejército
israelí
hubiera
tomado las
precauciones
para proteger
la vida de los
civiles como
exige el DIH*

Los soldados israelíes se sirvieron de civiles palestinos para protegerse del peligro, usándolos como “escudos humanos” y forzándoles a realizar trabajos peligrosos

Algunos de los hechos documentados por Human Rights Watch corresponden a ejecuciones sumarias, un claro crimen de guerra. Este es el caso de Jamal al-Sabagh, que hallándose bajo control del Ejército israelí, el 6 de abril, resultó muerto de un disparo mientras se desnudaba obedeciendo órdenes. En al menos una ocasión los soldados israelíes mataron ilegalmente a un palestino herido: Munthir al-Haj, que se hallaba desarmado, con los brazos rotos y no estaba participando en los combates.

A lo largo de toda la incursión, los soldados israelíes se sirvieron de civiles palestinos para protegerse del peligro, usándolos como “escudos humanos” y forzándoles a realizar trabajos peligrosos. Human Rights Watch ha recogido numerosos testimonios, diversos y creíbles, de que los soldados israelíes colocaban a palestinos en posiciones vulnerables para protegerse de disparos o ataques. Forzaban a estos palestinos a permanecer durante un tiempo extenso frente a sus posiciones más expuestas, o les obligaban a acompañarles según iban entrando en las casas. Kamal Tawalbi, padre de catorce hijos, ha relatado cómo los soldados le obligaron a él y a su hijo de 14 años a permanecer durante tres horas en la línea de fuego, usando sus hombros y los de su hijo como apoyo para disparar los fusiles. Los soldados colocaron también a una mujer de 65 años encima de un tejado, frente a una posición israelí, en medio de un ataque con helicópteros.

El Ejército también forzaba a palestinos, a veces a punta de pistola, a acompañar a las tropas israelíes durante sus registros a domicilios, usándoles para entrar en las casas, abrir puertas y realizar otras labores potencialmente peligrosas. Este uso coercitivo de la población civil fue una práctica generalizada en Yenín, según han relatado los residentes a Human Rights Watch. En casi todas y cada una de las entradas de soldados israelíes en viviendas, iban acompañados por civiles palestinos coaccionados. El uso coactivo de civiles durante operaciones militares es una seria violación de las leyes de guerra, en la medida en que expone a la población a riesgos directos de muerte o de graves heridas.

Human Rights Watch no ha encontrado aún evidencia alguna de que los combatientes palestinos hayan usado escudos humanos durante el ataque. Pero sí han puesto en peligro a los civiles palestinos del campo al utilizar éste como base para planear y lanzar sus ataques, han hecho uso de tácticas peligrosas como la colocación de artilugios explosivos improvisados en el interior del campo y se han entremezclado con la población civil durante el conflicto armado, e incluso, en algunos casos, para evitar su captura por fuerzas israelíes.

Durante los 11 días de la “Operación Muro Protector”, del 4 al 15 de abril, el Ejército israelí bloqueó la entrada al campo de refugiados de Yenín a vehículos de emergencia médica y a su personal. Durante este periodo los combatientes y civiles heridos en el campo, así como los enfermos, no tuvieron acceso alguno a asistencia médica de emergencia. El funcionamiento de las ambulancias y de los hospitales de la ciudad quedó rigurosamente restringido, y las ambulancias fueron repetidas veces tiroteadas por soldados. Farwa Jammal, una enfermera vestida con uniforme, fue muerta por disparos del Ejército israelí cuando estaba asistiendo

a un civil herido. Hay por lo menos dos casos registrados de civiles heridos que murieron por falta de asistencia médica. Atacar directamente a personal sanitario, y negar a los heridos el acceso a cuidados médicos constituyen serias violaciones de las leyes de guerra.

Durante el periodo en el que el Ejército israelí controlaba directamente el campo de Yenín, las autoridades israelíes estaban obligadas por el Derecho Internacional Humanitario a tomar todas las precauciones factibles para proteger a los civiles de los peligros derivados de las hostilidades, así como a asegurar en la medida de lo posible el acceso de la población a la comida y a instalaciones médicas. En la práctica, el Ejército israelí impidió a organizaciones humanitarias, entre ellas al Comité Internacional de la Media Luna Roja, el acceso al campo y a sus habitantes, a pesar de las graves necesidades humanitarias. Este bloqueo se prolongó entre el 11 y el 15 de abril, cuando la mayoría de los palestinos armados ya se habían rendido. La investigación de Human Rights Watch no ha encontrado evidencias que apoyen las acusaciones de que el Ejército israelí haya retirado cuerpos del campo de refugiados para enterrarlos en fosas comunes.

Cada caso expuesto en este informe justifica la necesidad de una investigación adicional completa, transparente e imparcial, cuyos resultados se hagan públicos. Aquellos quebrantamientos que resulten verificados deberán conducir al procesamiento de sus responsables. Hay fuertes evidencias *prima facie* de que, en los casos expuestos, miembros de las Fuerzas Armadas israelíes han cometido graves violaciones de las convenciones de Ginebra o incluso crímenes de guerra. Tales casos merecen investigaciones criminales específicas con vistas a verificarlos y a procesar a sus responsables. Israel tiene la principal obligación de acometer tales investigaciones, pero la comunidad internacional también es responsable de asegurar que dichas investigaciones se lleven efectivamente a cabo.

Recomendaciones

Al Gobierno de Israel:

- Llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario documentadas en este informe, hacer públicos los resultados, y procesar a cualquiera que haya sido encontrado responsable. Si se localizan evidencias de crímenes de guerra, instituir inmediatamente los procesamientos criminales.
- Declarar inequívocamente que las fuerzas de seguridad israelíes respetarán y acatarán sus obligaciones relativas al Derecho Internacional Humanitario, y apoyar en cualquier circunstancia el principio de inmunidad de los civiles tomando todas las precauciones factibles para protegerlos, discriminando entre objetivos militares y población civil, y asegurando el acceso a asistencia médica y humanitaria.

- Tomar medidas inmediatas para poner término a cualquier uso excesivo, indiscriminado y desproporcionado de la fuerza, por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, que pueda poner en peligro a civiles.
- Tomar medidas inmediatas para finalizar la práctica de usar a los civiles palestinos como escudos humanos durante las operaciones del Ejército israelí, y procesar por la vía disciplinaria o criminal a las personas halladas responsables de haber ordenado, permitido o llevado a cabo dichas prácticas.
- Parar inmediatamente el uso coercitivo de civiles para facilitar las operaciones militares del Ejército israelí. Ordenar a todo el personal militar el cese de estas prácticas, asegurar la transmisión de esta orden a lo largo de toda la cadena de mando militar, y procesar a todas las personas responsables de haber ordenado, permitido o llevado a cabo estas actuaciones.
- Parar inmediatamente la práctica de usar fuerza letal para imponer los toques de queda.
- Asegurar que la población palestina tenga acceso a un nivel adecuado en sus condiciones sanitarias, de alimentación y de asistencia médica, así como a otros bienes y servicios esenciales para la vida civil.
- Asegurar que el personal médico y las ambulancias puedan llevar a cabo su labor, y que los pacientes tengan acceso a las instalaciones médico-sanitarias, permitiendo que ambos grupos se puedan desplazar con libertad. Cualquier restricción a estos desplazamientos no debe ser excesiva ni en impacto ni en duración, debe ser revisada regularmente, y sólo debe ser impuesta cuando y en la medida en que sea absolutamente necesario.
- Cooperar plenamente con la misión especial establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU para investigar los acontecimientos de Yenín.
- Facilitar el despliegue inmediato de observadores internacionales en Cisjordania y en la Franja de Gaza con el mandato de controlar, verificar e informar públicamente sobre el cumplimiento por todas las partes implicadas de los estándares del Derecho Internacional Humanitario.

A la Autoridad Nacional Palestina y a los grupos armados palestinos:

- Declarar inequívocamente que las fuerzas de seguridad palestinas y los miembros de grupos armados respetarán y acatarán los principios del Derecho Internacional Humanitario, como el de apoyar en cualquier circunstancia el principio de inmunidad de los civiles, no convirtiéndolos en objetivos de atentados bomba suicidas o de cualquier otro tipo de ataque, ya sea en las colonias o en el mismo Israel; discriminando entre objetivos militares y población civil, y asegurando el acceso a asistencia médica y humanitaria.
- Investigar todas las acciones y políticas que violen estos principios y normas, hacer públicos los resultados, procesar a las personas halladas

- responsables de haber violado estos principios, y castigar o tomar medidas disciplinarias acordes con la gravedad de estas violaciones.
- Cooperar plenamente con la misión especial establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU para investigar los acontecimientos de Yenín.

Al Gobierno de EEUU:

- Requerir al Gobierno de Israel mediante comunicaciones, tanto públicas como privadas, para que tome inmediatamente los pasos necesarios para implementar las recomendaciones antes expuestas.
- Apoyar los esfuerzos por que las partes en conflicto respeten los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Cisjordania y en la Franja de Gaza, y por el establecimiento de una presencia internacional allí cuyas responsabilidades incluyan el control, verificación e información pública y regular sobre el cumplimiento de todas las partes del Derecho Internacional Humanitario, así como proveer expertos para tal misión internacional.
- Considerar que las violaciones serias y sistemáticas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario por cualquiera de las partes en conflicto requieren remedio inmediato, y asegurarse que los acuerdos resultantes de las negociaciones directas entre las partes no se antepongan al respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
- Buscar que Israel se comprometa por escrito a que el armamento de origen estadounidense, incluyendo los helicópteros armados Apache y Cobra, los *bulldozer* blindados D-9, los misiles anti-tanque TOW, así como otras armas, no sea usado para cometer violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Cisjordania y en la Franja de Gaza.
- Llevar a cabo un exhaustivo informe, y hacer públicos sus resultados, sobre el uso israelí de armamento estadounidense en Cisjordania y en la Franja de Gaza, y renovar tal informe cada seis meses.
- Restringir el uso por parte de Israel en Cisjordania y en la Franja de Gaza del armamento estadounidense que se descubra que está siendo utilizado para cometer violaciones serias y sistemáticas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
- Informar al Gobierno de Israel de que la continuidad de la asistencia militar estadounidense dependerá de que tome medidas claras y controlables para eliminar las violaciones serias y sistemáticas por parte de sus fuerzas de seguridad de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Estas medidas deben incluir la investigación de las acusaciones de violaciones serias y sistemáticas, haciendo públicos los resultados y procesando a las personas halladas responsables.

- Controlar e informar públicamente sobre el fin de ciertas donaciones de origen estadounidense para asegurar que tales recursos no sirvan para apoyar a agencias de la Autoridad Nacional Palestina o a grupos palestinos responsables de violaciones serias y sistemáticas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

A los miembros de la Unión Europea:

- Considerar que las violaciones serias y sistemáticas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario por cualquiera de las partes en conflicto requieren remedio inmediato, y asegurarse que los acuerdos resultantes de las negociaciones directas entre las partes no se antepongan al respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
- Desarrollar cotas de mínimos, y hacerlas públicas, para forzar el cumplimiento por parte del Gobierno de Israel de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, como viene fijado en el artículo 2 del Acuerdo de Asociación Euro-Mediterránea entre la UE, sus Estados miembros e Israel.
- Desarrollar cotas de mínimos, y hacerlas públicas, para forzar el cumplimiento por parte de la Autoridad Nacional Palestina de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, como viene fijado en el artículo 2 del Acuerdo de Asociación Interina sobre comercio y cooperación entre la UE, sus Estados miembros y la Autoridad Nacional Palestina.
- Apoyar los esfuerzos por que las partes en conflicto respeten los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Cisjordania y en la Franja de Gaza, y por el establecimiento de una presencia internacional allí cuyas responsabilidades incluyan el control, verificación e información pública y regular sobre el cumplimiento de todas las partes del Derecho Internacional Humanitario, así como proveer expertos para tal misión internacional.
- Buscar que Israel se comprometa por escrito a que el armamento procedente de algún Estado miembro de la UE no sea usado para cometer violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Cisjordania y en la Franja de Gaza.
- Llevar a cabo un exhaustivo informe, y hacer públicos sus resultados, sobre el uso israelí de armamento procedente de algún Estado miembro de la UE, y renovar tal informe cada seis meses.
- Implementar el Código Europeo de Conducta en Exportaciones de Armas, y restringir la transferencia a Israel de armas que se descubra que están siendo usadas para cometer violaciones serias y sistemáticas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Cisjordania y la Franja de Gaza.

Al Consejo de Seguridad y al Secretariado de Naciones Unidas:

- Asegurarse que el equipo de verificación designado por el Secretariado General de Naciones Unidas, y respaldado por el Consejo de Seguridad en la resolución 1405 para investigar la situación en el campo de refugiados de Yenín, priorice los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y que a la hora de confeccionar su informe tenga en cuenta todos los casos fiables y verificables de violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
- Hacer público de la manera oportuna el informe del equipo de verificación.
- Establecer sobre una base urgente una presencia internacional permanente en Cisjordania y la Franja de Gaza para controlar e informar públicamente y con regularidad sobre el cumplimiento por todas las partes de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

A la comunidad internacional:

- Pasar inmediatamente a la acción, de manera individual y conjunta, para asegurar el respeto de las disposiciones de la Cuarta Convención de Ginebra sobre la Protección de las Personas Civiles en Tiempos de Guerra, así como el cumplimiento por parte palestina de la legislación que prohíbe atacar a civiles.
- Tomar medidas para preparar urgentemente, de acuerdo con el párrafo 11 de la Declaración de la Conferencia de Alto Compromiso de las Partes con la Cuarta Convención de Ginebra del 5 de diciembre de 2001, "el despliegue de observadores independientes e imparciales para controlar" el cumplimiento israelí y palestino de la Cuarta Convención de Ginebra, y otras disposiciones del Derecho Internacional Humanitario.

Medios de Comunicación

Comunicarse en un mundo globalizado 145

JEAN-PAUL MARTHOZ

Comunicarse en un mundo globalizado

*La tentación de la euforia de la comunicación se presenta tanto en los círculos que trabajan con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, como en los medios ciudadanos, en el marco de esta sociedad civil internacional que parece ser hoy día la principal beneficiada de la "revolución de la información". Este texto es un extracto del libro *El medio ambiente en la sociedad de la globalización: una visión social y educativa* coordinado por María Novo, MEC, Santander, 2002.*

Según el redactor jefe de *Le Monde diplomatique*, Alain Gresh, "gracias a los medios de comunicación modernos, y especialmente a internet, las redes mundiales pueden fácilmente crearse, movilizar, actuar". La experiencia de Human Rights Watch (HRW) así lo confirma: las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) han potenciado las capacidades de las organizaciones ciudadanas. La campaña para la eliminación de las minas anti-persona, difundida en los años noventa, nunca habría logrado un éxito tan rápido ni desembocado sobre el Tratado de Ottawa si no hubiera contado con el correo electrónico e internet. Vinculando a miles de grupos locales, regionales e internacionales, internet ha hecho fracasar los largos procedimientos diplomáticos, acortado las líneas de comunicación, comprimido el tiempo y creado una masa crítica que ha doblegado a los gobiernos. Sobre todo, ha permitido, gracias a esta extraordinaria ágora, descubrir aliados inesperados, encontrar información inédita y esquivar las fuentes clásicas e institucionalizadas de la protesta.

La campaña antiglobalización también utiliza las tecnologías que llevan esta misma globalización. Ningún gobierno puede bloquear el acceso de sus ciudadanos a una información independiente. Puede reglamentar la venta de módems, perseguir las antenas parabólicas, entregar a un operador estatal el monopolio de acceso a internet, interferir las radios internacionales, pero la información disidente entra y sale con bastante facilidad.

La indigestión informativa

El mundo de hoy está atiborrado de información. El número de mensajes que recibe un ciudadano en los países del Norte ha sido multiplicado por seis en el curso de

Jean-Paul Marthoz
es director de
comunicación de
Human Rights
Watch en Europa

los últimos treinta años.¹ Más de 400 millones de personas utilizan internet para informarse, distraerse, comerciar y comunicarse. Aunque existe un desequilibrio digital entre Norte y Sur, o entre los medios socioculturales de cada sociedad del Norte y del Sur, internet se expande como una telaraña sobre todo el mundo. La isla de Manhattan tiene más líneas telefónicas que toda África subsahariana. Pero esta cifra no impide que el continente africano se comunique. A raíz de la publicación del reciente informe de HRW sobre Costa de Marfil, elaborado a principios de septiembre de 2001, centenares de internautas africanos se conectaron inmediatamente a la página web de la organización y obtenido el documento.

Las redes de comunicación se complican y entremezclan convirtiendo en inútiles las viejas ideas sobre los flujos Norte-Sur. Esta avalancha se percibe en los países del Norte, donde las diásporas disponen ahora de un acceso directo a sus medios nacionales o han desarrollado, en los países de acogida, sus propios sistemas mediáticos. En EEUU se registran más de 600 televisiones étnicas: la más grande, Univisión, cubre el conjunto de la población hispana estadounidense y ha subido al quinto puesto de las cadenas más importantes del país. Una de las más pequeñas se dirige únicamente a los inmigrantes rusos radicados en Brooklyn (Nueva York).

La mundialización de la información no significa su uniformización. Según Andrea Semprini, “no se puede considerar a los países y culturas como receptores pasivos, presas de un proceso de mundialización único y llegado de ‘afuera’ (...) En este sentido, hace falta distinguir entre mundialización de la difusión de información y mundialización de su recepción (...) Para que una información realmente mundializada pueda existir, hace falta que la homogeneidad del discurso de emisión encuentre una homogeneidad paralela de los sistemas de recepción”.²

Los límites

¿Qué ha sido más importante en este vagabundeo de la libertad de la información, la técnica o el relativo relajamiento de los servicios de seguridad?, ¿la tecnología o la pérdida de control de las autoridades sobre su propia sociedad?

Actualmente, en el Magreb, las poblaciones sometidas a la indigesta propaganda de las televisiones oficiales pueden, gracias a las antenas parabólicas, no sólo ver la televisión francesa, que habla muy poco de ellas, sino también las cadenas árabes como MBC y, sobre todo, *Al-Jazirah* (Qatar) y *Al-Moustakilah* (Londres), que cubren regularmente y de manera crítica su propia realidad. Las consecuencias políticas son inmediatas e inéditas. Así, después del principio de la segunda Intifada, los Gobiernos del Magreb ya no pueden controlar la cobertura y la interpretación de los acontecimientos ocurridos en Palestina. Desbordados por

¹ David Shenk, *Data Smog, Surviving the Information Glut*, Harper Edge, New York, 1997.

² Andrea Samprini, *CNN et la mondialisation de l'imaginaire*, CNRS Editions, París, 2000.

las cadenas vía satélite y por internet, están obligados a adaptar sus reacciones a los sentimientos del pueblo. Esta realidad refleja tanto el deterioro político y pérdida de control de algunos Gobiernos, como las maravillas tecnológicas del planeta mediático. Por otro lado, ¿qué pueden hacer internet y la televisión satélite en un país aterrorizado y espiado como Afganistán?

La capacidad de movilización ciudadana de las NTIC no nos debe hacer olvidar los grandes momentos de la historia rebelde. Grandes movimientos internacionales ciudadanos se han desarrollado alrededor de tecnologías que actualmente parecen muy anticuadas: el teléfono fijo, la radio de los años treinta, la democratización de los viajes con motivo de los movimientos estudiantiles de los años sesenta o el fax durante la movilización antinuclear de los años ochenta.

No pretendamos tampoco que la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación coincide automáticamente con el progreso, la libertad y la diversidad. Las nuevas tecnologías también han sido extensivamente domesticadas por los grupos más retrógrados y represivos. Al mismo tiempo que se pregona la explotación de las mujeres o la opresión étnica, se puede manejar hábilmente las tecnologías más avanzadas.

¿Mejor informados?

¿Es más globalizada y mejor la información actualmente que en los años sesenta cuando sabíamos más sobre la guerra de Vietnam que lo que hemos conocido sobre las guerras de Kosovo o del Golfo? ¿O durante los años ochenta cuando, sin modem ni teléfono móvil, seguíamos las revoluciones de América Latina mucho mejor que lo que conocemos hoy las guerras de Colombia o de Argelia?

Desde la difusión por satélite al modem de internet, las numerosas innovaciones técnicas han incrementado la sensación de una ubicuidad sobrecogedora, de una inmediatez fulgurante, de una orgía de medios y de mensajes. Pero, aunque podamos escoger entre una avalancha de cadenas de televisión, pasar horas en la jungla de internet, o por que en los kioscos desborden las revistas y diarios, ¿conocemos verdaderamente la información que nos permitirá ser ciudadanos del mundo, capaces de comprender y de actuar sobre los acontecimientos de este planeta supuestamente globalizado?

No nos equivoquemos sobre la capacidad de las NTIC de traspasar todas las barreras. A pesar del retorno de los “milicos” latinoamericanos a sus cuarteles, a pesar de la implosión de la Unión Soviética y el cuestionamiento de los regímenes de partido único en África, una parte considerable de la población mundial vive todavía bajo un régimen de opresión y censura. En China, Cuba, Bielorrusia y en la mayor parte de los países árabes, la libertad de prensa no existe. En numerosos países con conflictos étnicos o agobiados por organizaciones mafiosas, apartados del derecho, la libertad de prensa se mide con la espesura del chaleco anti-balas. En estas carreteras sin ley que conducen al “corazón de las tinieblas”, la tecnología sólo sirve a los sicarios y a los saqueadores.

Las NTIC tampoco eliminan los desequilibrios en la producción y acceso de la información. Las grandes agencias de prensa mundiales son las principales

*Las nuevas
tecnologías
también han
sido
extensivamente
domesticadas
por los grupos
más
retrógrados y
represivos*

fuentes de información que alimentan al mundo mediático. A principios de los años ochenta eran seis, actualmente son tres. Prácticamente sólo hay dos proveedores al por mayor de imágenes de televisión: APTN y Reuters. Aunque se han profesionalizado y juegan un papel crucial en el seno de la sociedad civil internacional, las agencias alternativas, como IPS o Gemini, quedan al margen de lo que determina qué es noticia.

Las selecciones del sistema

Hablar de información y de comunicación en el tercer milenio significa hablar del funcionamiento del sistema mediático mundial, del tratamiento de la información, de prioridades y de opciones de redacción. No comparto la tesis del pensamiento único o de la sumisión de toda la prensa a los imperativos de la urgencia, del espectáculo y del dinero. Cada día, en todo el mundo, desde Madrid a Buenos Aires, de Johannesburgo a Hong Kong, numerosos periodistas hacen un trabajo notable de recogida y de tratamiento de la información internacional. Pero, frente al público ambiguo que forma parte del problema de la información, sus esfuerzos no logran anular una imagen generalmente negativa.

Esto ocurre porque el sistema mediático más visible y ruidoso, la televisión, impone concepciones de la información que se basan en el espectáculo, la dramatización y la simplificación. Consumidor y cómplice de esta máquina mediática, el gran público se da cuenta de forma confusa del desfase entre su realidad y la representación que da la televisión. Sin embargo, en la mayoría de los países se continúa apoyando las cadenas televisivas más comerciales, e incluso se elige como mandatario a un "rey de la tele-basura", como en Italia.

En un mundo dominado por valores financieros, la información se ha convertido esencialmente en una mercancía, y su fabricación responde lógicamente a criterios de mercado y de rentabilidad. En este mundo de grandes medios, la noción de interés y de servicio público, de responsabilidad de la prensa de comunicar una información que permita a los ciudadanos participar activamente y con conocimiento a la vida de la Ciudad, abdican irremediabilmente frente a los imperativos de la rentabilidad financiera. Si la información internacional es demasiado cara, se cierran las oficinas en el extranjero. Si la información social molesta a los publicitarios y aburre al público, se marginaliza. ¿Cuántos minutos han dedicado las cadenas de televisión internacionales a la "primera guerra mundial africana", la guerra en la República Democrática del Congo, en la que ha habido más de dos millones de muertos? En abril de 1994, las tres grandes cadenas estadounidenses dedicaron treinta y dos minutos al genocidio en Ruanda. Treinta y dos minutos para un millón de muertos.

Las consecuencias de esta concepción financiera y administrativa sobre la integridad del periodismo son todavía más graves ya que los grandes grupos de prensa han multiplicado las zonas de conflictos de interés. Integradas en grandes grupos multimedia y en conglomerados con múltiples intereses financieros e industriales, numerosas redacciones están bajo presión y practican la autocensura debido a que deben proteger los intereses de sus dueños en las obras públicas, la industria del armamento o los parques de diversión.

Un mundo privado de sentido

Esta comercialización de la información lleva también a una simplificación de la representación del mundo en el mismo momento en que éste impone su complejidad y se presenta ante nosotros “privado de sentido”. En un estudio de CNN, Andrea Semprini señalaba que “el individuo contemporáneo está confrontado a un entorno social mucho menos leíble y descifrable que en el pasado”. La complejidad creciente de las sociedades posindustriales requiere instrumentos de análisis y de lectura más sofisticados”.

Ahora bien, el sistema mediático, sobre todo cuando privilegia la inmediatez, trata con gran dificultad la complejidad, los procesos lentos, los movimientos subyacentes. Le cuesta anticipar acontecimientos o volver a tratar estos cuando el “suspense” se ha esfumado. Este desfase entre el modo de funcionamiento de la información para el gran público y la necesidad ciudadana de información, se observa particularmente en la actualidad internacional. Mientras todo el mundo habla de globalización, una parte importante de la prensa ha decidido reducir el espacio dedicado a las cuestiones internacionales. Es el caso, de manera cartica-tesca, de EEUU donde la información internacional se ha reducido a la mitad en las grandes cadenas de televisión y se limita, en la mayoría de los diarios regionales, a una columna de noticias breves desprovistas de todo significado. Esta es también la tendencia de parte de la prensa europea. El “periodismo de cercanía” es la regla de oro.

Si la televisión emite imágenes chocantes sobre las guerras africanas, es porque estas imágenes responden a criterios de dramatización visual que refuerzan los estereotipos de una audiencia que no puede pensar en África más que en términos de tribalismo y de barbarie. En ningún momento se muestra que estos conflictos africanos están vinculados a la realidad del Norte por la inmigración, la criminalización de la economía, por la guerra, por el control de los hidrocarburos, los diamantes o los minerales estratégicos. Por ejemplo, el coltan que, saqueado por los ejércitos y la milicias en la República Democrática del Congo, equipa los teléfonos móviles.

Una información “dual”

Hablar de información y de comunicación actualmente es hablar de dualización de la información y de su audiencia. En EEUU, solo el 4% de la población se considera que está bien informado sobre cuestiones internacionales. El resto de la población, el 96%, limita su conocimiento a algunos minutos de información televisiva, presentada de forma rápida, sin contexto ni perspectiva.

Esta dualización se registra también a nivel de los NTIC y, más precisamente, de internet. Si para los grupos organizados, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han abierto extraordinarias pistas, autovías y callejones que desembocan en un nuevo activismo ciudadano, no es necesariamente igual para el individuo, “solo en la muchedumbre”, que, frente a las NTIC, es menos ciudadano que sujeto, más consumidor que actor. Incluso a nivel informativo, la regla

es la pasividad. El uso de internet puede aislar tanto como juntar. Puede confinar delante de la pantalla de su computadora tanto como empujar al intercambio y a la acción.

¿Qué hacer?

Hace algunos años, los críticos de la mundialización neo-liberal se desesperaban por hacerse oír en la gran prensa y recalcaban su teoría del "pensamiento único" y de los "perros de guardia" del ultraliberalismo. Hoy en día, los ideólogos y administradores de la mundialización están a la defensiva. La fuerza del movimiento "antiglobalización" ilustra la capacidad del pensamiento disidente de infiltrarse en los grandes medios, de trastornar el discurso dominante, de imponer, si no su proyecto, por lo menos sus denuncias y sus dudas.

Antes, las organizaciones de defensa de los derechos humanos se desesperaban frente a la impunidad de los dictadores, de los matones y de sus cómplices. Ahora, Milosevic esta en La Haya, y desde la detención de Pinochet en Londres, los jefes de Estado culpables de crímenes contra la humanidad deben revisar sus proyectos de viajes internacionales.

Gracias a la información globalizada y a la injerencia mediática, la justicia internacional ha hecho estos extraordinarios avances debido a una información alimentada por las ONG internacionales y por grupos de ciudadanos vinculados entre si más allá de sus fronteras. Gracias también a la capacidad de las organizaciones "disidentes" de crear sus propios medios para llegar a su público y forzar a los grandes a tenerlos en cuenta.

"Don't hate the media, be the media", proclaman los partidarios de la información alternativa. Cada vez más, las organizaciones especializadas en información alternativa y "perturbadora" imponen el menú de la actualidad. Los grandes medios de comunicación los siguen porque no pueden ignorar los temas que circulan en estas múltiples redes de información ciudadana, pero también porque, en numerosos países, los periodistas se preocupan de las condiciones que la comercialización y la concentración imponen a su profesión. Y resisten.

El derecho de gentes	153
La guerra sucia	156
Aiding Recovery? The crisis of aid in chronic political emergencies	159
Terrorismo religioso	164
Delivers us from evil: warlords, peacekeepers and a world of endless conflict	166
Desplazamiento forzado en Colombia	168
La retirada del Estado	170

EL “DERECHO DE GENTES”

John Rawls
Paidós,
Barcelona, 2001,
285 páginas

¿Por qué la situación en Oriente Medio está cada vez más lejos de conseguir un mínimo de estabilidad? ¿Cómo es posible que un régimen democrático como el argelino permita la ejecución por lapidación de quien sea madre fuera del matrimonio? ¿Es imposible la convivencia pacífica entre hinduistas y musulmanes en la provincia india de Gujarat? ¿Cuándo van a establecerse criterios claros de intervención por Naciones Unidas ante violaciones de los derechos humanos? ¿Tienen los países del llamado Tercer Mundo un derecho a ser asistidos socio-económicamente por las sociedades occidentales?

John Rawls ofrece un modelo filosófico-político que pretende explicar globalmente la diversidad de estas cuestiones y proponer medios de solución factibles. Se trata de *El “derecho de gentes”*, un conjunto de principios políticos destinados a regular las relaciones entre los pueblos, fundamentado en la idea kantiana de una confederación pacífica de Estados y creado a partir de los ideales y la práctica del Derecho Internacional. Su objetivo es la eliminación de los grandes males de la historia de la humanidad (guerra injusta y opresión, persecución religiosa y denegación de la libertad de conciencia, hambre y pobreza, genocidio y asesinato en masa) mediante el establecimiento de instituciones básicas justas o al menos decentes.

Rawls construye este modelo partiendo de su concepción liberal de

la justicia para las sociedades domésticas. La cuestión clave de la obra gira en torno a si es posible extender un sistema de organización político efectivo a nivel interno (el democrático-constitucional) a la sociedad internacional, independientemente de sus diversas formas de organización. Los protagonistas no serán los individuos sino los pueblos que, a diferencia de los Estados, son capaces de ofrecer relaciones justas y equitativas de cooperación a otros pueblos en la persecución de sus intereses propios, teniendo así un componente moral. El resultado de esta extensión es un conjunto de ocho principios que comprenden desde la libertad e independencia de los pueblos al deber de asistencia a los que vivan bajo condiciones desfavorables, pasando por el respeto de los derechos humanos, el deber de no intervención o el recurso a la autodefensa. Estos principios, que los pueblos estarán dispuestos a reconocer como forma de regulación de su conducta a nivel internacional (su política exterior), aglutinarían dos tipos de sociedades: las liberales y las decentes. Estas últimas, si bien no alcanzan completamente los estándares de igualdad y justicia propios de las sociedades liberales democráticas, llegarían a un mínimo que les permitiría ser miembros de buena fe de la sociedad internacional al cumplir tres condiciones básicas: respeto por las leyes de la paz, provisión de un sistema jurídico que garantice los derechos humanos y permiso a sus miembros para participar con garantías en el proceso de toma de decisiones. Rawls establece así de forma original una “idea mínima” de sociedad, distinta de la liberal pero legítimamente organizada y por tanto susceptible de aceptar el “derecho de gentes”.

Las implicaciones prácticas de

esta construcción teórica (Rawls la denominada teoría ideal) son enormes y abarcan parte de las preguntas que suscitamos al principio; de hecho, se vinculan a tres problemas actuales de especial relevancia: la posibilidad de una paz estable y duradera, la universalidad de los derechos humanos y el pluralismo que caracteriza a la sociedad internacional.

Una sociedad idealmente regida por el “derecho de gentes” llevaría a la consecución de la paz democrática, una situación en la que la estabilidad entre los países no sería un mero *modus vivendi* o una calma tensa asegurada por la disuasión nuclear, sino la derivación práctica de la aceptación de un conjunto de principios: democracia compartida, intercambio comercial y pertenencia a organizaciones internacionales y regionales; todos ellos, incluidos en y potenciados por el “derecho de gentes”, han hecho posible que desde principios del siglo XIX las sociedades liberales firmemente establecidas no hayan luchado entre sí debido a la satisfacción de sus necesidades básicas y a la presencia del componente moral que las diferencia de la concepción tradicional del Estado.

Para que el “derecho de gentes” pueda aplicarse a toda la sociedad internacional, Rawls articula un concepto mínimo de derechos humanos susceptible de ser aceptado por todos los pueblos. Se trataría de una clase especial de derechos urgentes (derecho a la vida, a la libertad o a la igualdad formal, prohibición de la tortura) que no incluiría todos los derechos reconocidos y asegurados a los ciudadanos en nuestras sociedades democráticas liberales, especialmente los derivados de concepciones puramente occidentales (como la ciudadanía democrática), inexistentes en otro tipo de socieda-

des. Sin embargo, su aceptación sería condición necesaria para considerarlas como decentes, garantizando así su aplicación universal. Aunque no se cumplieran en todo lugar, su fuerza política y moral obligaría a todos los pueblos, incluyendo los Estados proscritos o criminales, justificando así la intervención armada contra ellos cuando los violaran sistemáticamente.

La heterogeneidad característica de la sociedad internacional impediría la extensión *strictu sensu* del “derecho de gentes” si éste se fundamentara exclusivamente en los principios del liberalismo democrático-constitucional occidental. Para superar dicho obstáculo, Rawls aboga por una concepción de la tolerancia que admitiría ciertas características institucionales de determinadas sociedades (no occidentales) aunque no fueran tan igualitarias como las nuestras. Por tanto, se trataría de reconocer que el pluralismo razonable existente entre las sociedades liberales y decentes (desde una monarquía constitucional hasta una república democrática islámica) es compatible con sus doctrinas generales, ya sean filosóficas, religiosas o seculares, tal y como ha sucedido con el catolicismo desde el Concilio Ecuménico Vaticano II y con algunas formas de protestantismo, judaísmo e islamismo. No se exigiría a las sociedades decentes que abandonaran o modificaran sus instituciones religiosas, sino que encontrarán la forma de garantizar el pensamiento constitucional democrático desde las mismas. Una vez definidas las sociedades bien ordenadas (liberales y decentes), Rawls construye la parte no ideal de su teoría, teniendo en cuenta las condiciones reales de la sociedad internacional, con sus grandes injusticias y males sociales. Reflexiona sobre cuál debe ser

la conducta de los pueblos bien ordenados respecto de aquéllos que no lo están, surgiendo dos cuestiones fundamentales: en qué casos estaría justificado el recurso a la fuerza armada y ante quiénes se ejercería; y cómo se articularía la cooperación internacional en una sociedad caracterizada por la desigualdad en la distribución de la riqueza.

La primera cuestión parte de los Estados criminales o proscritos que, como infractores de los principios básicos del “derecho de gentes” impedirían la consecución de una sociedad de los pueblos bien ordenados. Al establecer instituciones y prácticas en foros confederativos que condujeran a una política común, el “derecho de gentes” ofrecería la capacidad de exponer a la luz pública las injustas y crueles instituciones (y acciones) de los Estados criminales. Al mismo tiempo, se llevaría a cabo una presión gradual para el cambio de estas conductas mediante la imposición de sanciones económicas o el impedimento del acceso a prácticas cooperativas benéficas. Sólo en último término se justificaría el derecho a la guerra, además de para el supuesto de autodefensa, ante violaciones sistemáticas y atroces de derechos humanos, incluyendo las producidas en Estados proscritos no agresivos. Dichas medidas serían adoptadas en foros comunes dotados de la autoridad necesaria para evitar la unilateralidad (estadounidense) que hemos presenciado en los casos de Somalia, Kosovo y, recientemente, Afganistán. Como consecuencia de la mala ordenación del Estado proscrito, ni los miembros civiles de la sociedad ni sus soldados (que tendrían que ser objeto de ataque sólo por la inexistencia de otra alternativa en caso de conflicto) podrían ser considerados como organiza-

dores y propiciadores de la guerra, por lo que Rawls responsabiliza exclusivamente a sus dirigentes, funcionarios y altos mandos militares. Como principio general de *ius in bellum*, siempre se abogaría por el respeto de los derechos humanos del otro bando, porque el enemigo, como todos los demás, posee estos derechos. Además, su contenido les sería enseñado y demostrado con el ejemplo implícito del trato que recibirían. La situación de los presos afganos en Guantánamo ejemplifica por sí misma la maleabilidad de la problemática.

La segunda cuestión parte de las sociedades desfavorecidas, entendidas como aquéllas no agresivas ni expansivas cuyas circunstancias históricas, sociales y económicas les dificultan o imposibilitan el alcance de un régimen bien ordenado al carecer de las tradiciones políticas y culturales, el capital humano, la tecnología y los recursos necesarios para ello. Rawls articula un deber de asistencia hacia estas sociedades por parte de los pueblos bien ordenados conforme a tres criterios: el establecimiento de instituciones básicas razonablemente justas para una democracia constitucional, el reconocimiento de la importancia de su cultura política y finalmente, la asistencia no paternalista una vez estas sociedades hayan entrado en la sociedad de los pueblos bien ordenados. Se recalca así, en la línea seguida entre otros autores por Amartya Sen, que la mera asignación de recursos, aun siendo con frecuencia esencial, no es suficiente para corregir las injusticias sociales y políticas básicas derivadas de la ineficacia de los derechos humanos, en su concepción más liberal. Ejemplo de ello son las hambrunas, no sólo vistas como crisis alimentarias sino como desastres económicos con-

secuencia de fallos en la estructura sociopolítica que impiden el establecimiento de medidas para remediar los defectos en la producción de alimentos. “El gobierno que deja morir de hambre a su pueblo refleja una despreocupación por los derechos humanos que no se produce en un régimen bien ordenado”, afirma el autor. El libro concluye reflexionando sobre la posibilidad de la realización práctica del “derecho de gentes”. Los obstáculos son numerosos, siendo el principal aquellas personas, fundamentalistas de religiones o doctrinas históricamente dominantes, que nunca admitirían un mundo social como el descrito, ya que para ellas sería “una pesadilla de fragmentación social y doctrinas falsas, si no malignas, inaceptable”. Sin embargo, el propio Rawls caracteriza toda su construcción como la de una “utopía realista”, que implica que “su realización es importante, pero el mero hecho de su posibilidad nos reconcilia con el mundo social y nos lleva a esperar, tanto en lo interno como en lo externo, que nosotros u otros, en algún momento y en algún lugar, lo alcanzaremos; a partir de esta convicción, podremos hacer algo en esa dirección. Esto, de por sí, basta para eliminar los peligros del cinismo y la resignación, tan predominantes actualmente, y legítima esta utopía realista. Si no es posible una razonablemente justa sociedad de los pueblos cuyos miembros subordinen su poder a fines razonables, y si los seres humanos son en gran medida amorales, si no incurablemente egoístas y cínicos, podríamos preguntar con Kant si merece la pena que los seres humanos vivan sobre la tierra”.

Alfonso Verdú
Master en Ayuda Internacional
Humanitaria

LA GUERRA SUCIA
El testimonio de un ex
oficial de las Fuerzas
Especiales del Ejército
argelino,
1992-2001

Habib Souaïdia
Ediciones B,
Barcelona, 2002
304 páginas.

En enero se cumplieron 10 años desde que fue bruscamente interrumpido en Argelia un proceso electoral en el que, presumiblemente, la victoria iba a ser para el Frente Islámico de Salvación (FIS). La amenaza del fundamentalismo fue la excusa para instalar un régimen represivo y dar la espalda a la democracia. Desde entonces, se desató la barbarie de la que han sido víctimas más de 150.000 personas. La barbarie del terrorismo islámico, pero también de una dictadura que emprendió una campaña de aniquilación contra los que se oponían al sistema y amenazaban su poder declarando la guerra a todo el pueblo argelino. Habib Souaïdia, ex oficial de las Fuerzas Especiales de paracaidistas del Ejército argelino, revela en este libro los abusos y matanzas llevados a cabo por los generales contra la población civil durante los años de lucha contra los grupos radicales islámicos. El Ejército “habría podido atajar el terrorismo si realmente hubiera querido”, afirma el escritor. Souaïdia sostiene que la guerra podría haberse evitado, que no era necesario acabar con el proceso electoral de 1992, pues se habría salvado la democracia, aunque el FIS hubiera ganado las elecciones. La tesis que se defiende a lo largo de la obra afirma que el verdadero problema de Argelia no es el

terrorismo, sino la ausencia de democracia, el terrorismo de Estado, la injusticia. El escritor asegura que el régimen de Argel necesita la guerra para subsistir, para preservar su legitimación y justificar su represión frente a Europa y EEUU. “En realidad, Argelia no posee un ejército... es el Ejército quien posee a Argelia”, afirma. La oposición abierta de este ex militar de 32 años a los abusos de los que fue testigo le llevó a ser detenido en la prisión militar de Blida durante cuatro años. Tras ser liberado, en abril de 2000 Souaïdia se refugió en Francia, donde solicitó asilo político. La publicación de *La guerra sucia* en el país galo, en 2001, suscitó una gran polémica. Los militares argelinos, encabezados por el jefe del Estado Mayor, el general Mohamed Lamari, vertieron múltiples acusaciones contra el autor. Incluso el general Khaled Nezzar —ex ministro de Defensa y cerebro del golpe de Estado de 1992— lo denunció por difamación ante la justicia francesa. Sin embargo, otros libros han venido a corroborar las acusaciones de Souaïdia, como es el caso de *La muerte en Bentalha. Guerra y manipulación política en Argelia*, de Nesroulah Yous (Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2001), que denuncia la implicación del Ejército en varias matanzas atribuidas a los terroristas entre 1997 y 1998. El libro de Souaïdia es un crudo relato de aquellos años de guerra sucia y secreta de un régimen contra su pueblo. “Yo quería ser soldado, no asesino”, dice el ex oficial. El autor acusa a las unidades de élite del Ejército argelino de practicar torturas y ejecuciones sumarias contra simples sospechosos o incluso contra civiles inocentes. Habla de la existencia de una orden —Bravo 555— que impedía a los soldados “proteger a

la población civil aislada o prestar ayuda a compañeros de otras fuerzas de seguridad que se hallaran en aprietos”. Habla de matanzas de civiles realizadas por miembros de la DRS —la Seguridad Militar— disfrazados de integristas, ante las que los medios de comunicación permanecieron mudos.

No faltan los episodios de torturas con descargas eléctricas, palizas, envenenamientos... protagonizados por el Ejército. Muchas personas fueron, incluso, arrojadas desde helicópteros en pleno vuelo. Era, en palabras del propio Souaïdia, un “ciclo infernal: detener a la gente, torturarla, asesinarla y quemar los cadáveres”. El autor asegura que presencié la eliminación de unas 100 personas desde que fue destinado al destacamento de Lakhdaria (en el norte del país). Incluso se atreve a dar los nombres de las víctimas y los de sus verdugos. Como se habla de los emires del GIA o del Grupo Salafista, también puede hablarse de los emires de la DRS. El general Mohamed Mediène (Tewfik), o los coroneles Tartag, Antar o Djebar acumularon “más sangre en sus manos que todos los grupos terroristas juntos. Ellos asesinaron u ordenaron asesinar a cientos de militares y a miles de civiles, esos que hoy denominamos desaparecidos”.

Uno de los testimonios más estremecedores de los que da cuenta el libro narra cómo un chico de 15 años y un hombre de unos 35 fueron quemados vivos por miembros del Ejército: “Nunca olvidaré aquella escena. (...) El chico suplícaba y lloraba bajo la mirada de desprecio de los militares agrupados en torno a él. El teniente prendió un trozo de plástico y lo tiró sobre las ropas del infortunado, que enseguida se convirtió en una auténtica tea humana. Sus aullidos

de dolor, capaces de resucitar a un muerto, fueron interrumpidos por una ráfaga a bocajarro. Su compañero, presente en la escena, permanecía mudo de terror. Minutos más tarde, iba a correr la misma suerte”.

Esta década ensangrentada de Argelia es relatada minuciosamente por Souaïdia, quien no se olvida de reflejar cada detalle de la vida política del país, el descontento popular, la falta de justicia, la corrupción de políticos y militares, la generalización del consumo de droga en la institución militar... “Un país donde no hay justicia no puede aspirar a nada”, concluye el autor. “No hay que hacerse ilusiones: la ley no existe en Argelia”, añade más adelante.

Hoy, la situación en Argelia no es mejor. Diez años después del golpe militar y del comienzo de la guerra civil, los generales aún ostentan el poder, en la sombra, bajo una fachada de democracia. La Ley de Concordia Civil, la amnistía promulgada por el presidente Abdelaziz Buteflika en 1999, no ha contribuido a traer la paz al país norteafricano. Desde el inicio de la política de reconciliación han muerto más de 2.000 personas. Algunos de los arrepentidos que obtuvieron el perdón, asegura Souaïdia, “eran agentes que los servicios habían infiltrado en los grupos armados y que ahora regresaban a sus destinos iniciales”. Muchos de los amnistiados son culpables de delitos de sangre. Los inocentes permanecen encarcelados y las víctimas no han obtenido justicia.

La revuelta de la Cabilia volvió a poner de manifiesto la violencia de la represión del régimen. En abril de 2001, los cabileños se manifestaron a favor del reconocimiento de sus demandas culturales, pero también a favor de la

democracia. La intervención del Ejército fue desproporcionada y provocó 60 muertos y 2.000 heridos. Nada ha cambiado desde la revuelta del pan de octubre de 1988. En ella murieron 500 jóvenes a manos de la represión militar; cinco meses después se creó el FIS. El descontento generalizado contra el régimen de partido único derivó entonces en un masivo apoyo a los fundamentalistas islámicos en las elecciones locales de 1991. Tras una década en la que los generales y los terroristas han sumido a Argelia en el caos, la anarquía y la decadencia del Estado argelino continúan.

Rosa Meneses Aranda
Periodista y experta en
Información Internacional y
Países del Sur.
Coautora del *Anuario CIP 2002*.

AIDING RECOVERY? THE CRISIS OF AID IN CHRONIC POLITICAL EMERGENCIAS

Joanna Macrae
Overseas Development
Institute y Zed Books,
Londres, 2001,
208 páginas.

Este reciente libro de Joanna Macrae, investigadora del Overseas Development Institute de Londres, constituye una importante contribución, innovadora y desafiante, a los debates en el campo humanitario, del cual ella es una de las figuras más destacadas. Sin duda resultará una aportación polémica, pues rompe con enfoques que habían conseguido ya un amplio consenso.

La obra es fruto de un análisis de los debates teóricos en la materia, aplicado después al estudio de la ayuda a la rehabilitación del sector público de salud en tres países: Uganda, Etiopía y Camboya. Los tres estudios de caso, basados en una extensa investigación de campo, ofrecen importantes pruebas sobre los retos y dificultades habituales en los procesos de reconstrucción de posguerra. Sin embargo, la principal contribución de la obra la encontramos en su marco teórico, y consiste en su radical cuestionamiento de lo que denomina la “nueva ortodoxia” en torno a la ayuda humanitaria en situaciones de conflicto y a la rehabilitación posbélica, que se ha gestado y expandido desde comienzos de los años noventa. Ese pensamiento dominante, que ha sido aceptado por la mayoría de académicos y de actores humanitarios (agencias de Naciones Unidas, Gobiernos donantes y ONG), está condenado a fracasar

cuando se intenta aplicar en lo que denomina “cuasi-Estados”, que sufren emergencias políticas crónicas. Se trata de países en contextos de conflicto o de posconflicto, y que se caracterizan por una inseguridad endémica, una pobreza extendida y una economía desmoronada, así como por un Estado desestructurado, incapaz de gobernar el territorio, carente de recursos materiales, con una escasa legitimidad interna debido a las violaciones de los derechos humanos y la represión, y con un dudoso reconocimiento internacional.

Macrae sostiene que en tales “cuasi-Estados” resultan no sólo inviables en la práctica, sino incluso indeseables y peligrosos, dos credos esenciales de ese “nuevo humanitarismo” imperante: que la ayuda humanitaria debe no sólo paliar el sufrimiento sino también sentar las bases de un desarrollo futuro; y que, además, la ayuda humanitaria puede contribuir a la gestión del conflicto y a la construcción de la paz.

La post-guerra fría ha supuesto importantes cambios en el escenario internacional. Uno de ellos ha sido el auge de los conflictos internos, que han contribuido a la aparición de numerosos “cuasi-Estados”. Otro ha sido el incremento de la capacidad de la comunidad internacional para intervenir en tales países, gracias al fin de la confrontación bipolar que antes le constreñía y a la idea de que la soberanía estatal no es un principio absoluto, sino que puede suspenderse cuando sea precisa una intervención internacional para evitar una violación grave de los derechos humanos por el Gobierno correspondiente. Todos estos cambios han conferido a la ayuda humanitaria y la rehabilitación posbélica un importante peso en la agenda interna-

cional de la última década. Pero también han obligado a alterar los principios en que se basó la ayuda internacional durante la guerra fría, y a gestar un nuevo paradigma de la ayuda con sus fundamentos teóricos, objetivos y mecanismos de actuación. Un rasgo básico del nuevo paradigma hegemónico asume que la ayuda humanitaria no debe conformarse, como antes, con ser un mero paliativo del sufrimiento de las víctimas de los conflictos, sino que debe aspirar a objetivos más ambiciosos, en particular, a promover la paz y el desarrollo. En efecto:

- a) La ayuda humanitaria puede y debe ser un instrumento para la gestión del conflicto, contribuyendo a su prevención y resolución. Así lo proponen numerosos documentos de Naciones Unidas, la Unión Europea o la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, al igual que multitud de estudios académicos que vienen manteniendo un rico debate sobre la relación entre el conflicto y el desarrollo.
- b) La ayuda humanitaria puede cumplir dicha función mediante su vinculación con la cooperación al desarrollo, asumiendo principios y objetivos de desarrollo a largo plazo incluso aunque no hayan concluido las hostilidades. De esta forma se estaría contribuyendo a afrontar las causas raíces del conflicto, como son la pobreza y el subdesarrollo.

Estos objetivos han ido ganando una creciente aceptación desde principios de los años noventa. Investigadores y actores de la

ayuda mantienen desde entonces un rico debate en torno a los principios y mecanismos operativos con los que poder alcanzar aquellas metas, y que ha engendrado diferentes enfoques y propuestas: el *continuum* y el *contiguum* humanitarios, el principio *do no harm*, la construcción de espacios de paz, el desarrollo en conflicto, entre otros.

Ahora bien, hasta ahora se ha tratado de un debate centrado sobre todo en aspectos técnicos, operativos y de gestión de la ayuda.

Aunque Macrae también analiza algunos de esos aspectos (como los problemas de coordinación, sostenibilidad, definición de objetivos, entre otros), su principal contribución consiste en ubicar el debate en otros parámetros, al señalar la existencia de diversos problemas conceptuales, políticos y éticos, los cuales harían que la aplicación de la nueva ortodoxia en los “cuasi-Estados” no sólo sea inviable en la práctica, sino también indeseable y peligrosa.

En primer lugar, formula varios cuestionamientos de tipo conceptual. El debate sobre la vinculación entre la ayuda de emergencia y la de desarrollo se basa en un modelo teórico ideal, el “desarrollismo”, que asume que existe una secuencia de fases temporales emergencia-rehabilitación-desarrollo, de modo que después de un desastre (visto como un fenómeno puntual) se puede retomar el camino hacia el desarrollo, todo ello en el marco de un Estado soberano y con capacidad de gobernar. Sin embargo, este esquema choca con la realidad de los “cuasi-Estados”, en los que la crisis es crónica y no puntual, el camino hacia el desarrollo es una quimera y el Estado está semi-desintegrado.

Macrae entiende que la propuesta del uso de la ayuda humanitaria

como instrumento para la construcción de la paz se asienta en dos presupuestos discutibles. Por un lado, se asume que los conflictos responden a causas internas (como el subdesarrollo), gracias a lo cual las agencias humanitarias pueden jugar un papel sobre el terreno, pero tal análisis resulta insuficiente e ignora otras posibles causas. Por otro lado, se parte de la base de un modelo ideal de *continuum* conflicto-acuerdos de paz-paz con elecciones, que rara vez se da (Mozambique), siendo más frecuentes unas elecciones imperfectas (Camboya), la victoria de una de las partes (Uganda y Etiopía), así como una situación de inseguridad y crisis crónicas, todo lo cual genera regímenes políticos inestables con una legitimidad interna y externa incierta. Un segundo frente de críticas que formula al nuevo humanitarismo se centra en aspectos políticos. Macrae desafía la idea de los defensores de la vinculación entre la ayuda de emergencia y la de desarrollo de que la distinción entre ambas es básicamente burocrática y técnica. Según señala, son claramente diferentes en sus principios y objetivos, así como en sus respectivas implicaciones políticas. La ayuda humanitaria, por sus características (proyectos micro, basados en las necesidades de los vulnerables, buscando resultados inmediatos más que sostenibles, frecuentemente gestionada por ONG independientes), no asume la existencia de una autoridad central que planifique y determine las prioridades, ni implica en sí una legitimación política de la autoridad que controla un territorio dado. Por el contrario, la cooperación para el desarrollo, en la medida en que se orienta a promover políticas públicas y a reforzar las capacidades de las instituciones nacionales

encargadas de planificarlas y ejecutarlas, conlleva necesariamente una legitimación de los Estados o regímenes receptores.

De este modo, una cuestión crucial para la comunidad internacional es si debe, y en qué condiciones, legitimar mediante la cooperación al desarrollo a Estados en conflicto o posconflicto, de legitimidad dudosa, frecuentemente violadores de los derechos humanos e indiferentes ante las calamidades de la población. Así, cuando los donantes optan entre la ayuda humanitaria o la de desarrollo lo hacen en base a criterios políticos, es decir, considerando sus propios intereses así como también tres factores del Estado receptor: sus capacidades institucionales, su estatus jurídico como Estado soberano, y su grado de legitimidad en la comunidad internacional.

En otras palabras, la proliferación durante los años noventa de “cuasi-Estados” en crisis crónica ha afectado decisivamente a la forma y a los objetivos de la ayuda internacional, que se ha centrado básicamente en mecanismos de emergencia, sin que se haya podido materializar la idea del *continuum*, esto es, pasar desde la ayuda de emergencia (basada en proyectos) a una ayuda de desarrollo (basada en políticas, con objetivos más amplios en el tiempo y en el espacio). Por un lado, los Estados receptores carecen de “soberanía empírica” o capacidad de gobernar, pues la falta de recursos y capacidades institucionales les impide ejecutar políticas de desarrollo a largo plazo. Por otro lado, muchas veces, como ocurrió en Camboya y Uganda, les falta legitimidad externa y un reconocimiento internacional de su “soberanía jurídica”. Esta circunstancia hace que los donantes no quieran reforzar sus capacida-

des institucionales a fin de no legitimarlos, por lo que rehuyen la cooperación al desarrollo y se centran en la ayuda humanitaria. De este modo, una conclusión central del libro es que el contexto político de estos Estados frágiles (vacío de poder, falta de legitimidad, falta de capacidad) determina la modalidad, el contenido y los sistemas de gestión de la ayuda internacional, plasmándose en una ayuda de emergencia vía ONG o agencias humanitarias de Naciones Unidas, que busca resultados a corto plazo, y que se centra en la provisión de materiales e infraestructuras, pero olvidando la formación de recursos humanos y la creación de capacidades institucionales. Por consiguiente, ese contexto político también imposibilita la materialización del *continuum* humanitario, la evolución desde los proyectos de emergencia hacia políticas de desarrollo más amplias en cuanto a sus objetivos, tiempo y beneficiarios. Por consiguiente, la vinculación emergencia-desarrollo no requiere sólo una buena planificación técnica, sino también la presencia de un Estado central, unificado, con capacidad de ejecución de políticas y legitimado internacionalmente. Estas características están ausentes en los “cuasi-Estados” de la post-guerra fría, de modo que las aspiraciones del humanitarismo hegemónico no son viables en la práctica, en tanto no se resuelvan los problemas relativos a la estatalidad y legitimidad de las autoridades. Otro conjunto de críticas al nuevo humanitarismo son de tipo ético. La ayuda se ha convertido en un elemento básico de la política exterior de Occidente en los países periféricos poco estratégicos, de modo que en la práctica no viene conformada por las necesidades de los receptores, sino por los

intereses (políticos, comerciales, de seguridad) de los donantes. Esta creciente politización de la ayuda iniciada ya en los años ochenta implica que las agencias humanitarias corren el riesgo de ser instrumentalizadas y de perder uno de sus principios inspiradores esenciales, la neutralidad. Del mismo modo, el objetivo crecientemente buscado de introducción de criterios de desarrollo en la ayuda de emergencia puede traducirse en la imposición de elementos de condicionalidad política en la ayuda humanitaria, rasgo característico de la cooperación al desarrollo pero tradicionalmente no de aquella, basada en criterios de neutralidad e imparcialidad. Además, tal enfoque, orientado hacia el desarrollo mediante la creación de capacidades institucionales, a veces puede implicar el riesgo de reforzar y legitimar regímenes ilegítimos y violadores de derechos humanos, un dilema difícil de resolver. Macrae concluye que el sistema internacional de ayuda, que sigue basándose en la asunción de que existe un Estado soberano, legítimo y con capacidad para distribuir la ayuda, no está bien pertrechado para responder a los problemas de los “cuasi-Estados” en contextos de conflicto o posconflicto. Dado que al sistema le faltan herramientas legales, institucionales y operativas para implicarse en ellos de forma efectiva, la respuesta de los donantes ha sido renunciar a la ayuda al desarrollo y sustituirla por la de emergencia. Esta opción, junto a la gran debilidad de los Estados receptores, ha imposibilitado en la práctica el tránsito de la emergencia al desarrollo de unos servicios públicos sostenibles. A la vista de que en los “cuasi-Estados” la vinculación emergencia-desarrollo es inviable e inclu-

so potencialmente peligrosa, Macrae propone reafirmar la diferencia entre ambos tipos de ayuda, no sobrecargar a la ayuda humanitaria con multitud de objetivos que últimamente se le atribuyen (desarrollo, paz, medioambiente, género, entre otros) para los que no está bien dotada, máxime en un contexto de disminución de fondos. Así, entiende que sería mejor que se concentrara en objetivos no muy ambiciosos para poder garantizar lo prioritario, esto es, el alivio del sufrimiento de las víctimas. En definitiva, la ayuda en contextos marcados por el conflicto exige no sólo mejoras técnicas y de gestión, sino una reformulación profunda de sus estrategias, el diseño de unos principios claros que la guíen, y, algo importante, una mejor división de las actuaciones internacionales en relación al conflicto, de modo que no se use la ayuda humanitaria como sustituta de la acción política.

Se trata de un libro que forzará a repensar muchos de los planteamientos recientes que conforman lo que denomina la “nueva ortodoxia”. Sus críticas están muy bien fundamentadas, tanto teórica como empíricamente, pero en nuestra opinión debe matizarse su alcance. Aunque a veces se presenten con una validez general, cuestionando de forma genérica los enfoques de un humanitarismo orientado al desarrollo y la paz, estos siguen siendo en gran parte válidos y deseables, por supuesto después de catástrofes naturales, pero también en contextos de guerra o posguerra.

Haber elegido el sector de la salud pública, y haber tomado como eje teórico el cambio que ha experimentado en la post-guerra fría el concepto y la materialización de la soberanía, le ha llevado a Macrae a asumir una posición

excesivamente “estatista” en su análisis: el desarrollo exige “políticas”, y éstas sólo son posibles si hay un Estado capaz y reconocido internacionalmente por los otros Estados. Se trata de un axioma relativamente válido, pero excesivamente cerrado para abarcar toda la realidad.

En primer lugar, habiendo basado sus tres estudios de caso en el análisis de la ayuda a la rehabilitación de la salud pública, tal vez sus conclusiones no sean extrapolables a otros sectores. El desarrollo de la salud pública, por su naturaleza, exige la existencia de un Estado operativo capaz de ejecutar políticas a escala nacional. Sin embargo, en otros sectores, como la producción agrícola o la seguridad alimentaria, creemos que resulta perfectamente posible avanzar en la rehabilitación y el desarrollo incluso en ausencia de políticas públicas coherentes y de un Estado legítimo y capaz, pues son áreas en las que éste es menos relevante y en las que la iniciativa descansa básicamente en la sociedad, y potencialmente también en instituciones locales. En otras palabras, el desarrollo también puede ser un proceso micro, local, y protagonizado por actores sociales (cooperativas, asociaciones, entre otros).

En segundo lugar, Macrae parece definir el desarrollo más en base al instrumento (que haya políticas públicas), que al resultado, esto es, la reducción de la vulnerabilidad y la mejora de las capacidades y el bienestar. ¿No son acaso los proyectos, aunque fragmentados y dispersos, mecanismos que también pueden sentar bases para el desarrollo?

En tercer lugar, la falta de legitimidad internacional de los “cuasi-Estados” parece motivar que los donantes opten por paralizar el tránsito hacia el desarrollo a fin

de no reforzarles y legitimarlos. Este tipo de cálculos en relación a la soberanía seguramente sí son realizados por las cancillerías de los Gobiernos donantes y por Naciones Unidas, pero parece improbable que lo hagan otros actores, como las ONG con fondos propios o las instituciones que realizan cooperación descentralizada, que pueden actuar con mayor flexibilidad respecto al concepto de soberanía y cuya actuación no tiene por qué legitimar al Estado. Aunque modestos, su contribución no debería ignorarse.

En suma, en no pocos sectores y contextos persiste un amplio margen para que la ayuda humanitaria contribuya a la capacitación y al desarrollo sostenible. En cualquier caso, Macrae ha dado nuevos vuelos al debate, aún más necesario ahora si cabe, introduciendo valiosas consideraciones políticas, jurídicas y éticas antes desconsideradas. Bienvenidas sean en aras a una reformulación profunda de la ayuda.

Karlos Pérez de Armiño
HEGOA, Universidad
del País Vasco

TERRORISMO RELIGIOSO

El auge global de la violencia religiosa

Mark Jüergensmeyer

Siglo XXI, Madrid, 2001,
358 páginas.

El subtítulo de este libro señala un fenómeno preocupante. Parece que el último decenio del siglo XX y el comienzo del siglo XXI van acompañados de un auge de la violencia con rostro religioso. Su título acota el objetivo, el “terrorismo religioso” de personas y grupos minoritarios, por más que sus acciones tengan una enorme repercusión. Algo distinto de las antiguas guerras de religión o incluso de la actual apelación a Dios (frecuente en EEUU o Israel) en acciones bélicas que muchas veces rozan con el terrorismo de Estado. Juergensmeyer trata de comprender por qué los actos terroristas se han asociado con causas religiosas y además con más frecuencia en la actual coyuntura histórica. ¿Necesita la violencia de la religión y la religión de la violencia? ¿Se diferencia el terrorismo religioso de terrorismos de otro signo? ¿Se puede encontrar un común denominador en los actos terroristas aunque sean de origen religioso diferente?

El autor intuye que los actos terroristas no son aislados y tienen una lógica. Esa lógica es proporcionada por las percepciones compartidas por los grupos en cuyo seno se mueven. Son las “culturas de violencia”, resultantes de grupos junto con sus ideologías. Hay un rasgo común: la percepción por las comunidades de referencia de que están siendo atacadas — violadas — y de que

sus actos son, por tanto, simples respuestas a la violencia que sufren. El autor pretende no sólo explorar la mentalidad de los activistas que han cometido violencia sino llegar a la lógica que los sustenta, y considera su trabajo “un estudio cultural comparativo sobre el terrorismo religioso”.

En una primera parte realiza un documentado estudio de casos, para comprender no sólo la mentalidad de los activistas implicados en actos terroristas “religiosos” sino la visión del mundo de las “culturas de violencia” que los amparan. En un amplio espectro se contemplan acciones y grupos de referencia cristianos, judíos, musulmanes, hindús y sijs, e incluso nipones.

La segunda parte, titulada “Lógica de la violencia religiosa”, trata de identificar patrones compartidos por las diversas culturas de violencia descritas. Es un agudo e interesante análisis. ¿Cuál es la naturaleza de la violencia terrorista? Es exagerada y espectacular. Por eso puede hablarse de un “teatro del terror”, en el que se cuidan tanto el escenario como el tiempo y el público. Pero sobre todo —y esta es una idea clave para el autor— no pretende un (inalcanzable) fin estratégico, sino hacer una “declaración simbólica pública” que va más allá de sus objetivos inmediatos. ¿A qué se refieren estas acciones más allá de ellas mismas? A una “guerra cósmica” o confrontación entre el Bien y el Mal. Es una oposición dicotómica en la que no hay términos medios. Existe una visión negativa del mundo real. Los terroristas no luchan principalmente contra otras visiones religiosas, sino sobre todo contra una visión laicizada y materialista del mundo incluso de su propia religión. Esta guerra cósmica convierte el fracaso de las acciones en victorias y sus ejecutores en márti-

res. Necesita, inventa y sataniza a los adversarios. Este proceso de legitimación simbólica y de satanización se realiza por etapas, que son detalladamente expuestas. La violencia religiosa ha proporcionado legitimidad a individuos alienados, grupos marginales e ideólogos visionarios. Pero siempre sobre la base de una lógica que el autor del libro ha buscado descubrir.

¿Cómo acabará todo este derramamiento de sangre? Según militares y políticos, cuyo actual exponente es Bush, en mi opinión, la “guerra contra el terrorismo” se puede ganar y es la gran guerra del siglo XXI. Pero los activistas ofrecen incluso su vida convencidos de que sus acciones se enmarcan en la gran “guerra cósmica” que nunca se va a perder a pesar de sus fracasos. Juergensmayer encuentra cinco posibles salidas: destrucción de los terroristas, “terrorizamiento” de los terroristas, victoria de los terroristas, separación de la religión y la política. Pero se inclina, a mi juicio acertadamente, por una quinta salida: curación de la política con la religión. “La religión da fuerza a la vida pública y proporciona una guía al orden moral. Y al mismo tiempo necesita el temple de la racionalidad y el juego limpio que los valores de la Ilustración proporcionan a la sociedad civil. Por tanto, la violencia religiosa no puede terminar hasta que se consiga cierto equilibrio entre las dos cosas: cierta afirmación de la moderación en la pasión religiosa y cierto reconocimiento de la religión elevando los valores espirituales y morales de la vida pública. De un modo curioso, pues, la cura para la violencia religiosa podría encontrarse al final en una renovada apreciación de la misma religión”, afirma el autor.

El libro, documentado en su parte descriptiva e inteligente en su par-

te analítica, resulta interesante, contiene apuntes muy sugerentes y es recomendable. Tiene algunos límites en las preguntas que no se hace o al menos no desarrolla. ¿Se debe reservar la denominación de “terrorismo religioso” a las acciones de personas o grupos relativamente minoritarios o habría que recordar las acciones de “terrorismo de Estado” —que desprecia las normas del derecho internacional y del derecho humanitario— bajo una apelación a Dios? ¿Predominan las “culturas de violencia” de matriz verdaderamente religiosa sobre la manipulación y legitimación religiosa por parte de intereses económicos, políticos o étnicos? ¿Por qué es una parte minoritaria dentro de las tradiciones religiosas la que escoge el terrorismo como presencia simbólica pública y la parte mayoritaria más bien busca contribuir a una cultura de paz? Habrá que seguir reflexionando.

Jesús María Alemany
Doctor en Teología
Director del Seminario
de Investigación para la Paz.
Autor del capítulo “El rostro
religioso de los conflictos armados”
en el *Anuario CIP 2002*.

DELIVER US FROM EVIL: WARLORDS, PEACEKEEPERS AND A WORLD OF ENDLESS CONFLICT

William Shawcross
A Touchstone Book,
Simon and Shuster Ed.
Nueva York, 2001,
457 páginas.

El periodista William Shawcross, especializado en política exterior de EE.UU. nos guía en este libro por los terrenos en los que ha sido necesaria una operación internacional de paz durante la última década. Desde el final de la guerra fría, la comunidad internacional, personificada en Naciones Unidas en general y en Kofi Annan en particular, ha llevado a cabo misiones de paz en territorios en los que la paz era inexistente y donde los pacificadores han tenido que enfrentarse con unos “señores de la guerra” que muchas veces han logrado lo que querían. Shawcross, como reportero in situ, escribe una crónica de lo que el mundo demanda de las organizaciones internacionales cuya misión es establecer o mantener la paz y cómo, en numerosas ocasiones, este es un objetivo imposible. Así, la reivindicación de que “algo hay que hacer” que surge cuando la opinión pública ve muerte y sufrimiento en sus televisores, suele ser afrontada de manera dubitativa o atropellada. Buscamos una paz instantánea para limpiar nuestras conciencias y, según el autor, la reconciliación de los pueblos en la historia ha sido cuestión de décadas y no de semanas. Así explica los sonados fracasos, en la última década, de Naciones Unidas, OTAN y Esta-

dos en misiones de paz. Fracasos que, en ocasiones, han llegado, incluso, a empeorar la situación conflictiva previa. Shawcross analiza cómo algo, que en épocas más religiosas sólo se le pedía a Dios (“Líbranos del mal”), ahora se le exige a instituciones humanas falibles.

El libro desarrolla un viaje por las operaciones de paz durante los años noventa acompañando a altos mandatarios y funcionarios internacionales, en especial a Kofi Annan, en quién el mundo parece haber depositado sus esperanzas de paz. Annan asume esa responsabilidad, cree en unas Naciones Unidas que alivien el sufrimiento mundial y trabaja infatigablemente para conseguirlo, algunas veces con más acierto, pero siempre con gran devoción e inteligencia, según el autor.

El terrorífico itinerario comienza en Phnom Penh, capital de Camboya. Ahí Shawcross, junto con el ex Secretario General Boutros-Ghali, asiste a “la más ambiciosa y audaz misión de paz jamás concebida por Naciones Unidas”, en la que durante tres años se situó al maltrecho reino de Camboya bajo el amparo de 20.000 pacificadores internacionales. Quizá sea Camboya el más alegre de los ejemplos que nos relata este libro, ya que, a pesar del actual Gobierno autoritario de Hun Sen y de la impunidad del genocidio del Jemer Rojo, la misión de paz sembró las semillas para que pudiese existir una sociedad civil que, después de un siglo de atrocidades, ahora conoce los derechos que le asisten. La lección que según Shawcross debemos aprender de Camboya es que no es suficiente con quince minutos de fama. Mientras se llevaba a cabo esta misión, los acontecimientos en Bosnia obligaban a redirigir las miradas internacionales. En ese

momento, el autor nos adentra en el conflicto de los Balcanes, desde Bosnia hasta Albania, Macedonia y Kosovo donde posiblemente los fracasos de las operaciones de paz han sido más sonados. Sebreñica y la muerte de miles de civiles bajo la protección de Naciones Unidas es un gran punto de inflexión para la organización, al menos para su Secretario General. En Bosnia comprobamos como una misión de paz, en cuyo interior hay conflicto, es terriblemente peligrosa. Las dudas de Occidente y los desacuerdos en el seno del Consejo de Seguridad fueron otros de los ingredientes de este malogrado esfuerzo.

Y si hablamos de intentos fallidos trágicos de mantener o crear paz, Shawcross nos conduce al corazón del fracaso de la supervisión internacional: África. Ruanda, Somalia, Congo, Sierra Leona, Zimbabwe son descarnados ejemplos de lo que no se debe hacer. En Somalia, cuando las fuerzas de paz estadounidenses cruzaron la línea de Mogadiscio, los rebeldes acabaron con la vida de dieciocho soldados. Como consecuencia, desde ese momento, el presidente Clinton retiró sus tropas de paz de cualquier situación de peligro lo que, según Shawcross, delata la hipocresía de Occidente que sólo quiere involucrarse de forma superficial y de cara a la galería en el mantenimiento de la paz y sin apenas riesgo financiero, político o humano. Sin financiación, sin aporte de tropas y sin voluntad política, las misiones de paz seguirán siendo una solución a medias. Annan confiesa que el genocidio ruandés ha supuesto la más terrible omisión de Naciones Unidas por la que manifiesta sentirse muy culpable. Y es que como recoge Shawcross de Burke “lo único necesario para que triunfe el mal

es que los hombres buenos no hagan nada”.

Este lamentable retrato que pinta el autor concluye con un atisbo de esperanza por que cree que de los errores se aprende y el mundo solamente le ha dedicado una década a la paz. El comienzo de nuevo milenio trae consigo la esperanza de haber aprendido la lección y de seguir contando con la tenacidad y honradez de Kofi Annan y de miles de anónimos funcionarios a las órdenes de la paz.

Kimmie Wise

Abogada y colaboradora del CIP.

**DESTERRADOS.
DESPLAZAMIENTO
FORZADO EN
COLOMBIA**

Mabel González Bustelo
Cuadernos para el Debate,
Nº 12, Médicos sin Fronteras,
Barcelona,
diciembre de 2001,
112 páginas.

Durante generaciones el desplazamiento interno en Colombia ha sido un fenómeno silencioso. Nadie sabe con certeza cuántas personas han tenido que abandonar sus tierras, víctimas del miedo a perder sus vidas. Familias enteras han tenido que optar entre internarse en la selva para robarle una parcela cultivable —de la que probablemente más tarde deberán huir—, o migrar a la ciudad para fundirse en la masa de pobres sin nombre que pueblan los cinturones de miseria.

Este fenómeno, del que se tienen los primeros registros en el siglo XIX, no fue materia de estudio en Colombia hasta la década de 1990. En este momento empezó a analizarse como una de las dimensiones más perversas del conflicto interno del país. De esta manera, el desplazamiento empezó a ser considerado una consecuencia de los enfrentamientos que se suceden entre los diferentes actores.

El trabajo de Mabel González Bustelo, perteneciente a la serie Cuadernos para el Debate de Médicos Sin Fronteras, propone un giro de 180 grados a esta perspectiva. Presenta la violencia, como un instrumento, un mecanismo para lograr la expulsión de la población civil de las zonas más ricas, o más atractivas, en beneficio de intereses económicos y políticos.

Sin negar la existencia de un conflicto que se ha prolongado por más de cincuenta años — enfrentando al Estado, grupos guerrilleros y paramilitares, en una espiral de violencia en la que cada uno justifica su proceder en las injusticias cometidas por el otro —, reducir la explicación del desplazamiento interno al producto de los combates entre la guerrilla y los paramilitares es una ecuación demasiado simple. Esta es la tesis central de este trabajo, en el que se evidencia la existencia de un fuerte vínculo entre el modelo político y económico, y la permanente expulsión de la población rural.

Las causas que producen el desplazamiento son numerosas, entre las que destacan: una ausencia tradicional del Estado, agudizada por el actual modelo neoliberal que aboga por una menor intervención estatal a todo nivel (sin tener en cuenta que en determinados territorios su presencia era ya prácticamente nula); un modelo de apropiación y repartición de la tierra por medio del cual el campesino amplía la frontera agrícola, destruyendo la selva para convertirla en tierras de cultivo, que tras pocos años debe ceder vendiéndolas o huyendo ante las presiones a la que es sujeto; un sistema de explotación de los recursos naturales, orientado exclusivamente a la exportación, y por lo tanto tendiente al monocultivo y la explotación de materias primas que no reciben mayor transformación antes de ser enviadas al extranjero; y una situación de indiscutible violencia política en la que diversos actores luchan por controlar zonas del territorio nacional, para lo cual pretenden repoblarlas con personas que consideran leales a sus intereses.

El éxodo es un proceso extensivo y continuo, que tradicionalmente

se ha dado a nivel individual y familiar, aunque últimamente se han presentado movimientos masivos. Quien abandona su lugar de origen no se desplaza una vez, va alejándose poco a poco, en busca de un lugar más seguro, donde el anonimato le permita fundirse con la masa de seres desposeídos que bajo la etiqueta de “pobres” parecen interesar poco a quienes motivan los desplazamientos.

Los desplazados colombianos, a diferencia de los de situaciones como las vividas en Timor Oriental, Chechenia o los Balcanes, no están unidos por una pre-identidad cultural, étnica o política. Básicamente son personas que han tenido la mala suerte de hallarse en el lugar menos indicado en el momento menos afortunado por ser áreas de combate, por hallarse en zonas particularmente interesantes desde el punto de vista de explotación agropecuaria o minera, o por ser terrenos en los que se proyecta alguna obra de infraestructura que valorizará dichas tierras.

Personas que no logran dar un sentido a lo que les ocurre y cuya situación de indefensión permite compararlos con los apátridas descritos por Hannah Arendt, en el período comprendido entre las dos Guerras Mundiales.

Su indefensión se hace patente cuando se analiza la política elaborada por el Estado para hacer frente a la situación. La violencia que se ejerce sobre los campesinos, mayormente representada en masacres y amenazas, no es realmente evitada o sancionada: contribuye al mantenimiento del poder y del modelo económico sostenido por las elites, por lo que no hay voluntad real de detenerla. Ello explicaría por qué el Estado no ha catalogado el desplazamiento como una violación a los dere-

chos humanos, y la razón por la que se ha optado por una política asistencialista que se limita a prestar una ayuda temporal a quien se declara como desplazado. Muchos prefieren prescindir de dicha declaración, dados los riesgos de estigmatización que conlleva.

El trabajo de Mabel González está poblado de afirmaciones tan contundentes y polémicas como esta. Se puede estar de acuerdo o no con ellas, pero cumplen su función: generar polémica sobre un fenómeno que no para de crecer, y sobre el cual aún pesa demasiado silencio.

Beatriz Sánchez Mojica
Abogada por la Universidad
de los Andes
Master en Acción
Solidaria Europea

LA RETIRADA DEL ESTADO

Susan Strange
Icaria/Intermón Oxfam,
Barcelona, 2001,
210 páginas.

Quizás la mayor tragedia en el análisis de los procesos sociales ha sido la separación conceptual para estudiar la arena económica y política o, si se prefiere, la fetichización de esa separación. En el campo de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales es donde, tal vez, las debilidades epistemológicas han sido más marcadas. Este trabajo de Susan Strange es un intento de superar esa pobreza conceptual y rearticular en una nueva dinámica cognoscitiva un conjunto de enfoques analíticos en el campo de la Economía Política Internacional. La perspectiva teórica de Strange supone una doble vía. Primero, una “desestatización” del análisis político: las relaciones de poder ya no están contenidas y condicionadas por un aparato estatal, racional y unificado, sino por un conjunto de actores que interactúan entre sí dentro de los límites de ese Estado y con el “medio ambiente”. En segundo término, se nos propone una politización de las relaciones de mercado, lo que requiere una redefinición de la actividad política y del poder. Si bien en el campo militar los Estados aún mantienen sus prerrogativas clásicas, la autora nos recuerda que en otro conjunto de relaciones de poder, sea en la producción de conocimientos y valores culturales, en la generación de crédito y administración de los recursos monetarios, o en el campo de la producción de bienes y servicios, el Estado ha perdido

capacidades y prerrogativas de forma creciente. Los actores privados muestran cada vez más su fortaleza para controlar y condicionar procesos complejos vis a vis el poder de las autoridades nacionales.

Más allá de las disquisiciones teóricas y con el fin de evitar la rigidez de los conceptos, el texto contempla un conjunto de investigaciones concretas sobre escenarios específicos de la realidad internacional. Así, siguiendo en parte la tradición analítica expresada en el enfoque de los “regímenes internacionales”, podemos observar la interacción de los diferentes actores a los que, en principio, sería prudente –siguiendo el espíritu del enfoque– no catalogar de políticos u económicos. Las conclusiones de los análisis, sean en el campo de las telecomunicaciones, la gestión del crédito internacional, los seguros o las mafias delictivas, son siempre las mismas: la complejidad de las interacciones frente a la imposibilidad o desinterés de los actores estatales clásicos, nos muestra una mayor iniciativa y “poder” de los agentes privados, no sólo a la hora de establecer agendas públicas (aquellas que influyen al conjunto de la sociedad) sino también para controlar los resultados de los procesos socio-económicos. El Estado es entonces “una fuente de autoridad más entre otras, con poderes y recursos limitados”. La mercantilización acelerada de la vida social a escala planetaria, impulsada y condicionada por procesos científico-técnicos cada vez más sofisticados y complejos, ha provocado que las fronteras y prerrogativas tradicionales del actor estatal se vean debilitadas y su capacidad de influir en los procesos menguada. En este nuevo terreno ambiguo, conceptual y fácticamente, es donde la Economía

Política Internacional, según Strange, debe sentar sus reales y animarse a la ardua tarea de una nueva conceptualización y análisis. Este nuevo enfoque debe estar basado en el estudio de la interacción de tres campos de fuerza específicos: los procesos tecnológicos, los mercados y la política, entendida como el juego de valores y voluntades públicas y privadas. Frente a la pérdida de poder e influencia de las autoridades estatales, ¿quién se hace cargo? Y aún más, ¿cuáles son las perspectivas del orden social a medio y largo plazo? La respuesta de la autora es “tímidamente optimista”. Muy tímida, agregaría, dado que los motivos de su optimismo son más bien difusos. Es más, con sus argumentos quizás no sería difícil armar una perspectiva pesimista sobre la salud del nuevo orden en gestación. El frente crediticio y monetario internacional es la mayor preocupación de Strange, aunque existen otros muchos escenarios en los que la nueva constelación del orden (o desorden) internacional podría empezar a resquebrajarse de manera dramática.

César Docampo
Politólogo y analista
en temas de seguridad
y conflictos regionales

Conflicto en Colombia

175

Bibliografía

SUSANA FERNÁNDEZ HERRERO

Conflicto en Colombia

LIBROS:

- Apter, David E. (ed.), *The Legitimization of Violence*, MacMillan Press LTD, Londres, 1997.
- Arnson, Cynthia J. (ed.), *Comparative Processes in Latin America*, Woodrow Wilson Center Press, Washington D.C., 1999.
- Bejarano, Jesús Antonio, *Una agenda para la Paz: aproximaciones desde la teoría de la resolución de conflictos*, TM Editores, Santa Fé de Bogotá, 1995.
- Bejarano, Jesús Antonio y otros, *El proceso de Paz en Colombia y la Política Exterior de Estados Unidos*, The Latin American Program, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C., 2000, N° 247.
- Bergquist, Charles, Ricardo Peñaranda y Gonzalo Sánchez (eds.), *Violence in Colombia 1990-2000: Waging war and negotiating peace*, Scholarly Resources Books, Wilmington (Delaware), 2001.
- Buscaglia, Edgardo, William Ratliff, *War and Lack of Governance in Colombia: Narcos, Guerrillas and U.S. Policy*, The Hoover Institution, Stanford University, Stanford, 2001.
- Clavijo Guevara, Claudia, Clemencia Peña, *La situación de los desplazados por violencia política en Bogotá*, Corporación Urbanos, Bogotá, 1993.
- *Cultivos ilícitos y proceso de paz en Colombia: una propuesta de cambio en la estrategia antidrogas hacia la solución política del conflicto*, Transnational Institute, Acción Andina, Santa Fé de Bogotá, 2000.
- Deas, Malcolm, Fernando Gaitán Daza, *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*, TM Editores, Santa Fé de Bogotá, 1995.
- *Derechos Humanos y Desplazamiento Interno en Colombia*, Conferencia Episcopal de Colombia, Bogotá, 1995.
- Díaz Uribe, Amparo, Darío Villamizar Herrera (eds.), *Paz y Guerra en Conflictos de Baja Intensidad: El Caso Colombiano*, Atípicos Editores, Santa Fé de Bogotá, 1996.
- *Fumigaciones y conflicto en Colombia: Al calor del debate*, Programa Drogas y Democracia, Transnational Institute, Ámsterdam, 2001.
- González Bustelo, Mabel, *Desterrados. Desplazamiento forzado en Colombia*, Cuadernos para el Debate, MSF-E, Barcelona, 2001, N° 12.

Susana Fernández Herrero es historiadora y responsable del Centro de Documentación del Centro de Investigación para la Paz (CIP)

- Martín Medem, José Manuel, "América Latina: exclusión y democracia controladas", *Anuario CIP 1999. Guerras en el sistema mundial*, CIP/FUHEM, Icaria, Barcelona, 1999.
- Matta Aldana, Luis Alberto, *Colombia y las FARC-EP: origen de la lucha guerrillera. Testimonio del Comandante Jaime Guaraca*, Txalaparta, Tafalla (Navarra), 1999.
- Molano, Alfredo, "El Plan Colombia: ¿un salto cualitativo en la guerra?", *Anuario CIP 2001. Políticas mundiales, tendencias peligrosas: claves sobre la realidad internacional*, CIP/FUHEM, Icaria, Barcelona, 2001.
- Sherman, Jake, *The Economics of War: the intersection of Need, Creed and Greed*, The Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C., 2001,
- Tortosa Blasco, José María, *El largo camino de la violencia a la paz*, Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante, 2001.
- *Un país que huye: Desplazamientos y Violencia en una Nación Fragmentada*, Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos (CODHES), Unicef-Colombia, Bogotá, 1999.
- Vargas Meza, Ricardo, *Fumigaciones y conflicto. Políticas antidrogas y deslegitimación del Estado en Colombia*, TM Editores/TNI/Acción Andina, Santa Fé de Bogotá, 1999.
- Vargas Meza, Ricardo, *Drogas, máscaras y juegos. Narcotráfico y conflicto armado en Colombia*, TM Editores/TNI/Acción Andina, Santa Fé de Bogotá, 1999.

ARTÍCULOS:

- Vera Grabe, "Una mirada sobre Colombia", *Papeles de Cuestiones Internacionales*, 1997, Nº 62, pp. 13-17.
- Román D. Ortiz, "Guerra Civil y descentralización de la violencia: el caso de Colombia", *Papeles de Cuestiones Internacionales*, 1998, Nº 65, pp. 69-81.
- Michael Shifter, "The United States and Colombia: Partners in Ambiguity", *Current History*, febrero de 2000, Vol. 99, Nº 634, pp. 51-55.
- Alfredo Molano, "Desterrados", *Papeles de Cuestiones Internacionales*, primavera de 2000, Nº 70, pp. 41-46.
- Martin Hodgson, "The coca leaf war: A report from Colombia-the front line in Washington's war on drugs", *The Bulletin of the Atomic Scientist*, mayo-junio de 2000, Vol. 53, Nº 3, pp. 36-45.
- Alfredo Molano, "The Evolution of the FARC: A Guerrilla Group's Long History", *NACLA Report on The Americas*, septiembre-octubre de 2000, Vol. XXXIV, Nº 2, pp. 23-31.
- Winifred Tate, "Repeating Past Mistakes: Aiding Counterinsurgency in Colombia", *NACLA Report on The Americas*, septiembre-octubre de 2000, Vol. XXXIV, Nº 2, pp. 17-19.
- Coletta Youngers, "Cocaine Madness: Counternarcotics and Militarization in the Andes", *NACLA Report on The Americas*, noviembre-diciembre de 2000, Vol. XXXIV, Nº 3, pp. 16-25.

- Guillermo Marín, “El abismo Colombiano”, *Política Exterior*, diciembre de 2000, N° 78, pp. 111-131.
- Álvaro Camacho Guizado, “Democracia, exclusión social y construcción de lo público en Colombia”, *Nueva Sociedad*, enero-febrero de 2001, N° 171, pp.19-33.
- José María Tortosa, “Plan Estados Unidos y Plan de Estados Unidos: otra mirada al Plan Colombia”, *Papeles de Cuestiones Internacionales*, primavera de 2001, N° 74, pp. 45-52.
- Joaquín Roy, “El Plan Colombia y la Unión Europea. ¿Quién paga los platos rotos?”, *Revista del Sur*, enero-febrero de 2001, N° 11-12, pp. 24-25.
- Malcon Deas, “Dialogue With Conflict”, *The World Today*, marzo de 2001, Vol. 57, N° 3, pp. 24-25.
- Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, “Neoliberalismo, cuestión agraria y conflicto social”, *Viento Sur*, marzo de 2001, N° 55, pp. 33-40.
- Juan Gabriel Tokatlian, “Colombia, el Plan Colombia en la región andina”, *Nueva Sociedad*, mayo-junio de 2001, N° 173, pp. 126-143.
- Alexandra Guáqueta, “Las relaciones USA-Colombia: Una nueva lectura”, *Análisis Político*, mayo-agosto de 2001, N° 43, pp. 32-54.
- Joaquín Roy, “Europa y el Plan Colombia: el doble discurso de la Unión Europea”, *Política Exterior*, septiembre-octubre de 2001, Vol. 15, N° 83, pp. 31-43.
- Miguel Eduardo Cárdenas, “Colombia: la persistente búsqueda de alternativas”, *Nueva Sociedad*, septiembre-octubre de 2001, N° 175, pp. 21-27.
- Daniel Oakman, “The Politics of Foreign Aid: Counter-Subversion and the Colombo Plan”, *Pacífica Review*, octubre de 2001, Vol. 13, N° 3, pp.255-272.
- Germán Márquez, “Medio ambiente y violencia en Colombia: Una hipótesis”, *Análisis Político*, septiembre-diciembre de 2001, N° 44, pp. 58-76.
- Winifred Tate, “Into the Andean Quagmire: Bush II Keeps Up March to Militarization”, *NACLA Report on the Americas*, noviembre-diciembre de 2001, Vol. XXXV N° 3, pp. 45-50.
- Hernando Perdomo, “Los nocivos efectos del Plan Colombia”, *Papeles de Cuestiones Internacionales*, invierno de 2001-2002, N° 76, pp. 127-134.
- Mabel González Bustelo, “Desterrados”, El desplazamiento forzado sigue aumentando en Colombia”, *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, enero-abril de 2002, Año 9, N° 27, pp. 41-78.
- Adam Isacson, “Colombia Peace in Tatters”, *NACLA Report on the Americas*, marzo-abril de 2002, Vol. XXXV, N° 5, pp. 10-13.
- Russell Crandall, “Clinton, Bush and Plan Colombia”, *Survival*, primavera de 2002, Vol. 44, N° 1, pp 159-172.

DIRECCIONES DE INTERNET:

- Amnistía Internacional - <http://www.amnestyusa.org/countries/colombia>
- Amnistía Internacional - <http://www.web.amnesty.org/web/ar2001.nsf/webamr-countries/COLOMBIA>
- Center for International Policy - <http://www.ciponline.org/colombia>

- Colombia Human Rights Network - <http://www.igc.org/colhrnet/>
- Colombia Policy Briefs - <http://www.colombiapolicy.org>
- Colombia Update - <http://www.ColombiaUpdate.com>
- Compañía Nacional para la Paz - <http://www.compaz.org.co>
- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - <http://www.codhes.org.co>
- Corporación Unidades Democráticas para el Desarrollo - <http://www.ceudes.org/plancolombia/ongcol.htm>
- Diálogo Inter-agencial en Colombia - <http://www.dial.org.co>
- Ejército de Liberación Nacional - <http://www.eln-voces.com>
- Equipo Nizkor - <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/colombia.html>
- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - <http://www.farc-ep.org>
- Human Rights Watch - <http://www.hrw.org/americas/colombia.php>
- Ideas para la Paz - <http://www.ideaspaz.org/entrada1.htm>
- Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos - <http://www.ilsa.org.co>
- Medios para la Paz - <http://www.mediosparalapaz.org/quesco.htm>
- Nodo 50 - <http://www.nodo50.org/pazcolombia>
- Oneworld - <http://www.oneworld.net/specialreports/colombia>
- Paz y Tercer Mundo - <http://www.ong-ptm.org/col.htm>
- Peace Brigades International Proyecto Colombia - <http://www.peacebrigades.org/colombia-e.html>
- Plan Colombia - <http://www.plancolombia.com>
- Proceso de Paz - <http://www.procesodepaz.com/>
- Proveedor de información y acceso a internet - <http://www.colnodo.apc.org>
- Transnational Institute - <http://www.tni.org/drogas>
- Unicef - http://www.unicef.org.co/04c_01.htm
- Vía Alterna - <http://www.viaalterna.com.co/viaalterna.htm>